**Colombia: el Miedo en Oposición a la Razón en la Política de Defensa y
Seguridad Democrática 2002 – 2006**

Carmen Cecilia Urzola Maldonado

Universidad Nacional de la Plata
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
La Plata, Buenos Aires, Argentina

2019

**Colombia: el Miedo en Oposición a la Razón en la Política de Defensa y
Seguridad Democrática 2002 – 2006**

Carmen Cecilia Urzola Maldonado

Trabajo de investigación presentado por: Carmen Cecilia Urzola Maldonado, como
requisito parcial para optar al título de Magister en Comunicación y Derechos Humanos

Director: Julio Armando Morales Guerrero

Doctor en Filosofía

Universidad Nacional de la Plata

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

La Plata, Buenos Aires, Argentina

2019

Agradecimientos

Agradezco al director de la presente investigación, al doctor Julio Armando Morales Guerrero, quien fue mi maestro en el pregrado de filosofía, siempre riguroso y crítico, a la vez amable y comprensivo. La paciencia, comprensión y amistad del profesor Julio Morales, han hecho posible concluir ésta investigación, por ello, gracias.

Agradezco también, al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien, en medio de la adversidad durante su exilio en Buenos Aires, iluminó el rumbo de esta investigación; a Flavio Rapisardi, por aportar ideas para la delimitación de la investigación, las cuales fueron tenidas en cuenta, y a Cristian Alarcón Casanova por los elementos aportados para escribir crónicas, los cuales, se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el presente documento.

En general, agradezco a todo el equipo del programa de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos; a Jorge Jaunarena, quien en ese entonces era el director de la Maestría, por su optimismo, comprensión y apoyo. Agradezco también a Nicolás Colombo, por estar siempre.

Dedico la presente investigación a todas las víctimas del Conflicto Armado Colombiano, especialmente a mi padre, Heriberto Urzola Muñiz (Q. E. P. D), quien fue asesinado en 1988 en el marco del Genocidio a la Unión patriótica (UP). Su máxima aspiración como campesino era que sus hijos estudiaran y mi máxima aspiración es honrar su memoria y que haya justicia. También dedico esta investigación a mi primera maestra, mi madre Isabel Elena Maldonado Feliciano (Q.E.P.D.).

Contenido

Introducción.....	5
1. Amenazas Reales en la Política de Defensa y Seguridad Democrática	9
1.1. La Salud Pública: un Negocio Privado	11
1.2. Violación del derecho al trabajo: fortalecimiento del conflicto armado	14
3. La pobreza en Colombia	19
2.1 Política De Defensa y Seguridad Democrática	28
2.2 Segundo Capítulo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática “Amenazas”: el Terrorismo	44
2.3. El negocio de las drogas ilícitas	52
2.4. Las Finanzas ilícitas.....	56
2.5. El Tráfico de armas, municiones y explosivos	59
2.6 El secuestro y la extorsión	60
2.7 El Homicidio	63
3. ¿Seguridad para Quiénes?: una Mirada desde Thomas Hobbes	67
3.1 Doctrina de Seguridad Nacional y Política de Defensa y Seguridad Democrática: dos caras de la misma moneda en Colombia	70
3.2. Políticas de Seguridad en Latinoamérica: Tolerancia Cero en la Hegemonía de los Estados Unidos de Norte América	75
4. El miedo como soporte de la Política de Defensa y Seguridad Democrática	84
4.1 Propaganda en la PDSD: “Colombia es pasión”	109
4.2 Movimientos sociales conviviendo con el miedo: luchas sociales y Protestas	118
Bibliografía.....	122

Introducción

La construcción del miedo en el contexto de la Política de Defensa y seguridad Democrática (PDSD) en Colombia, entre los años 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez ejercía como presidente de la nación, giró en torno a institucionalizar unas amenazas y en ocultar otras; apelando al miedo como emoción primaria en oposición al uso de la razón.

Para lograr instituir ciertas amenazas adoptó el nuevo enemigo que lograron construir los Estados Unidos de Norte América (EE. UU.) luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001: el terrorismo. Las amenazas instituidas en el contexto de la PSDS fueron: 1. El terrorismo, 2. El negocio de las drogas ilícitas, 3. Las finanzas ilícitas, 4. El tráfico de armas, municiones y explosivos, 5. El secuestro y la extorsión y 6. El homicidio. Al lograr instituir las anteriores amenazas se negó la existencia del entonces ya largo conflicto armado; hecho que permitió justificar la arremetida bélica contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), ahora recién desarmadas por el acuerdo de paz que firmaron con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016.

Al instituir las anteriores amenazas se puso en práctica el primer principio propagandístico de Goebbels, el cual consiste en la simplificación y en el enemigo único, ese enemigo único fue precisamente la amenaza número uno, antes mencionada: el terrorismo, la cual estaba representada por las FARC-EP.

Una política sustentada en el miedo a las FARC-EP carece de fundamento cuando se cae en la cuenta de que las FARC-EP fueron las guerrillas más antiguas de América Latina, las cuales, si bien se consolidaron en 1964, su origen data de 1949, es decir, que para el año 2002 más de dos generaciones (contando las generaciones cada treinta años) habían convivido con ellas y con la consiguiente violencia política y la de los narcotraficantes, paramilitares, delincuencia común y con el terrorismo de Estado, siendo esta última la más violenta e inconsecuente en el contexto de un Estado democrático.

En consecuencia, haberle dado la prioridad a este factor de temor exigía otros elementos explicativos para que el miedo que representaba esa organización para algunos, como los terratenientes, se presentara como miedo de toda la sociedad. Esta falacia no debe pasar inadvertida ya que fue el soporte de la asunción de la señalada política de Estado; de esa manera, muchos de los más pobres y desamparados en la sociedad no tenían reparos en aprobar la cruenta acción de exterminio de los campesinos sindicados de encubrir a las guerrillas porque eran vistos como cómplices de los generadores del terror, siendo que en realidad eran las víctimas en primera instancia de la guerra entre los distintos frentes en combate, ya que vivían inermes ante los actores armados de distinto origen.

Las amenazas que se lograron ocultar (Amenazas reales) frente a la mayoría de los colombianos, están intrínsecamente relacionadas con la seguridad humana; estas son: 1. La violación del derecho al trabajo, 2. El limitado acceso al derecho a la salud y 3. La pobreza. Siendo estas amenazas con las que convivía la mayoría de colombianos, su ocultamiento para posicionar el terrorismo y las otras amenazas ya mencionadas que surgen precisamente del concepto de terrorismo como las más relevantes y que afectaban, por ejemplo, a los vendedores ambulantes, requirió de una serie de estrategias comunicacionales basadas en la manipulación, para lo cual, Uribe Vélez, contó con la colaboración de los diferentes medios de comunicación; a su vez, apeló a las dos masas artificiales analizadas por Sigmund Freud en “Psicología de las Masas y Análisis del yo”: Iglesia y ejército, a través de las cuales, logró mayor aceptación hasta tal punto de ser reelegido en primera vuelta con el 62% del total de los votos en las elecciones del año 2006. Se trató, pues de un acontecimiento político importante en la historia reciente de Colombia, gestado por los grandes medios de comunicación social, lo cual significó una verdadera desnaturalización de dichos medios que pasaron a ocupar el puesto de brazo propagandístico de una facción en lucha por el poder; a saber: la de cierta oligarquía de extracción terrateniente y conservadora que hizo alianza con distintos grupos de poder económico, donde confluyeron desde agricultores tradicionales hasta narcotraficantes, y accedieron al poder político; como lo prueba el hecho de que buena parte de los miembros del parlamento fueran luego procesados por tráfico de drogas o por la conformación y apoyo a grupos paramilitares; situación que condujo a tratar de desprestigiar y capturar la independencia del poder judicial por parte de esta misma alianza.

Con los anteriores elementos, Uribe Vélez, logró construir un miedo como emoción primaria, es decir, no razonado: cuando se repite por diversos medios que existe una amenaza, al ser las amenazas el anuncio de la provocación de un mal, se evoca inmediatamente al miedo, ¿Miedo a qué?

Noam Chomsky, describió diez (10) estrategias de manipulación mediática, la segunda de ellas consiste en “Crear problemas y después ofrecer soluciones”. El problema creado por Uribe Vélez por medio de la PDSD fue el terrorismo y la solución fueron él y su PDSD.

La presente investigación tiene el propósito de indagar cómo se construyó el miedo y a qué se le tuvo miedo en el marco de la PDSD. Partimos del hecho de que el miedo que primó en el contexto de la implementación de la política pública, PDSD, a partir del primer período de gobierno de Uribe Vélez, 2002-2006, no fue el resultado de algún conocimiento racional, por eso, no nos referimos al miedo como sentimiento proveniente del conocimiento que por alguna deliberación se ha obtenido de determinada circunstancia amenazante, sino, al miedo como emoción primaria, es decir, que el miedo no era a las FARC-EP, sino otro tipo de miedo posiblemente oculto en el inconsciente de muchas personas en Colombia, al cual, Uribe Vélez, apeló a través de la publicidad orquestada por los diferentes medios de comunicación y de sus propios discursos.

Para intentar aproximarme a una posible comprensión acerca de cómo se construyó el miedo durante la PDSD (2002-2006) organicé la presente investigación de la siguiente manera: en el primer capítulo denominado “Amenazas reales”, analizo tres amenazas que atentaban directamente contra la seguridad humana del pueblo colombiano, la pobreza extrema, la vulneración de los derechos a la salud y al trabajo. Estas amenazas debían ser las que atemorizaran a la mayoría de colombianos, ya que convivían con ellas diariamente en las ciudades, siendo las circunstancias reales que mantenían en riesgo la persistencia de la vida y la dignidad de las personas.

En el segundo capítulo: “Amenazas instituidas” iniciamos contextualizando la PDSD, luego analizamos cada una de las seis amenazas registradas en el documento de la PDSD: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el secuestro y la extorsión, el tráfico de armas, municiones y explosivos y el homicidio, para así dar cuenta

de dónde venía el terrorismo. En el tercer capítulo, “Seguridad para quiénes: una mirada desde Thomas Hobbes”, se analiza la idea de la *seguridad* desde Hobbes y se hace un recorrido histórico para exponer el origen de la *seguridad* en Centro y sur América y particularmente en Colombia. Finalmente, en el cuarto capítulo, se recurre a una serie de autores para tratar de aproximar a una explicación, acerca de cómo se construyó el miedo y a qué se le tuvo miedo, estos autores son: Sigmund Freud, Corey Robin, Antonio Damásio, Aristóteles, entre otros.

1. Amenazas Reales en la Política de Defensa y Seguridad Democrática

“La libertad es inútil si la gente no puede poner comida en sus estómagos, si no pueden tener refugio, si el analfabetismo y la enfermedad siguen persiguiéndolos.”

Nelson Mandela

Las amenazas reales en esta investigación, se refieren a aquellas que imposibilitan el desarrollo del potencial humano y por lo tanto violan el fundamento mismo de los derechos humanos; la dignidad. Estas son: la violación del derecho al trabajo, la violación al derecho a la salud y la pobreza extrema, con dichas amenazas convivían la mayoría de colombianos antes de elegir a Uribe Vélez, como presidente.

Un concepto relativamente nuevo en el que enmarcamos las anteriores amenazas, es el concepto de seguridad humana, el cual vio la luz en el Informe sobre Desarrollo Humano presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994. Allí se argumenta acerca de la necesidad de que haya un consenso a nivel mundial que ponga el énfasis y genere contratos para la garantía de la seguridad humana; aunque la base para dichos fundamentos ya se encuentre en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales que entró en vigor en 1976 (PNUD, 1994). Posteriormente, tras la Cumbre Mundial de 2005 y con base en el documento final de dicha Cumbre, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Resolución 60/1 el 16 de septiembre de 2005.

En la Resolución 60/1 de 2005, se define la seguridad humana en el párrafo 143 como “el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano”. La dinámica de la guerra en Colombia se ha caracterizado porque los diferentes gobiernos han jugado un papel protagónico no sólo a través de la creación de ejércitos paramilitares, sino también porque han dejado de lado su obligación para garantizar aquellos derechos relacionados con la seguridad humana, centrando su interés en la

seguridad del Estado; lo cual ha acrecentado la pobreza y la violencia en Colombia, como veremos más adelante.

Jorge Giraldo, en el documento “Contribución al entendimiento del Conflicto Armado” explica cómo se retroalimenta la guerra “en la medida en que los grupos armados ilegales cierran las posibilidades del desarrollo y la democracia en los escenarios locales, la única oportunidad de supervivencia y reconocimiento para los sectores jóvenes de la población es la vinculación a los ejércitos privados” (Giraldo, 2015, pág. 34). Paralelamente para hacer frente a dichos ejércitos privados se vincula a una gran masa de jóvenes al ejército nacional, a la policía y a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, es decir, que se constituye la guerra en la principal fuente y/o alternativa para devengar un sueldo y para sentirse reconocidos, pertenecientes a un proyecto. Los jóvenes de las zonas rurales deciden ingresar a algunas de las fuerzas en conflicto, antes de ser reclutados y obligados a hacer parte de alguno de los actores del conflicto (en Colombia, es obligatorio prestar el servicio militar).

Las amenazas reales, entonces, son precisamente las que han alimentado el conflicto armado y su larga duración. Correlativamente, disminuir la severidad de esas amenazas mediante la garantía de los derechos básicos a la salud y al trabajo era la política pública alternativa a la de la intensificación de la guerra y habría permitido atenuar la pobreza y la desesperación de las grandes masas campesinas de la población que con seguridad se habrían sustraído de la economía ilegal del cultivo, procesamiento y tráfico de drogas. La intensificación del conflicto armado significó una disminución de la soberanía del Estado en los territorios, generando el caldo de cultivo para toda clase de negocios ilícitos. Tal vez esto explica el manifiesto desinterés por lograr acuerdos de paz que pudieran abrir un horizonte para la vida civilizada y democrática. Todavía hoy es agónico el acuerdo de paz logrado con las guerrillas izquierdistas y no se vislumbra un des-escalamiento, cierto de la violencia.

1.1. La Salud Pública: un Negocio Privado

En el congreso de constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrada el 7 de abril de 1948, se definió el derecho a la salud como el estado de absoluto bienestar físico, mental y social sin distinción de religiones, credos políticos o clases sociales. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25¹ especifica el derecho a la salud como un derecho fundamental, también, el Pacto Internacional DESC de 1966, en el artículo 12², reconoce el derecho a la salud como fundamental, por la anterior normatividad internacional, los Estados partes deben tomar medidas específicas para que todas las personas gocen de este derecho. En este aparte, nos referiremos específicamente al funcionamiento del sistema de salud en Colombia y cómo al pertenecer este a entidades privadas y a particulares; la salud, ha dejado de ser un derecho para convertirse en un servicio que se compra y se vende, a donde lo importante son los dividendos que le proporciona a los empresarios, por encima del derecho a la vida misma.

En la Constitución Política de Colombia de 1991, si bien en el artículo 44³ se especifica que la salud es un derecho, este derecho cobija solamente a los niños. El artículo 49⁴

---

¹ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

² Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

- A) La reducción de la morbilidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
- b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
- c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

³ Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

⁴ La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la

establece que la salud es un servicio público, es decir, no se habla del derecho a la salud, además, se especifica que este servicio puede ser prestado por particulares bajo el control del Estado.

Con base en la Constitución Política de Colombia de 1991, se aprobó en 1993 la ley 100, ponencia presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, a través de esta ley se creó el Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), así mismo esta ley creó dos tipos de regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, nos referiremos específicamente al régimen contributivo, para mostrar el funcionamiento general de la salud como un negocio privado y sus consecuencias en la vida y muerte de las personas.

El régimen Contributivo de salud en Colombia es de carácter obligatorio para todos los trabajadores, los aportes son del empleador y del trabajador. Inicialmente se esperaba que el régimen contributivo solventara al régimen subsidiado, pretensión que fracasó debido al desempleo y a la pobreza de la mayoría de la población, temas que abordaremos en los próximos subcapítulos.

La ley 100 adoptó un modelo de competencia regulada, en el cual, los privados participan y compiten en la prestación del servicio bajo la regulación del Estado. “La prestación de los servicios fue organizada bajo un sistema de aseguramiento en el cual el asegurador, llamado Empresa Promotora de Salud (EPS), está obligado a garantizar un paquete de servicios contenido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), mediante Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS)” (CEPAL, Equidad y protección judicial del derecho a la salud en Colombia, 2014). No obstante, el cubrimiento de los servicios de salud no es integral por parte de las EPS, muchos medicamentos y procedimientos no los cubre el POS, lo que obliga a los pacientes a hacer uso de la acción de tutela (mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los individuos, conocida en la Argentina como

---

salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señaladas en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad (Constitución Política de Colombia).

Recurso de Amparo), por ejemplo; “los casos reiterados de la negativa de la implantación del lente intraocular, a pesar de la autorización de la cirugía de cataratas es muestra de la violación del principio de integralidad del derecho fundamental a la salud y de la violación al principio de integralidad del tratamiento o del evento requerido con necesidad” (Echavarria, 2013). Por hechos similares entre 1999 y el primer semestre de 2003, según la Defensoría del Pueblo se presentaron 145.360 tutelas, reclamando el derecho a la Salud. Desde la implementación de la ley 100 a la fecha se habla de más de tres millones de tutelas. Este tipo de diligencias afecta no sólo la salud física de los pacientes, también afecta la salud mental, demanda tiempo, gastos de transporte, hace colapsar el sistema de justicia, etc.

La ineficacia del sistema de salud ha violado no solo el derecho a la salud, sino también, el derecho a la vida. El tristemente famoso “Paseo de la Muerte”⁵ nombrado así por los diferentes medios de comunicación, al relatar los diferentes casos en que cientos de adultos y menores de edad en el transcurso del desplazamiento a diferentes clínicas y hospitales en busca de atención urgente y debido a la negativa para prestarles los primeros auxilios, perdieron la vida, Jaime Gañan en su tesis doctoral “los muertos de la ley 100” argumenta que en Colombia, prevalece la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud, por esta razón el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no sólo es ineficaz, sino que viola el derecho a la vida.

---

⁵ El paseo de la muerte se da porque las EPS, no cuentan con oficinas de atención al usuario, ni con una red de servicios contratada, aunque recibe el pago por paciente de lo que se llama capitación, entonces, al no estar los hospitales, afiliados a las EPS, niegan a los pacientes la atención general y los servicios de emergencias, luego en el transcurso de la búsqueda de atención, la gente muere.

1.2. Violación del derecho al trabajo: fortalecimiento del conflicto armado

En 2006 la lista de los países con mayor tasa de desempleo urbano lo encabezó Colombia, con un 12.7%, seguida de Uruguay con 11.7%, Argentina con un 10.5% y Brasil con 10.1%, según el estudio “Panorama Laboral 2006 para América Latina y el Caribe” realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el año 2002 cuando apenas iniciaba el primer período de la PDSD; el índice de desempleo en Colombia estaba en 15,7 %, el gobierno de Uribe Vélez, a través de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo” esto, específica la ley es su objetivo, no obstante, en la práctica los hechos fueron opuestos, porque dicha ley le dio más garantías a las empresas⁶ y les restó derechos a los trabajadores y trabajadoras. Las medidas más criticadas de esta ley se encuentran en el artículo 25, en el cual, se dictan las siguientes medidas: 1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.). 2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.). En cuanto al trabajo los domingos y festivos la ley argumenta que es habitual trabajar dos (2) domingos al mes y el recargo ya no sería del 100 por ciento como lo era en la ley 50 de 1990, la cual lo especifica en el inciso 1 del artículo 29⁷ sino del 75 por ciento, especificado en el artículo 26, inciso 1, reduciendo, el 25 por ciento el valor de la hora de trabajo los días domingos y festivos.

Posteriormente, el acto legislativo 01 de 2005, modificó el sistema de seguridad social al modificar el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Los incisos y párrafos que se le agregaron a dicho artículo, tenían el fin de aumentar la edad para adquirir la

---

⁶ En la exposición de motivos de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 se presenta la siguiente justificación al hecho de ampliar la jornada nocturna: con el fin de dar la posibilidad a algunos sectores de la economía de abrir las posibilidades para contratar nuevos trabajadores sin que la carga laboral impida esa creación de nuevos espacios de trabajo. Esto se requiere especialmente para empresas comerciales y de servicios, de las cuales se exige una gran demanda de prestaciones, pero debido a los recargos existentes, los empresarios no pueden atenderla en las horas en que los usuarios la requieren- Ampliar la jornada como está prevista en este artículo tiene que traer como consecuencia mayor ocupación laboral.

⁷ 1. El trabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

pensión, entre otras medidas, privilegiando a las empresas y vulnerando el derecho de los trabajadores y trabajadoras.

El trabajo como derecho fue un logro de las luchas sociales, las cuales cobraron innumerables vidas humanas, entre ellas se encuentran las mujeres incineradas dentro de una fábrica en New York y a los Mártires de Chicago, reprimidos y asesinados por defenderse de la represión y la explotación laboral. Los empleados trabajaban 18 horas en el contexto de la revolución industrial, en ese entonces, aún no se hablaba del derecho al trabajo, al parecer fue en la Constitución Política de México de 1917 donde se menciona por primera vez el derecho y las garantías laborales⁸. Al finalizar la primera guerra mundial, se creó como parte del tratado de Versalles, la OIT; la primera organización tripartita de la historia (conformada por trabajadores, empleadores y gobierno). La función de la OIT, consiste en redactar convenios entre las partes y hacer recomendaciones. El primer convenio que elaboró relacionado con atender las demandas de las luchas sociales fue el Convenio-C001 sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)⁹.

---

⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

⁹ Artículo 2: En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación:(a) las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza;

De manera progresiva desde 1917 se fueron regulando las condiciones dignas de trabajo, hasta quedar consignado como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948¹⁰. Dado que la DUDH no tiene un carácter vinculante al ser una Declaración, en 1966 el Pacto de los DESC positivizó, estos derechos que nacieron con la revolución industrial, también conocidos como derechos de segunda generación y que al igual que los derechos civiles y políticos, nacidos con la revolución francesa, fueron vinculantes, gracias a la organización y a las luchas sociales.

La OIT continuó su labor, consagrando en los convenios 87¹¹, 98¹², 151¹³ y 154¹⁴ el derecho de los trabajadores a la sindicalización y a la negociación colectiva¹⁵; derechos de los trabajadores que el acto legislativo 01 de 2005 en Colombia, vulnera explícitamente en el tercer párrafo del artículo 1, cuando especifica que "Para adquirir el derecho a la

---

(b) cuando, en virtud de una ley, de la costumbre o de convenios entre las organizaciones patronales y obreras (a falta de dichas organizaciones, entre los representantes de los patronos y de los obreros) la duración del trabajo de uno o varios días de la semana sea inferior a ocho horas, una disposición de la autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones o representantes supradichos, podrá autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas en los restantes días de la semana. El exceso del tiempo previsto en el presente apartado nunca podrá ser mayor de una hora diaria; (c) cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.

¹⁰ Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

¹¹ Artículo 11. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

¹² Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

¹³ Artículo 7. Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.

¹⁴ Artículo 5. Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.

¹⁵ Según la corte constitucional en sentencia C/013-93 cuando se limita la opción de negociación colectiva de los trabajadores, también se está violando el derecho a la sindicalización.

pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones", más adelante en el parágrafo tres (3)¹⁶, se reitera que cualquier otra norma nacional o internacional, perderá validez en cuanto entre en vigencia este acto legislativo.

El beneficio a las empresas privadas por encima del derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadores colombianos, se puntualizó, con la eliminacióm de la mesada catorce¹⁷ y con la liquidación del seguro social, entidad encargada de garantizar la prima media. Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, además se incrementó la edad para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en cincuenta y siete (57) años para mujeres, y sesenta y dos (62) años para los hombres, a partir de 1 de enero de 2014.

En síntesis, la violación del derecho al trabajo, el cual se materializó con la ley 789 de 2003 y con el decreto 01 de 2005, durante el primer período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), representó un retroceso que nos acerca a la época de la revolución industrial. El derecho al trabajo el cual costó innumerables vidas humanas ganarlo, se perdió en Colombia debido a que el gobierno de Uribe Vélez, privilegió a las empresas privadas¹⁸.

---

¹⁶ Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010"

¹⁷ La mesada 14 era, una mesada adicional a la que tenían derecho los pensionados, la cual era pagada en el mes de junio, el acto legislativo 01 de 2005, puso una sería de requisitos para recibir dicha mesada, como, por ejemplo, 1. Que la suma de la pensión no fuese mayor a tres salarios mínimos hasta el 31 de junio de 2011 2. La recibirían las personas que hasta el 31 de junio de 2011 cumplan los requisitos de semanas más edad, etc, es decir que a partir de esa fecha (31 de junio de 2011) ya nadie recibiría la mesada 14.

¹⁸ Al parecer el origen de esta decisión del gobierno de Uribe Vélez, está directamente relacionada con el acuerdo Stand Bye del Fondo Monetario Internacional, el cual pone condiciones que favorecen a las empresas privadas. Debido a la necesidad de continuar avanzando en el tema puntual que nos ocupa en esta investigación, se nos imposibilita ahondar más en los antecedentes de la violación del derecho al trabajo entre 2002 y 2006 en Colombia.

La vulneración sistemática de dos (2) de los cinco (5) derechos básicos por parte del Estado colombiano, los cuales son: El derecho al trabajo¹⁹ y el derecho a la salud, ha acrecentado la pobreza en Colombia, hecho que vulnera, además; el derecho a la vivienda²⁰ y el derecho a la alimentación²¹ de las mayorías. Pese a que estos derechos se encuentran consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991, no se respetan por parte del Estado, esta realidad nos permite acercarnos a una explicación acerca de por qué el conflicto armado ha prevalecido por más de sesenta años: las injusticias sociales son algunas de las razones de la guerra en Colombia.

---

¹⁹ Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

²⁰ Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

²¹ Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser

3. La pobreza en Colombia

La pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de las personas y de las familias; recorta el acceso a la salud, al empleo, a la educación, a créditos, a vivienda, en resumen imposibilita llevar una vida digna (PNUD), es decir, los diferentes factores que constituyen la pobreza, imposibilitan el ejercicio de los derechos de las personas, precisamente porque en medio de la pobreza, las posibilidades de desarrollar el intelecto, de participar políticamente, incluso de pensar, son mínimos ya que prima la necesidad de sobrevivir, incluso a cualquier precio.

La apertura al neoliberalismo a partir de la década del noventa en Colombia, a través de la Constitución Política de 1991²² y las múltiples consecuencias de esta política económica, dejaron entre otros problemas, en desventaja a los pequeños empresarios colombianos por la incapacidad para competir con las grandes multinacionales, hecho que acrecentaría el desempleo, la pobreza y la violencia.

Colombia ha medido la pobreza en dos líneas: la línea de pobreza extrema o línea de indigencia, la cual cubre solamente los gastos más esenciales o de sobrevivencia y la línea de pobreza, esta se define con base en una canasta más amplia de necesidades. Las personas (hogares o familias) que tienen ingresos por debajo de esta línea, pero por encima de la línea de miseria son pobres, pero no tan pobres, que su salud y la posibilidad de realizarse esté severamente limitada.

Entre el año 1995 y 2000 el índice de pobreza en Colombia pasó de 49,3 a 59,9 por ciento, de los cuales el 42,8 por ciento recibió ingresos por encima de la línea de pobreza (CEPAL, Colombia). Lo que significa que aproximadamente el 17 por ciento de la población vivía en la indigencia.

A partir de 1990 “el CONPES, aprobó el “Programa de modernización de la economía colombiana, la primera fase de este programa que duraría dos años, consistió en eliminar

---

²² Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

los controles administrativos a las importaciones para luego disminuir los aranceles” (CEPAL, Seis Reformas de Política Pública, 1995). El entonces, presidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, posesionado en agosto de 1990, encontró en el anterior programa la base para continuar con la apertura económica de corte neoliberal, tal apertura quedaría consignada en la Constitución Política de Colombia de 1991.

“El ciclo de crecimiento económico iniciado en 1990, se mantendría hasta 1995, ya en 1996 se reflejó el fuerte receso del boom de la demanda iniciada el año anterior y se manifestó en una caída en las importaciones, incluidas las de consumo” (Luis Quintero, 1998, pág. 37). En cuanto al producto interno bruto (PIB), teniendo en cuenta, la apertura económica; se esperaba durante el cuatrienio 1995 y 1998 un aumento de 5,63% en el PIB, pero sólo se logró un 2,80%, es decir la mitad. La situación empeoró para el siguiente cuatrienio hasta 2002, fecha para la cual se esperaba un crecimiento del 3,69% anual y solo alcanzó 0,36% efectivo anual.

El aumento de la pobreza entre los años 1995 y 2000 (59,9%) se debió, ampliamente, a los cambios en las condiciones de participación en el mercado laboral, en los retornos a los factores y en la distribución de los ingresos (Colmenares, 2003).

La década de los noventa, además, se caracterizó por la intensificación de la violencia, por parte de las guerrillas tradicionales, del narcotráfico, del ejército, de la delincuencia común y de los paramilitares, estos últimos se consolidaron como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997.

Por su parte, el gasto en defensa y seguridad se intensificó significativamente; “mientras en 1990 representaron el 2,1%, ya en el año 2001, el gasto en defensa y seguridad es de \$ 6,3 billones, suma que representa el 3,2% del PIB; no obstante, al sumarle el 80% de los recursos norteamericanos en ayuda militar, \$2,3 billones, el gasto total resultante es de \$8,6 billones, esto es, 4,4% del PIB. Al sumar la deuda pública y los gastos en justicia en 2001 el gasto aproximado en seguridad y justicia, alcanzó 14,66% de PIB mientras que la inversión social fue solo de 4,75% del PIB” (Sarmiento Anzola).

Con base en el anterior contexto social y político, donde el objetivo principal del gobierno fue intensificar la guerra, dejando de lado las necesidades básicas del pueblo en su

mayoría, cuyo nivel de pobreza se aproximó al 60% de la población total, intentamos aproximarnos a una posible explicación para intentar comprender, por qué el pueblo en su mayoría eligió en las elecciones del año 2002 un gobierno cuya plataforma política se sustentó en la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” que buscaría intensificar a sangre y fuego la violencia. El pueblo no sólo eligió esta política pública, sino que, además, la defendió durante sus ocho años de vigencia, bajo el gobierno de Uribe Vélez, y participó en su ejecución. Varios académicos atribuyen la aceptación por parte de un número significativo de la población colombiana de la PDSD, al fracaso de los diálogos de paz que adelantó, el entonces presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) en San Vicente del Caguán, con las FARC-EP. Para comprender el fracaso de estos diálogos de paz, hay que tener en cuenta que Pastrana Arango aprobó el Plan Colombia²³, mientras adelantaba los diálogos de paz con las FARC-EP, hecho que hizo desistir al equipo negociador de seguir adelante con dichos diálogos de paz, porque resultaba evidente que el gobierno de Pastrana Arango, procuraba la guerra y no la paz.

En el primer período de la PDSD de Álvaro Uribe Vélez, (2002 y 2006) la pobreza se redujo a 46,8%, pero la indigencia subió a 20,2%, aunque existen dudas acerca de las cifras exactas de la disminución de la pobreza dado que el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), cambió su metodología de medición de la pobreza en 2006, hecho que suscitó múltiples críticas por parte de economistas, investigadores e investigadoras a quienes se les imposibilitó hacer sus respectivas investigaciones y comparaciones estadísticas con los años anteriores. Lo que queda claro es que entre 2002 y 2006 Colombia, se posicionó junto a Brasil, Bolivia, Honduras y Guatemala como uno de los cinco países con mayor desigualdad a nivel regional (CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2009, pág. 77). En el mismo informe de CEPAL, se afirma que el ingreso medio por persona en el décimo decil, es decir, los más ricos en Colombia superan veinticinco (25) veces el ingreso del 40% de los más pobres. En Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, sólo lo supera alrededor de nueve (9) veces.

---

²³ Noam Chomsky, muestra como Colombia se consolidó como el mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos, reemplazando a Turquía y a nivel de América Latina y el Caribe, tampoco es superado por ningún País. En 1999 afirma Chomsky, Colombia recibió 360 millones de dólares para la lucha contra las drogas, en el marco del Plan Colombia.

2. Amenazas Instituidas en Colombia 2002-2006

“Todo el arte de la guerra se basa en el engaño”

Sun Tzu

Entendemos por amenazas instituidas en el marco de la política pública PDSO en Colombia, a aquellas amenazas que Álvaro Uribe Vélez, logró instituir con el consenso de un gran número de la población colombiana, usando como medio para este fin: leyes, discursos políticos, el apoyo de los medios de comunicación y la alianza estratégica con los Estados Unidos de América, posicionando así el Terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, la finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio como las amenazas más importantes y relevantes para toda la ciudadanía y contra las que había que luchar²⁴ dejando de lado otras amenazas con las cuales, convivía la mayoría del pueblo colombiano, relacionadas con la seguridad humana.

Históricamente el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar los derechos fundamentales, por el contrario, ha hecho la guerra con la puesta en práctica de distintas estrategias.

Para lograr el consenso a nivel nacional e internacional y poder instituir las amenazas antes mencionadas, Álvaro Uribe Vélez, llevó a cabo dos estrategias. La primera consistió en modificar la Constitución Política y sobornar a los congresistas para adecuar la legislación a los fines específicos de la señalada política de seguridad y la prolongación del mandato presidencial, procurando legitimar una situación social y política que permitiera captar la ayuda internacional para justificar la guerra contra las FARC-EP y su financiación. La segunda consistió en usar su propio discurso como estrategia propagandística, frente a dicha estrategia el rol de los *Mass Media*, fue la clave.

---

²⁴ Política de Defensa y Seguridad Democrática, en la carta del presidente de la república Álvaro Uribe Vélez dice: “Frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley”

En cuanto a la primera estrategia, esta tenía como fin quitarle el Status político a las FARC-EP, negando la existencia del conflicto armado colombiano para posicionar al presente grupo subversivo como una amenaza terrorista. A nivel nacional lo primero que hizo Uribe Vélez, el cuarto día después de posesionarse como presidente de Colombia, fue declarar el Estado de Conmoción Interior²⁵ con el decreto 1837 de 2002, publicado el 11 de agosto y con el decreto 1838²⁶ publicado el mismo día puso un nuevo impuesto destinado a la PSDS del 1,2 por ciento del patrimonio líquido de los colombianos. Posteriormente en diciembre del mismo año con la ley 782 de 2002 prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 -llamada de orden público–, pero abolió el requisito de conceder Status político a los grupos armados para iniciar negociaciones destinadas a su desmovilización (Buitrago, 2006). Adicional a estas normas, el plan de gobierno de la PDSD especificó el reclutamiento de soldados campesinos²⁷ para reforzar sus zonas de origen, la conformación de redes de informantes²⁸ entre otras medidas que violaban el DIH al vincular a la sociedad civil a la guerra.

Cuando concluyeron los 90 días del Estado de conmoción Interior, Álvaro Uribe Vélez solicitó una prórroga, la cual, la Corte Constitucional declaró inexecutable, a través de la sentencia C-327/03. Al fracasar esta intención, en diciembre presentó el acto legislativo 02 de 2003, también conocido como “Estatuto Antiterrorista”, a través del cual

---

²⁵ Constitución política de Colombia, Artículo 213. “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

²⁶ Decreto 1838 de 2002, artículo 1. “*Impuesto para preservar la seguridad democrática*. Créase el impuesto destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la seguridad democrática” y mediante el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, artículo 1º. Se decide “Declarar el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente decreto”.

²⁷ Revista semana: Más de 10 mil soldados campesinos se incorporaron al Ejército, {en línea} <http://www.semana.com/noticias/articulo/mas-10-mil-soldados-campesinos-incorporaron-ejercito/58819->

²⁸ Ibid, en {en línea} <http://www.semana.com/noticias/articulo/uribe-creara-red-informantes/53491-3>

modificaba los artículos 15, 18, 24 y 250 de la constitución política de Colombia para enfrentar el terrorismo.

El “Estatuto Antiterrorista” tenía como fin concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares para realizar detenciones, allanamientos, registros domiciliarios, interceptaciones, etc. La Corte Constitucional rechazó dicho “Estatuto Antiterrorista”, no obstante, la represión se ejerció manifiestamente mediante detenciones, interceptación de las comunicaciones privadas, allanamientos, y demás actos contra las garantías constitucionales de la ciudadanía; siendo muchos los asesinatos que tuvieron lugar en casi la totalidad del territorio sin saberse sobre los autores de tales crímenes. De hecho, se aplicaron las restricciones y medidas de control contempladas en el mencionado estatuto que no fue admitido por la Corte Constitucional; estos fueron los elementos substanciales del primer período de gobierno de Uribe Vélez, en contraposición a la justicia y a las leyes, pues se violaron las libertades fundamentales, pilar básico de las democracias, tema que también analizaré más adelante.

Conviene recordar que la Constitución Política adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, introdujo la figura de Estado de emergencia denominada *Conmoción interior* en reemplazo del *Estado de sitio*, que contenía la vieja Constitución Política Nacional (1886) como recurso excepcional del gobierno para enfrentar circunstancias de inestabilidad política ocasionadas por protestas sociales y levantamientos armados, además de un ataque desde el exterior. El cambio de la figura de emergencia se hizo para tratar de poner fin a un largo período de la historia política colombiana caracterizado por vivir bajo Estado de sitio casi permanente con la consecuencia de haberse creado una cotidianidad sin ejercer los derechos de ciudadanía propios de las sociedades democráticas; una generación entera creció en Colombia sin experimentar la vida ciudadana moderna caracterizada por el ejercicio de la libertad para moverse, expresarse y protestar públicamente; pues, para todas esas actividades de la vida cotidiana, inclusive hasta para mudarse de una residencia, había que pedir y obtener una autorización expresa de las autoridades. Para superar ese deplorable estado se eliminó de la Constitución la mencionada figura restrictiva de los derechos del ciudadano, proponiendo en su lugar esta denominada “conmoción interior” que también permitía poner en suspenso las garantías y libertades de la vida ciudadana, pero restringiendo su uso por parte del poder ejecutivo. Contra estas restricciones para decretar el Estado de

conmoción interior luchó decididamente el presidente, Álvaro Uribe y consiguió finalmente restaurar un potencial Estado de sitio para orientar recursos y acciones sociales hacia la guerra contra las FARC-EP, a quienes ya les había quitado el Status Político. Guerra que propiamente llegó a su fin con el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos inmediatamente posterior al de Uribe Vélez, pero que se encuentra en trance de reanimación con la retoma del poder de las fuerzas políticas de Uribe Vélez, a través del gobierno de Iván Duque en el año 2018.

La intervención ciudadana y el apoyo del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, hicieron posible la derogación del mencionado acto legislativo 02 de 2003, argumentando, entre otras cosas, que con este se suprimían los derechos fundamentales y dejaban sin efecto el Estado de Derecho. En 2004 nuevamente la corte constitucional, a través, de la sentencia C-816/04 declaró inexecutable el acto legislativo de 18 de diciembre 02 de 2003 o Estatuto Antiterrorista.

Respecto a esta misma estrategia en el plano internacional, Uribe Vélez, buscó reformar el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual consiste en la ayuda mutua entre los países americanos, frente al ataque por cualquier otro Estado²⁹. Para acomodar la lucha interna contra el “terrorismo” y el narcotráfico al conflicto armado y recibir el apoyo de los países vecinos, era necesario que dichos países clasificaran formalmente a las FARC-EP, como un grupo terrorista. El 11 de febrero de 2003; Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Argentina emitieron un documento conjunto en el que declararon terroristas a las FARC-EP (TIEMPO, 2003). Por su parte, “Venezuela, Ecuador y Brasil, se negaron a hacer dicha declaración y entre los motivos que dieron, afirmaron que si calificaban como terroristas a las FARC-EP, no podrían ayudar en el proceso de paz en Colombia, puesto que el Estado quedaría impedido para efectuar negociaciones de paz con una banda de criminales y en cambio podía legitimar dicha negociación con combatientes que de alguna manera tuvieran ese reconocimiento o condición de fuerzas políticas” (Amad, 2003).

---

²⁹ TIAR, Artículo 3.1: Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente el 29 de mayo de 2003, Estados Unidos, incluyó a las FARC-EP en la lista de Narcotraficantes foráneos de importancia, con dicha inclusión, el gobierno de Uribe Vélez, recibió alrededor de cien (100) millones de dólares para la guerra (Tiempo, 2003). Reformar la Constitución Política de Colombia de 1991 e incluso, intentar modificar el TIAR para justificar la guerra contra las FARC-EP, en contraposición a una solución negociada, arrojó los resultados esperados por Uribe Vélez. El 16 de junio de 2003, casi un año después de posesionarse como presidente, salió a la luz el documento de la PDSD con los argumentos y los recursos necesarios para justificar y materializar la guerra contra las FARC-EP.

Para instituir el terrorismo como la principal amenaza de la cual se derivan las otras cinco amenazas (El negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio) fue necesario la construcción de un enemigo absoluto, que en palabras de Schmitt, es aquel enemigo que justifica el uso de la fuerza, porque es percibido como una amenaza, (Schmitt, El Concepto de lo Político, 1963, pág. 74). Opuesto este a un enemigo político, con el que se puede dialogar y consensuar.

El enemigo absoluto sólo se debe combatir, mediante ese recurso, el gobierno reduce a la calidad de enemigo absoluto a las FARC-EP, hecho que le permite sostener que toda oposición a su política de gobierno está a favor del terrorismo; es así como sitúa los movimientos sociales y las protestas ciudadanas como formas de apoyo al terrorismo, intentando evitar la oposición política. Al intentar evitar la controversia en el ámbito de la vida pública, termina ejerciendo el poder de forma autoritaria, dicha circunstancia niega la esencia de la democracia que es suplantada por un latente autoritarismo. Esta es la razón por la cual se ejerce el poder político bajo Estado de conmoción interior, caracterizado por la suspensión de las libertades ciudadanas y demás garantías constitucionales. Una gran parte de la población al estar persuadida de los grandes riesgos y presa del temor, acepta las restricciones.

A Schmitt “se le suele reconocer como uno de los intelectuales alemanes que se vincularon con el nacional-socialismo alemán” (López, 1996, pág. 139). Esta claridad nos permite acercarnos a la posibilidad de comprender cómo la relación amigo/enemigo que elabora Schmitt (Schmitt, El Concepto de lo Político , 2009, págs. 59-60). En el contexto

de un Estado autoritario marca este límite en cuanto al otro, en cuanto al enemigo. En contraposición a la constitución, a las leyes y bajo Estado de sitio, se ejerce el poder político bajo la modalidad de un Estado autoritario para neutralizar al enemigo. Uribe Vélez, a través de la política pública que denominó PDSD posicionó al Estado como el amigo que enfrentaría al enemigo: el terrorismo, representado en las FARC-EP.

La segunda estrategia consistió en atacar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas, Uribe contestaba a sus opositores con explosiones de rabia, contraataques verbales y groseros. Cada vez que era confrontado optaba por el choque frontal, así se enfrentó a los periodistas y académicos como Fernando Garavito, Alfredo Molano, Daniel Coronel, Ignacio Gómez, Gonzalo Guillén y al corresponsal del Newsweek Joseph Contreras. Todos, sin excepción, tuvieron que salir del país por amenazas contra sus vidas (Fierro, 2014). Debido a que tanto el rol de los Mass Media, el rol de las propagandas, como también la lucha de las organizaciones sociales entre 2002 y 2006 serán analizados en el cuarto capítulo de este documento, sólo diré en este aparte que la segunda estrategia puesta en práctica por Uribe Vélez, consistió en usar su discurso como herramienta o como estrategia propagandística.

Las amenazas, entonces, son el anuncio de la provocación de un mal grave y se constituyen como un delito por ser un ataque al sosiego y a la tranquilidad en el normal desarrollo de la vida (Enciclopedia Jurídica). Construyendo en los individuos y grupos el sentimiento de miedo y la necesidad de sentirse seguros.

Enfatizar en ciertas amenazas, como la “amenaza comunista” desde la doctrina de seguridad nacional, posibilitó los golpes de Estado que sufrieron los países del Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). Si bien, existe una gran diferencia entre la doctrina de seguridad nacional y la PDSD, esta radica en que la primera se puso en marcha bajo dictaduras militares y la segunda en democracia, las consecuencias en materia de violaciónn sistemática a los DDHH y al DIH son bastante similares.

2.1 Política De Defensa y Seguridad Democrática

El documento que presenta la PDSD, se encuentra dividido en cinco capítulos: I. La Política de Defensa y Seguridad Democrática, II. Amenazas, III Objetivos Estratégicos, IV. Seis Líneas de Acción: coordinar, fortalecer, consolidar, proteger, cooperar y comunicar y V. Financiación y Evaluación.

Dado que no es nuestro objetivo analizar todo el documento de la PDSD, sino, sólo el segundo capítulo intitulado “Amenazas”, haré una breve síntesis de la totalidad de dicho documento, cuyo objetivo es poner en contexto esta política pública de manera general.

“Carta de Álvaro Uribe Vélez”:

El documento de la PDSD, inicia con una carta escrita por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, en la cual empieza afirmando que “recuperar el orden y la seguridad son el requisito cardinal para la vigencia de las libertades y de los derechos humanos”, posteriormente aclara que la PDSD se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Afirma que este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Continúa la presentación diciendo que no hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disenter no signifique exponer la seguridad personal (Justamente las discrepancias y el discernimiento hizo que cientos de profesionales tuvieran que irse al exilio durante el gobierno de Uribe Vélez).

Más adelante manifiesta que “la antípoda de la democracia es el terrorismo, frente al cual sólo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley. Los colombianos no cederemos ante esta amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía”. Continúa asegurando que recuperará la seguridad de los ciudadanos sin limitar sus libertades. Resalta la importancia de la libertad de prensa en Colombia y asegura que seguirá siendo el ejemplo en América Latina, para lo cual se compromete a no restringir de ninguna manera dicha libertad. Nuevamente, retoma el tema del terrorismo para reiterar que se

requiere la ayuda de la ciudadanía para derrotarlo, finalmente advierte que no se debe confundir a las fuerzas de seguridad como un actor de guerra o de conflicto, sino que la determinación de luchar contra el terrorismo es lo que legitima a las instituciones.

Llama la atención que, en la anterior carta, el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, resalta que la democracia no es contraria a la seguridad. Los principios fundamentales de la democracia desde Platón, Aristóteles, Rousseau, entre muchos otros, son la libertad y la igualdad. Ya mencionamos que lo primero que hizo Uribe Vélez, el cuarto día de la posesión, fue declarar Estado de excepción, violando las libertades fundamentales, es decir, violando la esencia de la democracia.

Seguida a la carta de Uribe Vélez, la ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, hace una presentación de la PDS. En dicha presentación Ramírez, explica el proceso que se llevó a cabo para realizar el documento de la PDS resaltando que se hicieron diferentes consultas tanto a intelectuales, como a la sociedad en general, pone de manifiesto el deber de toda la sociedad de apoyar su implantación y que esta sea de largo plazo, por ello la propone de 2002 hasta 2012.

I Capítulo de la PDS: definición y fundamentos

La PDS es definida como “el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada”.

Se argumenta que la seguridad democrática se funda en tres pilares:

1. En la protección de los derechos de todos los ciudadanos, 2. La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas y 3. La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos. Concluye en esta primera parte del primer capítulo, diciendo que la fuerza pública del Estado, sola no puede derrotar las amenazas a la población, que es indispensable el apoyo de toda la sociedad.

“Democracia y Derechos Humanos”: se vuelve a resaltar que “esta política es diferente a lo ocurrido en otras partes del continente donde la población sufrió los abusos de un excesivo poder coercitivo del Estado, los derechos de los colombianos se ven amenazados fundamentalmente por la incapacidad histórica de la democracia colombiana”, concluye esta parte diciendo que sin un absoluto respeto a los derechos humanos nunca habrá reconciliación.

“control territorial y acción coordinada del Estado”: se argumenta que la primera condición para cumplir con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho es la consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio, porque con dicha presencia se garantizará el buen funcionamiento de la justicia en todo el territorio nacional.

Bajo el título **“Cooperación y solidaridad”:** se dice que “la responsabilidad primordial de velar por los derechos y libertades del ciudadano es del Estado, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Pero la seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: es responsabilidad de todos”. En cuanto a la solidaridad, se menciona la necesidad y el deber de pagar el nuevo impuesto para contribuir con la seguridad.

“Eficacia y austeridad”: se menciona la legalidad de la fuerza pública, la cual se encargará de disuadir, prevenir y responder de manera eficaz los ataques contra la población. Se destaca que, así como los ciudadanos pagarán el impuesto para la seguridad, el gobierno y la fuerza pública responderán a los principios de eficacia.

El sub capítulo intitulado: **“Transparencia y Juridicidad”:** se refiere a que “todas las actuaciones del Gobierno serán transparentes y se someterán al escrutinio público. Fortalecer la cultura de la honestidad y de la transparencia, con mecanismos y herramientas efectivas para erradicar la corrupción, es una prioridad”. También se menciona, en este aparte que se sancionará cualquier violación a los derechos humanos que cometa la fuerza pública o cualquier otra entidad del Estado.

Seguidamente en el subcapítulo **“Políticas nacionales y respuestas locales”:** se explica que la PDSD, es una política integral del Estado con líneas transversales de acción de

aplicación nacional, partiendo desde lo local con el apoyo de las autoridades locales y desde la sociedad civil.

“Defensa nacional”: aquí se afirma que “la necesidad de atender la seguridad interior no implica un descuido de la defensa nacional, a la que se otorgará la debida prioridad”. El presente aparte finaliza con la siguiente afirmación: “la naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo y el negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que, en el caso colombiano, al igual que en el de muchos otros países que hoy enfrentan este tipo de amenazas, se desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional”.

“Multilateralidad y corresponsabilidad”: bajo este título se dice que “el terrorismo como método para atentar contra la estabilidad del Estado es la mayor amenaza a la democracia en Colombia y el mundo”. Se enuncia allí que “las medidas y acciones contra el terrorismo se desarrollarán como una política de Estado, sin intereses partidistas ni burocráticos y en concordancia con los convenios internacionales suscritos por Colombia”. Se concluye este aparte con la siguiente afirmación: “el negocio de las drogas a nivel internacional pone en peligro la vida de los ciudadanos”.

“Seguridad y Desarrollo”: en el presente aparte de la PDSD, se argumenta que “la seguridad no será la única preocupación del Gobierno Nacional, pero sí la primera. No hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad: son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales”. Se explica, también, que de la seguridad depende el desarrollo económico y el acceso a la educación.

El último subcapítulo de esta primera parte lleva por título; **“La opción de la negociación”:** Llama la atención que este aparte cuente sólo con un párrafo de nueve (9) renglones, en el cual se dice que “El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades”.

La PDSD se caracterizó por ser inconsecuente, dado que el discurso organizado en este documento en general y el primer capítulo en particular, iba en contravía, por ejemplo,

con las múltiples violaciones a los derechos humanos que hubo precisamente con la puesta en práctica de la PDS, las cuales especifico más adelante.

Se destacan en lo relacionado con el control territorial; las detenciones masivas tanto de líderes sociales como de personas del común, se calcula que entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente en Colombia (cinco personas en promedio cada día) (Juristas, 2007). Las cuales, eran dejadas en libertad por falta de pruebas, hecho que violó las libertades fundamentales y generó miedo y terror por parte de la PDS en las diferentes regiones del País. Las víctimas de estos encarcelamientos y sindicaciones fueron de muy diversas condiciones, pues hubo muchos campesinos jornaleros, pequeños propietarios, estudiantes, obreros fabriles, intelectuales y maestros de escuelas; todos sufrieron encarcelamientos más o menos prolongados, la pérdida de su economía familiar y la destrucción de sus hogares, con el agravante de quedar expuestos a ser luego asesinados por bandas de paramilitares abanderadas de la lucha contra las guerrillas izquierdistas y sus bases de apoyo que denominaban milicianos; fueron muchas las personas humildes que sufrieron estos atropellos y llenaron de encono sus corazones, teniendo que abandonar sus territorios y ocultarse en los barrios de las grandes ciudades, aterrorizados y empobrecidos. Esta es una de las más crueles catástrofes humanitarias sufridas en Colombia durante los últimos tiempos y específicamente durante el primer gobierno de Uribe Vélez, 2002- 2006.

Segundo capítulo de la PDS, “Amenazas”.

En el segundo capítulo de la PDS, que lleva por título “Amenazas” se hace referencia a que “la seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los intereses vitales de la nación, como lo establece la Constitución Política, está hoy expuesta a una serie de graves amenazas, ligadas entre sí y con frecuencia de carácter transnacional”. Más adelante, se dice en el documento: “La corrupción, es igualmente una amenaza grave y será combatida de la manera más decidida por el Gobierno Nacional, como lo será la criminalidad común. Pero las siguientes amenazas constituyen un riesgo inmediato para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio”.

Debido a que dedicaremos un subcapítulo completo a analizar cada una de las amenazas presentadas en este segundo capítulo de la PDSD, el cual constituye el eje central de nuestra investigación, no entraremos a desglosar la presentación en este espacio de cada una de las amenazas antes mencionadas, sino, más adelante.

El tercer capítulo de la PDSD lleva por título; “Objetivos estratégicos”:

Se empieza afirmado en este capítulo que “los siguientes son los objetivos estratégicos que es necesario alcanzar para contrarrestar las amenazas a la seguridad y cumplir con el objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio”.

El tercer capítulo de la PDSD, está dividido en cinco objetivos generales y cada uno de ellos, cuenta con unos objetivos específicos, estos últimos sólo se mencionan, pero no hay ninguna explicación acerca de cómo se desarrollarán: el primer objetivo general es: “consolidación del control Estatal del territorio”. Los objetivos específicos son los siguientes: “I. La recuperación gradual de la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios, II. Incremento de la judicialización de delitos de alto impacto social, III. Extensión y fortalecimiento de la administración de justicia y de las instituciones del Estado en las zonas en las cuales se ha fortalecido el control estatal, IV. Disminución de las denuncias por violación de los derechos humanos”

Segundo objetivo general; “Protección de la Población”:

Objetivos específicos: “I. La desarticulación de las organizaciones terroristas, II. Reducción del secuestro y la extorsión, III. Reducción del homicidio, IV. Prevención del desplazamiento forzoso y facilitación del retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, y V. Reincorporación a la vida civil de las organizaciones, grupos o individuos que desistan de la violencia”.

Tercer objetivo general; “Eliminación del Comercio de Drogas Ilícitas en Colombia”:

Objetivos específicos: “I. Interdicción aérea, marítima, fluvial y terrestre del tráfico de drogas e insumos, II. Erradicación de los cultivos de coca y amapola, III. Desarticulación de las redes de narcotraficantes, IV. Incautación de bienes y finanzas del narcotráfico”.

Cuarto objetivo general; “Mantenimiento de una Capacidad Disuasiva, Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas”: Este objetivo general, sólo tiene un objetivo específico: “I. Protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales”.

El quinto y último objetivo general es: “Eficacia, Transparencia y Rendición de Cuentas”: Los objetivos específicos son: “I. Obtención de un mayor impacto mediante la administración óptima de los recursos, II. Generación de ahorro mediante la revisión de las estructuras y los procesos administrativos III. Desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.

IV. Capítulo de la PDSD

Se mencionan seis líneas de acciónn: “coordinar, fortalecer, consolidar, proteger, cooperar y comunicar”. Coordinar la acción del Estado, fortalecer las instituciones del Estado, consolidar el control del territorio nacional, proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación, cooperar para la seguridad de todos y comunicar las políticas y acciones del Estado”.

I. “Coordinar la acción del Estado; consejo de Seguridad y Defensa Nacional”: en esta primera línea se especifica que “el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional serán las instancias en las que el presidente de la República coordinará con los ministros y la Fuerza Pública la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática”. En cuanto a la Junta de Inteligencia Conjunta, se dice que “será el órgano donde se coordinará la inteligencia estatal y estará integrado por los directores de los organismos de inteligencia del Estado. Tendrá la responsabilidad de producir análisis consolidados de inteligencia estratégica, para que el presidente de la república y el ministro de defensa tengan la información necesaria para la toma de decisiones; de traducir en requerimientos

de inteligencia las políticas de seguridad del Gobierno; y de coordinar la distribución de tareas, promoviendo la especialización y evitando así la duplicidad de esfuerzos”

“Ministerio de defensa”: En cuanto a esta entidad, se afirma que “tendrá la responsabilidad de asegurar que los recursos que se le asignen tengan un mayor impacto en la seguridad, mediante una mejor administración y un proceso de planeación más eficiente”.

“Las estructuras de apoyo”: se manifiesta que “las estructuras de apoyo están sustentadas en una filosofía de trabajo en equipo y no en una relación jerárquica entre la Fuerza Pública, los organismos de investigación y control del Estado y las autoridades judiciales. En este esquema, todas las entidades involucradas actúan dentro de su competencia, pero en forma coordinada, con el objetivo común de investigar y analizar ordenadamente los delitos”

II. “Fortalecer las instituciones del Estado: fortalecimiento del sistema judicial”.

“Colombia requiere un ordenamiento jurídico moderno contra la violencia y la inseguridad. El Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para introducir legislación que permita afrontar con éxito el terrorismo, en concordancia con las obligaciones que se derivan de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si es necesario, se buscará la modificación de algunos artículos de la Constitución para este fin, sin afectar las libertades o las garantías ciudadanas”. Se enfatiza en el documento en la necesidad de “una lucha frontal contra la impunidad para reducir la delincuencia”. Más adelante se afirma que “las reformas a la política criminal incluirán la abolición de la excarcelación para crímenes como el narcotráfico, así como la aplicación de los principios de la justicia restitutiva para los delitos sin pena privativa de la libertad”. Se mencionan seguidamente que “el Gobierno apoyará la racionalización de la administración de justicia y la promoción de la profesionalización y especialización de sus funcionarios. Igualmente, ha promovido la reforma constitucional de la fiscalía general de la nación, con el fin de instaurar un esquema acusatorio que fortalezca la naturaleza investigativa de esta institución”. Los últimos dos apartes del presente documento hacen referencia a que “se fortalecerán los exitosos esquemas de construcción de prisiones” y finalmente “se desarrollará un sistema

de información compartido por todas las entidades que hacen parte del sistema de justicia criminal”.

“Fortalecimiento de las Fuerzas Militares”: En el presente aparte del documento en mención, se manifiesta el compromiso de las fuerzas militares (FM) para defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional; protegiendo a la población civil de quienes la amenazan. Más adelante, se reitera que el servicio militar será obligatorio y finalmente, se menciona la importancia de la protección de las fronteras por donde salen las drogas.

Fortalecimiento de la policía nacional: “El eje fundamental de la misión de la Policía Nacional será proteger el ejercicio de los derechos y libertades públicas, luchando contra el delito, la criminalidad y el terrorismo, de acuerdo con las prioridades establecidas por una política criminal integral”. Se mencionan las capacitaciones para hombres y mujeres de la policía nacional y el respeto de estos a los derechos humanos, seguidamente se afirma que la policía hará presencia en todo el territorio nacional y que se construirán redes de cooperación civil, entre otras medidas.

Fortalecimiento de la inteligencia: “para lograr una labor más efectiva del Estado colombiano frente a las organizaciones criminales, se fortalecerán los mecanismos de coordinación y la complementariedad de las agencias de seguridad y de inteligencia”. En esta dirección se dice que “la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el DAS, y la Fiscalía Nacional trabajarán de manera coordinada en la recolección e intercambio de inteligencia sobre el terreno, con el propósito de elevar los niveles de efectividad operacional” y se resalta el rol del DAS: “El Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia estratégica, en coordinación con los demás organismos de la Junta de Inteligencia Conjunta”. Conviene recordar aquí que este organismo, en la ejecución de esta directriz incurrió en variados y abominables crímenes que pasaron por las detenciones extrajudiciales, las torturas y desapariciones de personas y manifiestos asesinatos de ciudadanos; todo ello por razón de sus opiniones críticas frente al gobierno. Tan numerosos fueron los crímenes de este organismo que el mismo gobierno optó por eliminar dicha institución gubernamental, la cual, dicho sea de paso, dependía directamente de la Presidencia de la República.

Fortalecimiento de las finanzas del Estado: “la Política de Defensa y Seguridad Democrática, busca también contribuir al fortalecimiento de la economía y la generación de empleo, a través del estímulo a la inversión y a las actividades productivas”. Al respecto, se arguye que la inversión social requiere un ajuste fiscal, indispensable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y para asegurar la financiación necesaria y, en consecuencia, amenaza con penalizar fuertemente la evasión tributaria.

III. **“Consolidar el control del territorio nacional”:** Se trata, entonces, del ciclo de recuperación y consolidación, los argumentos en este aparte son bastante breves: “este proceso se llevará a cabo de manera gradual continua y con cobertura nacional para contener, desarticular y disuadir a las organizaciones armadas ilegales, proteger a la población y restablecer la autoridad de las instituciones democráticas”.

Seguidamente, en el aparte que lleva por título **“Recuperación del control estatal del territorio”:** se menciona sucintamente que “el Estado y las fuerzas de seguridad, recuperarán el territorio gradualmente, empezando por aquellas zonas que se consideren estratégicas”.

El tercer capítulo de la PDSD continúa con el siguiente subcapítulo: **“Mantenimiento del control estatal del territorio”:** se afirma que “una vez restablecido el control de la Fuerza Pública sobre el territorio, unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional, mantendrán las condiciones de seguridad y protegerán a la población civil, permitiendo así el trabajo de los organismos de investigación criminal y de control del Estado en la zona”.

En cuanto al siguiente subcapítulo **“Consolidación del control estatal del territorio”:** se menciona que “una vez garantizadas las condiciones básicas de seguridad, el Estado ejecutará una política integral de consolidación territorial, restableciendo el funcionamiento normal de la administración de justicia, fortaleciendo la democracia local, atendiendo las necesidades más urgentes de la población, extendiendo los servicios del Estado e iniciando proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo”.

Seguidamente, en lo que se refiere a **“Zonas de rehabilitación y consolidación”:** se dice que “El proceso de consolidación territorial se inició con dos zonas de rehabilitación y

consolidación en municipios de Arauca, Bolívar y Sucre (Las zonas de Bolívar y Sucre, a que se refiere, son más conocidas como los Montes de María, por ello se mencionan dos zonas y se nombran tres departamento) Sin bien, un fallo de la Corte Constitucional, acabó con esta figura del Estado de conmoción, seguirán adelante los programas de recuperación de estas dos zonas. La experiencia de los Montes de María en Bolívar y Sucre y de Arauca reafirma la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado mediante una mayor y más activa presencia de la Fuerza Pública”.

“Plan de seguridad integral de fronteras”: En el presente subcapítulo se expone que “de manera paralela a las zonas de rehabilitación y consolidación, se ejecutará un Plan de Seguridad Integral de Fronteras, para fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios fronterizos”

En el aparte sobre **“Seguridad urbana”:** se dice que “mediante políticas y programas de seguridad se asegurará la convivencia ciudadana, evitando que los problemas de convivencia en las zonas rurales se repliquen en las ciudades”. Se menciona el rol de los alcaldes, el rol de la justicia, algunas experiencias en Bogotá y el deber ciudadano y del sector privado de contribuir a la seguridad. Todas estas advertencias a lo largo del documento se dirigen a legitimar la recurrente actividad de los gremios en materia de protección de sus intereses sin esperar a que sea el Estado quien, poseedor del monopolio de la fuerza, les garantice dicha protección, pues siempre se reitera que la ciudadanía y las organizaciones privadas tienen el deber de propiciar su propia seguridad, la cual, como se deduce fácilmente, se consigue armándose cada persona y creando cooperativas de seguridad, es decir, grupos armados de autodefensa. Lo que en efecto se configuró con las bien conocidas acciones criminales de eliminación de ladrones, subversivos, milicianos y campesinos revoltosos o simpatizantes de las guerrillas. Esta es la fuente de las muchas masacres y atrocidades que tuvieron lugar durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia”: Se enfatiza en el presente subcapítulo en que “los programas sostenibles de desarrollo para la población de cultivadores serán una de las principales herramientas para acabar con los cultivos ilícitos. Es necesario que los programas alternativos sean realistas y sostenibles, que ofrezcan sustitución de ingresos a las familias campesinas e indígenas que viven del cultivo de la

amapola y de la coca, y que cuenten con el apoyo financiero de todos los países implicados en el negocio de las drogas ilícitas, de acuerdo con el principio de la corresponsabilidad”. Se menciona la importancia de consolidar los territorios, teniendo en cuenta que la meta es la erradicación de todos los cultivos ilícitos, también se enfatiza en la importancia de los programas sostenibles, el desmantelamiento de las redes del narcotráfico y el fortalecimiento del marco jurídico y la reducción del consumo.

“Desarticulación de las finanzas de las organizaciones terroristas y de narcotráfico”: Se dice que la estrategia consiste en “la recolección de información contra el lavado de activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- jugará un papel preponderante. Sus objetivos, en cumplimiento de su mandato legal, son: centralización de datos, sistematización de datos y Análisis de información”. Se concluye el presente aparte con la siguiente afirmación: “el objetivo es integrar plenamente la inteligencia financiera con los operativos en contra de las organizaciones terroristas y de narcotráfico”.

IV. “Proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación”: se afirma que “El mecanismo fundamental para proteger las vidas y derechos de los ciudadanos es el fortalecimiento del Estado de Derecho en el territorio nacional”. En el presente aparte no se especifica, cuál sería la estrategia que se pondría en práctica para proteger la vida de los ciudadanos, tampoco la relativa a cuidar la infraestructura de la nación.

“Protección de personas en situación de riesgo”: se dice que “el programa de protección de personas en situación de riesgo del Ministerio del Interior se ha fortalecido para que dirigentes o activistas de grupos políticos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o periodistas tengan una protección efectiva”.

“Protección de las víctimas del desplazamiento forzoso”: “En coordinación con las autoridades y organizaciones regionales, la Red de Solidaridad Social llevará a cabo, con el acuerdo de las familias desplazadas, planes de retorno para facilitar su regreso colectivo a sus lugares de origen”.

“Protección contra el terrorismo”: El presente subcapítulo de la PDSD, se refiere a que “el uso creciente del terrorismo, en especial en las grandes ciudades, será combatido con

absoluta firmeza por el Gobierno Nacional para proteger la vida y dignidad de los colombianos”; se reitera la coordinación entre las diferentes fuerzas del Estado y el empleo de la inteligencia militar y policiva para producir una reacción rápida y se reclama la activa cooperación ciudadana, entre otras medidas, ya mencionadas.

“Protección contra el secuestro y la extorsión”: se plantea como objetivo general: “reducir al mínimo el número de casos de extorsión y secuestro extorsivo”. Para cumplir el anterior objetivo general se plantean los siguientes lineamientos: “la desarticulación de las organizaciones del secuestro, el incremento de los rescates de personas en cautiverio, la optimización de la información y del conocimiento de las organizaciones de secuestradores para facilitar la toma de decisiones y lograr la desarticulación de estas organizaciones y de sus finanzas, la implementación de un sistema de recepción y seguimiento de casos, la consolidación de una agenda internacional contra la extorsión y el secuestro extorsivo, el fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado y la ciudadanía, el establecimiento de una normatividad adecuada, la definición de objetivos medibles y el desarrollo de un esquema de trabajo”.

Como parte de la estrategia general de aniquilación de las guerrillas izquierdistas se incluyó un programa de desmovilización de los combatientes con exhortaciones para que abandonaran las armas y en compensación se les ofrecía algunas ventajas para rehacer su vida económica y social. Dicho programa contempló el ofrecimiento de acceso a la salud, a la educación y al empleo productivo para excombatientes y, especialmente, para los que todavía no alcanzaban la mayoría de edad. De hecho el gobierno tenía clara conciencia de que las tropas guerrilleras se nutrían de la población desesperada por la inseguridad alimentaria y de salubridad y amenazada por la inminente imposibilidad de acceder a los medios básicos para sobrevivir, dicha población es más abundante en las regiones rurales porque el latifundio se extendió ampliamente suprimiendo las tierras de vocación agrícola, pues, de estas últimas la población campesina derivaba sus ingresos, pero, fueron desplazados los campesinos y sus pequeñas propiedades se anexaron a los territorios dedicados a la cría y engorde de ganado, ya que esta actividad ganadera requiere poca mano de obra; con la consecuencia de desplazar al campesino hacia las ciudades a aventurar alguna manera de subsistir. Así se propiciaba el reclutamiento de soldados para las guerrillas, como en efecto sucedió durante el largo período de ampliación de la frontera del latifundio para la ganadería y de reducción del minifundio

de vocación agrícola. Este fue uno de los factores que permitió el crecimiento de los frentes guerrilleros. Ante la negativa del Estado de restituir las tierras despojadas a los campesinos, se diseñó este programa dirigido a desincentivar el enrolamiento de estos campesinos en las guerrillas y subsidiarlos en sus necesidades básicas. Es evidente que se trataba de una política restringida a los que se enrolaban en las guerrillas y no con cobertura amplia para el desplazamiento campesino. De esta manera se constata que no se trató de una política social, sino de una medida circunscrita a la estrategia de la guerra contra las guerrillas izquierdistas. Por esta razón se hablaba puntualmente del número calculado de niños y jóvenes ya reclutados por las fuerzas guerrilleras: “el programa de desmovilización para los 6.000 o 7.000 niños y jóvenes que, según estimativos de UNICEF y el ICBF, están en las filas de las organizaciones armadas ilegales, estará complementado por políticas para prevenir su reclutamiento por parte de estas organizaciones”.

“Protección de la infraestructura económica”: En este aparte se hace referencia a que “el Gobierno Nacional está desarrollando programas especiales para prevenir los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera, eléctrica, petrolera, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones, así como para prevenir el robo de hidrocarburos, mediante el trabajo coordinado en estructuras de apoyo del Ejército, la Fiscalía, el DAS, la DIJIN y la Procuraduría (66), con el apoyo de la ciudadanía”.

“Protección de la red vial”: se dice en el documento de la PDSD que “el Gobierno Nacional garantizará las condiciones de seguridad que permitan el libre movimiento por las principales troncales del país, a través de una Estrategia Integral de Seguridad en Carreteras”.

V. “Cooperar para la seguridad de todos; la seguridad de la solidaridad”: En el presente subcapítulo de la PDSD se afirma que: “el Gobierno promoverá la cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de Derecho, con el fin de que cada ciudadano contribuya a la prevención del terrorismo y la delincuencia, proporcionando información relacionada con las organizaciones armadas ilegales”.

“Redes de cooperantes”: se afirma que “una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”.

“Programa de recompensas”: se dice que “de manera complementaria, se ha puesto en práctica un programa de recompensas para aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, den a conocer información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales”. Debido a la pobreza extrema en Colombia, muchos de estos informantes proporcionaban información falsa, con el fin de obtener las recompensas, aumentando así las injusticias y la violación sistemática a muchos otros derechos fundamentales, sobre todo de los campesinos y campesinas.

“Cooperación internacional”: en el presente subcapítulo de la PSDS, dice: “La seguridad no es sólo producto de la solidaridad de todos los colombianos. Dado el carácter transnacional de los principales riesgos y amenazas, la cooperación y la solidaridad entre los países es una condición necesaria para la seguridad de todos” se mencionan, también las necesidades de crear un frente unido, de fortalecer el intercambio de inteligencia e información financiera, de fortalecer y ampliar las comisiones bilaterales fronterizas, de cumplir con los propósitos del compromiso de Lima de la Comunidad Andina y de promover la reforma del actual sistema de seguridad interamericano” se afirma, además que: “la respuesta a una amenaza transnacional como el narcotráfico no puede ser otra que la estrecha cooperación internacional” se menciona la urgencia de acogerse a la resolución 1373, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la necesidad de unir esfuerzos y finalmente la urgencia de que se dé pronto cumplimiento a las órdenes de captura de la INTERPOL.

VI. “Comunicar las políticas y acciones del Estado; terrorismo y Comunicación”: se dice que “el terrorismo es un método de violencia política que explota la comunicación para sembrar el terror y el desconcierto, tanto en el campo como en la ciudad” se concluye este aparte diciendo que “El Estado promoverá y respaldará la reflexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en

peligro”. Las persecuciones que padecieron tanto periodistas como intelectuales, serán analizadas más adelante.

Seguidamente en el subcapítulo intitulado **“Diplomacia Pública”**: se dice que “El apoyo de la comunidad internacional es imprescindible para lograr la protección de todos los ciudadanos. El carácter transnacional de las amenazas que enfrenta la democracia colombiana hace imposible brindar seguridad a la población a largo plazo sin el concurso de otros países”.

V Capítulo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática: Financiación y Evaluación

Se menciona en el presente capítulo, la importancia de pagar puntualmente el impuesto al patrimonio creado por Uribe Vélez, especialmente para la implementación de la PDSD, como ya expusimos anteriormente. Seguidamente se mencionan dos tipos de indicadores que permitirán la evaluación periódica de la PDSD, los cuales son: “indicadores de gestión administrativa y financiera” e “indicadores de impacto que midan el efecto de las políticas en el logro de la seguridad”. Según se argumenta en el documento “con estos indicadores se podrán hacer los ajustes pertinentes a la PDSD”. Finalmente, se presenta una matriz donde se especifican los objetivos de las diferentes entidades del Estado.

La inversión en la guerra fue la prioridad en el gobierno de Uribe Vélez, las sumas de dineros ascendieron en el primer año de gobierno a 12 billones de pesos, cerca del 15% de un total de 67,1 billones de presupuesto anual para el 2003, cifra que equivale a un 4,3% del producto interno bruto (PIB), priorizando de esta forma el gasto militar y el servicio de la deuda externa, que afecta el 45% del presupuesto, frente a la inversión social (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 2003, pág. 18).

2.2 Segundo Capítulo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática

“Amenazas”: el Terrorismo

El terrorismo, es un término ampliamente debatido, aunque carece de definición, pues, no existe acuerdo respecto al significado de este término.

El Diccionario de la Lengua Española, define el terrorismo de la siguiente manera: 1. “Es la dominación por el terror. 2 sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. El terror por su parte, queda definido como: 1. “Miedo muy intenso 2. Denominación dada a los métodos expeditivos de justicia revolucionaria y contrarrevolucionaria. Por antonomasia, época durante la Revolución Francesa, en que estos eran frecuentes” (Española, 2018). Es así como se sitúa el origen del término terrorismo en la revolución francesa, más exactamente en la época denominada del “terror” (1793 y 1794) en este contexto, el terror provenía directamente del Estado.

Noam Chomsky, en su libro “Piratas y Emperadores” inicia el prefacio a la primera edición comentando una historia que relata San Agustín, quien cuenta que Alejandro Magno capturó a un pirata y le Preguntó “¿Cómo osas molestar al mar? y el pirata le respondió ¿Cómo osas tú molestar al mundo entero? Yo tengo un pequeño barco por eso me llaman ladrón. Tú tienes toda una flota por eso te llaman emperador” (Chomsky, 2003, pág. 7). Según Chomsky, el relato de San Agustín, refleja las relaciones luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (S11) de los Estados Unidos de América (EEUU) con varios actores secundarios en la escena del terrorismo internacional. Dirá Chomsky, que antiguamente (originalmente) el término terrorismo aludía a los emperadores quienes molestaban tanto a los súbditos como al mundo, pero en la actualidad se refiere a los ladrones de quienes se dice que molestan a los poderosos.

Luego de revisar una serie de resoluciones aprobadas por la Asamblea general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el terrorismo, previas a los S11 encontré que en todas ellas sólo se habla de terrorismo internacional³⁰. No se mencionan a los

---

³⁰ Resolución 30/34 del 18 de diciembre de 1972, Asamblea General de la ONU, Resolución 31/102 del 15 de diciembre de 1976 Asamblea General de la ONU, Resolución 32/147 del 16 de diciembre de

pueblos sometidos a nivel nacional que luchan contra la opresión estatal, como grupos terroristas, por el contrario se “reafirma el derecho inalienable a la libre determinación de los pueblos que se encuentran bajo regímenes coloniales y racistas o bajo otras formas de dominación extranjera y sostiene la legitimidad de su lucha, en particular la lucha de los movimientos de liberación nacional” (ONU, 1972, pág. resolución 30/34).

Posterior a los S11, las resoluciones referentes a las medidas para eliminar el terrorismo (internacional) las aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU (CS); hecho que le generó múltiples críticas relacionadas con haberse excedido en sus funciones al actuar como legislador mundial. “En las discusiones que llevaron a la adopción de la Resolución 1540 (2004), un importante número de Estados criticó la repetida práctica legislativa del CSNU y su capacidad de actuar como “legislador universal”, creador de obligaciones internacionales que sólo podían ser asumidas como fruto del consentimiento mediante un tratado internacional” (Litterio, 2019, págs. 94-95). Las funciones del CS se encuentran consignadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y allí no se le otorgan las anteriores atribuciones, sólo se dice que dará recomendaciones³¹. Dado que los EEUU, son uno de los miembros permanentes del CS, todo parece indicar que ha usado su poder para poner al CS al servicio de sus intereses, en este caso en particular; su interés, luego de los S11, se centró en combatir el terrorismo.

La primera resolución que aprobó el CS, sobre el terrorismo, fue la resolución 1368 del 12 de septiembre de 2001 pero la más controvertida fue la resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001, allí toma decisiones que compromete a los Estados miembros incluso a modificar la legislación nacional para eliminar el terrorismo, hecho que le da a esta resolución el carácter de tratado internacional, según varios especialistas.

1977, Asamblea General de la ONU, Resolución 34/145 del 17 de diciembre de 1979, Resolución 36/109 del 10 de diciembre de 1981, Asamblea General de la ONU, Resolución 38/130 el 19 de diciembre de 1983, Asamblea General de la ONU, Resolución 40/61 del 9 de diciembre de 1985, Asamblea General de la ONU, Resolución 42/159 del 7 de diciembre de 1987, Asamblea General de la ONU, Resolución 44/29 del 4 de diciembre de 1989, Asamblea General de la ONU, Resolución 46/51 del 9 de diciembre de 1991, Asamblea General de la ONU, Resolución 51/210 del 16 de enero de 1997, Asamblea General de la ONU, Resolución 52/165 del 19 de enero de 1998, Asamblea General de la ONU, Resolución 53/108 del 26 de enero de 1999, Asamblea General de la ONU.

³¹ Carta de las Naciones Unidas. capítulo VII. Artículo 39: El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional.

El terrorismo a raíz de los S11, reemplazó la anteriormente denominada “amenaza comunista” convirtiéndose en el nuevo enemigo a nivel mundial que justificaría las próximas guerras, como, por ejemplo, la guerra contra Afganistán en 2001, con la categoría de guerra preventiva por parte de los Estados Unidos, al igual que la invasión a Irak en el año 2003 y la guerra contra las FARC-EP, en Colombia, entre otras.

El terrorismo en Colombia fue una amenaza instituida como ya mencionamos anteriormente, el gobierno de Uribe Vélez, se acogió a la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, contra el terrorismo para quitarle el status político a las FARC-EP, al desconocer la existencia del conflicto armado en Colombia, de esta manera pudo justificar la guerra contra las FARC-EP, contra todos los opositores del gobierno, contra los líderes sociales defensores de derechos humanos, entre otros. La sumisión del pueblo por el terror o por el miedo, le permitió a Uribe Vélez, ejecutar políticas represivas que violaban el derecho natural, fundamental y constitucional a la vida y a la libertad, principalmente.

Las características principales de los conflictos armados nacionales, según el DIH, protocolo II adicional (1977) a los convenios de Ginebra de 1949, en el artículo primero se especifican así: “1. Que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados; 2. Que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Las FARC-EP, nacieron en la segunda mitad de la década de los años 40s bajo la forma de autodefensas campesinas para resistir las agresiones armadas provenientes de ejércitos paramilitares conocidos como los Chulavitas y los Pájaros, entre otros. Estas bandas armadas que asesinaban campesinos por su filiación a uno de los dos partidos políticos entonces existentes conocidos como Liberal y Conservador eran auspiciadas por la dirigencia partidista en pugna por la distribución del poder del Estado, y fue especialmente aguda la persecución implementada por el Partido conservador. Los campesinos insurrectos que posteriormente se consolidaron como las FARC-EP, fueron denominados “Bandoleros” y resistieron con relativo éxito bélico la persecución proveniente tanto de la fuerza pública, como del paramilitarismo de ese entonces, que

como ya mencionamos, estaba representado por “Los Chulavitas” y “los Pájaros”. Pese a que los denominados “Bandoleros” solicitaron reiteradamente dialogar con el gobierno, no fueron escuchados, por el contrario, el gobierno trató de aniquilarlos con bombardeos en donde se concentraban. Esta circunstancia condujo a la consolidación en 1964 de ejércitos de campesinos en la agrupación conocida desde entonces como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se justificaban argumentando que habiendo solicitado al gobierno nacional garantías para trabajar la tierra sin el temor constante a ser asesinados y perseguidos, por el contrario, recibieron un bombardeo aéreo, por parte del Estado colombiano con la ayuda de los Estados Unidos de América, en una operación conocida como “Plan Laso”. Se calcula que a los diferentes territorios a donde se encontraban pequeños grupos de campesinos armados, incursionaron alrededor de 16.000 soldados, este hecho fue el que obligó a las FARC-EP a organizarse a nivel nacional y a convertirse en guerrillas móviles. Algunos analistas del origen de este conflicto afirman que es el Estado Colombiano directo responsable de la consolidación de las FARC-EP, no sólo por omitir sus demandas, en cuanto a la seguridad, sino, por el bombardeo a sus territorios. Recordemos que previo a 1964, sólo eran campesinos armados, que procuraban preservar sus vidas, mientras trabajaban sus tierras y no enarbolaban banderas políticas como lo hicieron posteriormente bajo la influencia del Partido Comunista de Colombia y el auge de los movimientos de liberación nacional incentivados por el triunfo de la revolución cubana.

El terrorismo, en el segundo capítulo de la PDSD, se explica como “el método principal que utilizan las organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 37). La base de la democracia es precisamente la libertad, derecho fundamental coartado desde la conformación del frente nacional, en el cual, al dividirse el poder entre los liberales y los conservadores, excluyeron y criminalizaron a otros partidos políticos u organizaciones populares que se crearan. La violación a los derechos civiles y políticos, conocidos como derechos de primera generación, han sido violados de manera sistemática a lo largo de la historia de Colombia, intensificándose a partir del año 2002, cuando el gobierno de Uribe Vélez, reformó la Constitución Política de 1991, para adaptarla a la guerra contra las FARC-EP, hecho que le permitió mal justificar la represión a las disidencias, acusándolas de ser terroristas o de estar al servicio del terrorismo.

Con base en el CS de la ONU, en el documento de la PDSD se afirma: “el único denominador común de las diferentes variantes de terrorismo, es el uso calculado de violencia letal contra civiles para fines políticos. Esto es lo que ocurre en Colombia, como lo demuestra el número creciente de civiles asesinados o masacrados por las organizaciones armadas ilegales en los últimos cinco años” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 37) posteriormente, se presenta el siguiente gráfico en el documento de la PDSD:

Civiles Asesinados	Civiles Asesinados en Masacres

FARC Y ELN Autodefensas ilegales			FARC Y ELN Autodefensas ilegales	
1997	531	78	126 (23)	30 (6)
1998	549	216	183 (26)	111 (16)
1999	910	743	146 (26)	408 (61)
2000	1.075	1.012	202 (36)	701 (102)
2001	1.060	1.028	158 (25)	281 (42)
2002	952	405	312 (35)	59 (12)

La suma total de víctimas, según estos datos son de 10.745 civiles asesinados. A renglón seguido se dice en el documento de la PDSD que hay grupos que están particularmente amenazados, “en los primeros siete meses de 2002, 41 indígenas fueron asesinados, al igual que 29 maestros”, según la Policía Nacional, citada en el documento en mención de los 41 indígenas asesinados; 13 de estos homicidios fueron perpetrados por las FARC-EP y 7 por los paramilitares. Según lo expuesto en el documento de la PDSD, la mayoría de

los casos restantes son de autoría indeterminada. En cuanto a civiles asesinados, según las estadísticas presentadas en el anterior cuadro; es mayor el número de víctimas por parte de las FARC-EP que, por parte del paramilitarismo, cuando es de conocimiento público la persecución y el asesinato selectivo por parte del paramilitarismo, quienes operan de la mano de las fuerzas de seguridad del Estado.

La fuente de los datos tomados para el anterior cuadro es del ministerio de defensa, los cuales no son creíbles, debido a que la mayoría de masacres en Colombia, han sido perpetradas por los paramilitares. Entre 1982 y 2012, se calculan 1.982 masacres de las cuales 1166 las perpetraron los paramilitares, las guerrillas fueron responsable de 343, la fuerza pública de 158 (CNMH, 2012, pág. 36). Otras pruebas del sesgo de los datos en el anterior cuadro para instituir a las FARC-EP como una amenaza terrorista, cuando en realidad es el Estado colombiano el que ha ejercido el terrorismo directamente y a través, de los grupos paramilitares, son los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano; entre 2004 y 2006 el Estado Colombiano recibió cuatro condenas por las siguientes masacres: 1. Masacre de Mapiripán ocurrida en 1997 en el departamento del Meta, Sentencia del 15 de septiembre del 2005³², 2. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia, sentencia del 5 de julio del 2004³³ 3. Caso de la masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006³⁴, 4. Caso de las masacres de Ituango Vs. Colombia, sentencia del 1 de julio del 2006³⁵.

Se continúa afirmando en el documento que “El desplazamiento forzoso es también el resultado del terror contra la población. En el último año, cerca de 300.000 colombianos fueron desplazados de sus tierras, aterrorizados por las amenazas y asesinatos de las organizaciones armadas ilegales”.

---

³² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia sentencia del 15 de septiembre de 2005 Recuperado de:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf

³³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, recuperado de:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf

³⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes Vs Colombia, sentencia del 5 de julio de 2004, recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf

³⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las masacres de Ituango Vs Colombia, sentencia del 1 de julio de 2006, recuperado de:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su pronunciamiento del 30 de septiembre de 1998, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos tienen la particularidad de reunir en un mismo documento elementos de tres ramas del derecho internacional público: derecho internacional humanitario, derecho de los derechos humanos y derecho de los refugiados (Jean-Philippe, 1998). En ellos se asocia el desplazamiento forzado interno, es decir, dentro del propio país, única y exclusivamente a los conflictos armados; entonces, asignarles como causa el terrorismo, resulta ser una falacia que busca legitimar el terrorismo de Estado, el cual se sustenta precisamente en combatir la supuesta amenaza terrorista que representaban las FARC-EP en aquel contexto histórico (2002-2006).

En la anterior gráfica presentada en el subcapítulo del documento de la PDSD, denominado “terrorismo”, se enfatiza en que la mayoría de homicidios a civiles fueron perpetrados por las FARC-EP, a quienes se responsabiliza de desconocer la voluntad democrática de la población, así mismo se hace mención de diferentes ataques a infraestructuras, atribuidos también a la FARC-EP, como, por ejemplo, los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas. En síntesis, en el presente subcapítulo comentado se utiliza una serie de argumentos para mostrar a las FARC-EP, como el máximo grupo terrorista en Colombia y para justificar la arremetida bélica contra ellos. La justificación de dicha arremetida, por parte del gobierno de Uribe Vélez, a través de la política pública, PDSD, encuentra sus fundamentos en el estricto cumplimiento de la resolución 1373 (contra el terrorismo) del CS de la ONU.

El Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz (CINEP/PPP) presentó en 2010 un registro de las violaciones al derecho internacional humanitario durante los cuatro (4) primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los cuales suman 13.944 víctimas del terrorismo de Estado: los crímenes están clasificados de la siguiente manera:

Terrorismo de Estado

Amenazas	Desaparición	Detención arbitraria	Ejecución Extrajudicial	Tortura	
2002	495	186	1.077	1.857	135
2003	421	270	1.249	1.133	207
2004	528	134	914	929	257
2005	501	78	547	627	627
2006	566	107	571	398	130
Total	2.511	775	4.358	4.944	1.356

Fuente: Revista cien días vistos por CINEP/PPP N.º 69. Mayo 2010. Pág. 21

Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas, también presentó una síntesis de la violación a los derechos humanos y al DIH, entre 2002 y 2006, específicamente los derechos relacionados con la vida, la libertad y la integridad física. Aclarando que los datos presentados son inferiores a los reales, debido a la imposibilidad de procesar ciertos documentos.

En los cuatro primeros años de este gobierno se registraron 11.292 personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate (o sea, en su casa, en la calle o en su trabajo) por violencia socio-política entre julio de 2002 y junio de 2006. Adicionando el número de personas que murieron en combate suma un total de 20.102 personas muertas y más un millón de desplazados (CCJ, 2007). Si comparamos los datos que se presentan en el documento de la PDSD, con los presentados por estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, vemos que el número de víctimas del terrorismo de Estado en el período de 2002 y 2006 es superior al de las víctimas de los grupos subversivos (guerrillas) en el período inmediatamente anterior (1988-2002).

2.3 El negocio de las drogas ilícitas

Todos mienten, asegura Alonso Salazar, en su obra “La Cola del Lagarto”³⁶. Afirmar el autor que los estadounidenses lanzan cruzadas contra los países *productores*, al tiempo que sus agencias de inteligencia favorecen el comercio de drogas ilícitas para financiar guerras contra sus enemigos. Piden que se fumiguen los sembrados en los países del sur mientras en su territorio florece una extraordinaria industria alrededor del cannabis; persiguen implacablemente las drogas que les llegan del sur, mientras en su territorio se multiplican los volúmenes de drogas sintéticas, como el éxtasis, el ice, la vitamina K y las anfetaminas. Afirmar también, que dicen mentiras muchos políticos que consumen drogas, pero proponen hacerles la guerra. “Mienten los que aceptan al que consume grandes cantidades de licor y piden que se meta a la cárcel al que se fuma un *varillo* de marihuana. Mienten los grupos de izquierda y de derecha que fomentan la limpieza social contra *drogadictos y delincuentes*, mientras se financian con recursos provenientes del tráfico.” (Salazar, 1998, pág. 11).

En el subcapítulo del título “Amenazas”, intitulado: “El Negocio de las Drogas Ilícitas”, en el primer párrafo se enumeran los cuatro componentes del negocio de las drogas ilícitas; cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos, se mencionan además, las consecuencias del negocio de las drogas ilícitas, las cuales ponen en peligro la estabilidad del Estado, de todas las instituciones y financian los recursos de las acciones terroristas que ponen en peligro la biodiversidad.

En primera instancia, la ilicitud de las drogas se debe según expone Alonso Salazar, a las legislaciones prohibicionistas impulsadas por los Estados Unidos; el autor retoma el estudio y análisis realizado por el antropólogo Anthony Henman en su libro *Mama Coca*, quien explica que el uso de las drogas alucinógenas existe desde el mismo inicio de la humanidad; tomando como ejemplo la mitología de los pueblos indígenas en Colombia, muestra cómo en estos pueblos la coca, por ejemplo, la ven como un regalo de la naturaleza y la usan con fines medicinales; para mitigar el hambre y la fatiga; en rituales

---

³⁶ El título de la obra encierra la analogía entre, lo inútil que es cortar la cola al lagarto ya que esta le vuelve a crecer con lo inútil que es fumar y ampliar las políticas prohibicionistas en Colombia cuando en realidad, el negocio funciona gracias a los Estados Unidos (Salazar, 1998).

religiosos, para ingresar al mundo de las esencias y convertirse en hombres de conocimiento. En igual sentido se expresa Alonso Salazar (Salazar, 1998, pág. 14).

El uso de los psicoactivos entonces, según Salazar, no fue un problema hasta que iniciaron las leyes prohibicionistas. “En Colombia desde 1938 se empezó a prohibir la venta de hoja de coca en farmacias y droguerías; con base en los convenios de ginebra de 1925 y 1931. Estos convenios fueron impulsados por los Estados Unidos, quien usó su poder como vencedor en la I guerra mundial para promoverlos, posteriormente el gobierno colombiano monopolizó a través de la Ley 36 de 1939 la importación de drogas que formaran hábitos perniciosos, y destinó las ganancias para combatir el tráfico ilegal” (Salazar, 1998, pág. 78). De manera sucesiva se irían firmando y ratificando los diferentes convenios contra las drogas³⁷ por parte de Colombia y ajustando la legislación nacional a fin de dar cumplimiento al mandato de dichos convenios.

Fue precisamente en la administración Reagan (abril de 1986) que tuvo lugar la proclamación de la National Security Decision Directive (NSDD) (221), en la cual el consumo y tráfico de drogas fueron definidos como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos (Pardo, pág. 517). Finalizada la guerra fría, y ya en la nueva era de la globalización, cuando la guerra contra los comunistas pierde protagonismo es necesario un nuevo enemigo. “Si el asunto de las drogas es definido como un enemigo o una amenaza, entonces debe ser combatido, a pesar de que no sea claro, si es posible o no ganar la batalla” (Borda, 545). Lo importante para los Estados Unidos de América, es tener alternativas para continuar interviniendo militarmente en América Latina. Posteriormente, en 2001 luego de los S11 en Estados Unidos, la amenaza de las drogas ocupó un segundo lugar para cederle el paso a una amenaza más efectiva, que justificaría las posteriores guerras: el terrorismo.

Salazar, afirma que, en 1989, la cosecha de Marihuana en los Estados Unidos, fue superior a la de Maíz. “La doble moral de los Estados Unidos, quienes imponen normas en los países del sur y centro América, mientras el gobierno federal no logró forzar a los Estados a cumplir las leyes que prohíben el uso recreativo de la marihuana” (Thoumi, 2013, págs.

---

³⁷ Convención única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 1988, en Colombia los decretos: 1136 de 1968 y 522 de 1971 que penalizaban el consumo de drogas.

219-248). Es una prueba más de que a través de leyes, discursos y la complicidad de los medios de comunicación, han logrado instituir amenazas, cuyo objetivo es dominar a través de la política y la economía en centro y sur América. Respecto a la Coca, el intento por parte del País del Norte para cultivar esta planta, fracasó, debido a que la Coca, sólo crece en los Andes Americanos, afirma Salazar.

En 1998 asume la presidencia de Colombia Andrés Pastrana Arango, su plan de gobierno denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, fue presentado como una política pública, cuyo eje central era consolidar la paz en Colombia. Una de las primeras medidas que puso en práctica Pastrana Arango fue concretar un acercamiento con las FARC – EP, a través de la desmilitarización de 140.000 Hectáreas de tierras, en “San Vicente del Caguán”, municipio ubicado en el departamento del Meta. La zona de distensión o zona de despeje, como fue conocido este espacio otorgado a las FARC-EP, hacía notar buena voluntad por parte del gobierno de Pastrana Arango, para adelantar los diálogos de paz con las guerrillas, no obstante, paralelo a la aparente buena voluntad del gobierno de Pastrana Arango, éste consolidó de la mano de Washington, el Plan Colombia dirigido a controlar la producción de cocaína y a combatir a las FARC-EP. Como ya mencionamos anteriormente.

El plan Colombia, “fue un plan diseñado en 1999 en la Casa de Nariño por sugerencia de la Casa Blanca, que se aplicó luego de un intenso debate en Washington, una tenue discusión en Bogotá y un preocupante mutismo en el hemisferio. Colombia recibe de los Estados Unidos de América, la suma de 1.319,1 millones de dólares, el 75% se orienta al fortalecimiento bélico en la ya longeva e ineficaz «guerra contra las drogas, esta inversión sería sólo para un período de dos años, en lo que se conoce como la primera fase del plan Colombia. La inversión total entre 1999 y 2006, fue de 10.732 millones de dólares, sumado a esta cantidad, los aportes de España, Noruega y la Unión Europea” (Tokatlian, 2001 , págs. 126-143). El resultado de la millonaria inversión en equipamiento militar, helicópteros, entrenamiento, etc. no arrojó resultados positivos en cuanto a la erradicación de los cultivos ilícitos, pese a que en 2003 el departamento de Estado de Estados Unidos celebraba la reducción en un 15 por ciento de las hectáreas de coca sembradas. En el año 2006, habían alrededor de 170.000 hectáreas sembradas de coca, la misma cantidad que hubo en 2001, esto según diversos estudios y estadísticas. “Las FARC-EP consideraban la formulación y aplicación del Plan Colombia como una

propuesta de guerra, dada la importancia que este Plan le otorgaba al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y a la política de intolerancia de los Estados Unidos frente a las drogas, centrada en las fumigaciones de cultivos ilícitos” (CNMH pág. 99). Es así como los diálogos de paz del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango no le generó la confianza requerida a las FARC, razón por la cual fracasaron dichos diálogos de paz.

En el siguiente párrafo³⁸ del subcapítulo “El Negocio de las Drogas Ilícitas”, se alude a que sin los precursores químicos no sería posible procesar la coca. Salazar, afirma que la administración Bush, reconoció que la cocaína se elabora con químicos exportados por compañías norte americanas, quienes son los mayores exportadores de estos químicos, tanto para elaborar drogas sintéticas como drogas semisintéticas (Salazar, 1998, pág. 67). Retomado el subcapítulo de la PDSO, allí se dice que el consumo es el mayor motor del negocio de las drogas ilícitas, a su vez se reconoce el hecho de que Estados Unidos, los países europeos, seguidos de Sur América, son los mayores consumidores de drogas, por tal motivo se hace un llamado en el presente documento a todos los consumidores para que tomen conciencia de los estragos ecológicos³⁹ que produce el procesamiento de la droga que consumen para que la dejen de consumir.

Llama la atención que, en el documento de la PDSO, no se mencionen, por ejemplo, los daños que causa el Glifosato a los cultivos de alimentos de los campesinos, conocidos coloquialmente como de “pancoger”. Tampoco se hace referencia allí a los daños que este químico produce a la salud. El cual, según diversos estudios, produce cáncer y malformaciones en los fetos, entre otros daños a la salud de los campesinos; tales hechos no son tenidos en cuenta y, por el contrario se continúan fumigando los cultivos de Coca para su supuesta erradicación sin alcanzar los objetivos esperados, tal como ya vimos anteriormente.

---

³⁸ Política de Defensa y Seguridad Democrática, República de Colombia, 2002-2006. Pág. 26 y 27: “El tráfico de precursores químicos es parte integral del negocio de las drogas ilícitas: sin éstos no es posible la producción de estupefacientes. A pesar de que la gran mayoría de los países se ha comprometido a castigar el tráfico de estas sustancias, ratificando la Convención de Viena de 1988, en la práctica los controles en muchos casos siguen siendo mínimos y las penas por incumplimiento, leves o inexistentes”.

³⁹ *Ibíd.* Pág. 27. “Si continúa el cultivo de coca, la cuenca amazónica colombiana estará en grave peligro: la siembra de una hectárea de coca requiere la tala de tres hectáreas de selva virgen. En la última década, 1.361.475 hectáreas fueron deforestadas con este fin”.

2.4. Las Finanzas ilícitas

En el subcapítulo de “Las Finanzas ilícitas” se afirma: “El lavado de los ingresos obtenidos por la comercialización de la cocaína y la heroína -buena parte de los cuales permanecen en el sistema financiero internacional- contribuye de manera singular al terrorismo, a la vez que perturba los mercados de divisas y otros mercados financieros, estimula la subfacturación de importaciones, distorsiona de manera general el buen funcionamiento de la economía y contribuye a la corrupción”. El argumento principal, en el cual se fundamenta la necesidad de combatir las finanzas ilícitas, en el documento de la PDSD, se encuentra en la resolución 1373 del consejo de seguridad de la ONU.

Los flujos o finanzas ilícitas; son definidos como “movimientos, de un país a otro, de dinero que ha sido ganado, transferido o utilizado de manera ilegal. En general, estos fondos se originan en las actividades comerciales (falsificación de la facturación del comercio y precios de transferencia abusivos), en actividades delictivas y en la corrupción” (Repositorio CEPAL, 2017, pág. 9). En lo que respecta a la falsificación de la facturación del comercio y precios de transferencias abusivas en la comercialización entre Colombia con la Unión Europea y Estados Unidos de América, CEPAL presenta los datos de las pérdidas estimadas de ingresos tributarios por manipulación de precios en operaciones comerciales de cada País Latinoamericano. En el caso de Colombia, entre 2002 y 2006 se perdieron \$ 427,57 millones de dólares anualmente, es decir que en los cuatro años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la suma asciende aproximadamente a 1.710,28 millones de dólares, no obstante en el documento de la PDSD, no se contemplan de manera directa este tipo de finanzas ilícitas relacionadas directamente con la corrupción, sino las relacionadas con el narcotráfico del lado de los grupos insurgentes pero no muestran datos, ni la forma en la que circulan dichas finanzas ilícitas.

La relación entre las finanzas ilícitas y la corrupción en Colombia, es ampliamente conocida, pero no por parte de los grupos insurgentes, sino del lado de los políticos, muchos de los cuales a través de las finanzas ilícitas derivadas del narcotráfico, han llegado al poder, en lo que se conoce como “Narco-política”, el ejemplo más emblemático es precisamente el de Pablo Emilio Escobar Gaviria o “El Capo” quien fue elegido suplente en la cámara de representantes en 1982, mientras se iba consolidando como el narcotraficante más grande de Colombia y del mundo, caso similar es el de Álvaro Uribe

Vélez, quien según diversas fuentes entre 1980 y 1982 cuando ejerció como director de la Aeronáutica Civil, otorgó las licencias de vuelos necesarias para que se expandiera el narcotráfico, de la mano de Pablo Escobar Gaviria. El denominado “Proceso 8000” fue otro caso paradigmático del que se tenga conocimiento de la intromisión de los recursos provenientes del tráfico de drogas ilícitas en la política del país, ya que se demostró que el presidente de la República, Ernesto Samper, fue financiado por el entonces célebre Cartel de Cali y en el período de gobierno de Uribe Vélez, también se demostró que un grueso número de parlamentarios estaban asociados con paramilitares y narcotraficantes, cuyo capítulo se conoció con el nombre de “Parapolítica”, el cual todavía no concluye en la vida política del país.

La historia de las finanzas ilícitas en Colombia, relacionadas con la corrupción y con la Narco-política, desborda el alcance de esta investigación. En lo que respecta al período que nos compete 2002 -2006, primer período de gobierno de Uribe Vélez, también es de amplio conocimiento que la financiación de la campaña que llevó a Uribe Vélez a ganar la presidencia de Colombia en 2002 (en primera vuelta), estuvo a cargo de los paramilitares, cuyos recursos fueron obtenidos a través de la extorsión, del narcotráfico, del desplazamiento para el robo de tierras, entre otros delitos. Alrededor de veinticuatro paramilitares, han manifestado la relación de Uribe Vélez con estos grupos criminales, se calcula un aporte de aproximadamente un millón de dólares por parte del paramilitarismo para dicha campaña presidencial.

En el documento de la PDSD, se continúa con la enumeración de las diferentes actividades que realizan los grupos armados, como el secuestro, la extorsión y el contrabando, las cuales según se afirma en el documento “alimentan el terrorismo”.

Finalmente, este subcapítulo de la PDSD expresa acogerse a las recomendaciones especiales del Grupo de acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) del 31 de octubre de 2001, creado por el grupo de los 7 (G7) en 1989, cuyo objetivo es crear normas de alcance mundial para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También se acoge a la Convención de la OEA contra el terrorismo del 3 de junio de 2002 y a la Convención Internacional de Naciones Unidas para la supresión de la Financiación del terrorismo del 9 de diciembre de 1999. La adhesión a las anteriores normas internacionales posibilitó la justificaciónn de políticas represivas que no arrojaron

resultados positivos, sino que por el contrario, posibilitaron enmascarar una realidad que principalmente perjudicó a la mayoría de la población colombiana.

2.5. El Tráfico de Armas, Municiones y Explosivos

Se afirma en el documento de la PDSD que “El tráfico de armas, municiones y explosivos está ligado, igualmente, al negocio de las drogas ilícitas y al terrorismo. Tanto los grupos de autodefensa ilegales como las FARC intercambian drogas por armas en el mercado internacional, como quedó en evidencia con las capturas de un narcotraficante brasileño en un campamento de las FARC y de miembros de las AUC en Costa Rica, a quienes se les acusó de intercambiar drogas por armas. Enormes cargamentos de armas -miles de fusiles y millones de cartuchos- provenientes de Centroamérica o, a través de terceros países, de Europa Oriental y de Oriente Medio han entrado en los últimos años a Colombia” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 29). Se mencionan varios países, menos Estados Unidos de América.

Según Amnistía Internacional, “El 70% de las ventas de armas está en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 principales fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia (Amnistía, pág. 1). En ningún país de Centro América se fabrican armas. Hay que tener en cuenta que la fabricación y distribución de armas está a cargo de los Estados que precisamente se encargan de garantizar la paz y la seguridad internacionales, a través del CS, hecho que devela el monopolio de la guerra y la posibilidad de generar terror por parte de los Estados. La seguridad para los pueblos, siendo responsabilidad de los Estados garantizarla, queda relegada porque los Estados se centran en cuidar los intereses propios. Según algunos documentales (Noumen, 2013). El derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas, facilita el tráfico de las mismas, muchos de ellos las compran, amparados en sus derechos y las envían a los diferentes países de Centro y Sur América.

En el presente subcapítulo, se continúa con la siguiente afirmación: “El tráfico de armas no representa un peligro menor que el tráfico de estupefacientes: merece el mismo control y castigo. Desde 1988, Colombia encabeza en los foros multilaterales el esfuerzo contra el tráfico de armas. El Gobierno Nacional apoyará decididamente todos los mecanismos internacionales que, como la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, el Programa de Acción de

Naciones Unidas para la Prevención, Control y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras o el Compromiso de Lima de la Comunidad Andina, exhortan a las naciones a controlar de manera efectiva el tráfico de armas y explosivos” (Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pág. 29 y 30).

A través, de la ley 737 del 9 de marzo de 2002, Colombia adoptó la "Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados", adoptada en Washington, D. C. el 14 de noviembre de 1997, posteriormente, la ley 1119 del 27 de diciembre de 2006 formaliza la actualización de los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego.

Más adelante veremos que el número de homicidios con armas de fuego se incrementó.

2.6 El secuestro y la extorsión

En cuanto al secuestro y a la extorsión, el presente subcapítulo de la PDSD, inicia así: “En Colombia, a diferencia de otros países, el secuestro y la extorsión no son sólo un problema delincriminal o de policía. Al igual que el narcotráfico, constituye un mecanismo básico de financiación de las acciones terroristas de las organizaciones armadas ilegales. Cada uno significa ingresos anuales de \$500.000 millones a 1 billón de pesos. En 2002, más de 2.000 colombianos de todas las condiciones sociales fueron secuestrados por estas organizaciones (943 por las FARC, 777 por el ELN, 183 por las autodefensas ilegales y 116 por grupos disidentes). El pago de secuestros, en especial de secuestros de extranjeros, por quienes estas organizaciones exigen cuantiosas sumas, financia el terrorismo” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 30).

Según se argumenta en el documento de la PDSD, la principal amenaza es el terrorismo y alrededor de esta amenaza giran las otras cinco amenazas (El negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio). Respecto al secuestro, el III Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, caracteriza a quiénes se les puede atribuir esta categoría. Dice que son en su mayoría; militares, las personas que trabajan

para los militares y los corresponsales de guerra, en el marco de un conflicto armado nacional o internacional. Tanto las FARC-EP como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tenían en su poder a militares y servidores de éstos, los cuales, según el concepto de estas guerrillas, eran prisioneros de guerra; pero, también tenían civiles nacionales y extranjeros, por quienes pedían diferentes sumas de dinero para su liberación y ejercían presión política, hecho que evidentemente afectó a muchas familias nacionales y extranjeras.

El flagelo del secuestro en Colombia, empezó a tomar fuerzas a manos del Movimiento Guerrillero (insurgente) “Diecinueve de Abril” (M19) en la “década del ochenta y noventa. El secuestro y la extorsión, fueron, en un doble sentido, otros dos importantes “combustibles” del conflicto armado” al servir como financiación de dicho conflicto y facilitar el reclutamiento (Giraldo, 2015, pág. 59). Dentro de estas acciones guerrilleras se destaca el secuestro de Marta Nieves Ochoa efectuado por el M19, una hermana del Clan de los Ochoa, (miembros del Cartel de Medellín). Esta organización de narcotraficantes (El Cartel de Medellín) reaccionó creando un nuevo grupo armado que denominó *Muerte a secuestradores* y fue conocido con la sigla “MAS”. Esta organización criminal pronto se hizo célebre por la osadía de sus acciones y el recurrente asesinato de quienes, sin previo proceso, estimaba secuestradores o colaboradores de las guerrillas. MAS, gozó de cierta aceptaciónn implícita por parte de las fuerzas militares y de policía que no ocultaban su simpatía por tales acciones. Según varios académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (CHCV), fue esta organización armada y clandestina la base de donde partió y se fortaleció el paramilitarismo de los años 90s y los responsables del genocidio a la Unión Patriótica (UP). Se puede conjeturar que, a raíz de la práctica del secuestro, se intensificó el terrorismo de Estado, a través del paramilitarismo, quienes, como se constató más tarde, operaban de manera conjunta con las fuerzas de seguridad del Estado.

El portal, Verdad abierta, afirma que en 1983, cuando la Procuraduría General de la Nación, entregó al gobierno nacional los resultados de la investigación que éste le había solicitado, se descubrió que de las 163 personas vinculadas a la red MAS; 59 estaban en servicio activo de las Fuerzas Armadas (Verdadabierta, 2011). Autores como Jorge Giraldo, atribuyen, el secuestro entre otras prácticas por parte de los grupos armados a la “debilidad Estatal”, porque históricamente ha sido incapaz de garantizar la seguridad al pueblo. Por el contrario, a través del paramilitarismo y de las fuerzas de seguridad, el Estado colombiano se ha encargado de generar terror.

Continúa el documento de la PDSD “El secuestro también es utilizado como un instrumento de chantaje político: 124 funcionarios públicos fueron secuestrados en el año 2002. Entre ellos una candidata presidencial, 19 alcaldes, 25 concejales, un gobernador, 19 diputados, 3 miembros del consejo de la república. El secuestro y la extorsión ahuyentan la inversión e impactan negativamente en la psicología de los secuestrados. En promedio entre 1998 y 2002, anualmente hubo 3.000 secuestros, los cuales en su mayoría son de autoría indeterminada, por la subcontratación de los grupos armados de secuestros y extorsiones con bandas de delincuencia organizada, que actúan bajo la dirección presunta o real de estas organizaciones. A medida que estos grupos van evolucionando van dejando en conocimientos a otras personas para que repliquen las técnicas usadas e incursionen a realizar acciones terroristas. Terrorismo y delincuencia común confluyen en una industria inhumana que, como el asesinato de civiles, no tiene justificación alguna y pone en peligro la estabilidad de la Nación (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 31).

El reconocido periodista colombiano, Daniel Coronel, muestra cómo durante los dos períodos de gobierno de Uribe Vélez, se maquillaron las estadísticas en cuanto al número de secuestros, el balance que presentó el gobierno de Uribe Vélez, fue de 9.200 secuestros, entre 2002 y 2009. La investigación de ‘Cifras y Conceptos’ concluye que el número real fue de 15.537 secuestrados (Coronel, 2013). En el período que nos compete 2002-2006, se registraron 10.015 secuestros, según “Cifras y Conceptos” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las cifras que presentó el gobierno nacional de entonces fue de 7.930, secuestros, es decir disminuyeron las cifras reales para mostrar buenos resultados en dicha disminución, la diferencia es de 2.085, secuestros que el gobierno de Uribe Vélez, quiso ocultar. En síntesis, las políticas represivas y las altas sumas de dinero invertidas para combatir el flagelo del secuestro, no arrojaron los resultados que buscaba el gobierno de Uribe Vélez, y el intento por engañar al país, en cuanto a los resultados; salió a la luz.

2.7. El Homicidio

El homicidio está tipificado en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales como crímenes de guerra, es considerado una infracción grave, que viola el DIH, al no diferenciar a los civiles de los combatientes. Según el CNMH, existe una brecha entre lo conocido y lo ocurrido, afirman con base en diversos estudios; que tres de cada cuatro homicidios han quedado por fuera de las estadísticas.

En el documento de la PDSD, se aborda el tema sobre los homicidios de la siguiente manera: “la última década, más de 25.000 colombianos fueron asesinados anualmente en las zonas urbanas y rurales del país. La incidencia del homicidio en estas proporciones no es sólo una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, sino también al buen funcionamiento de la democracia. Pero Colombia no ha padecido siempre estos índices de violencia: entre 1970 y 1991, la tasa de homicidios se cuadruplicó, pasando de 22 homicidios por 100.000 habitantes a 86, en un período de poco más de veinte años” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 31).

Se reconoce en la PDSD, que la tendencia del homicidio no es homogénea, sino que solo cincuenta (50) municipios sufren más de la mitad de los homicidios, caracterizados estos

municipios por sus riquezas naturales, las cuales se disputan los grupos armados, así concluyen la primera parte del subcapítulo sobre homicidios.

La fuente usada en el documento de la PDSD respecto a los homicidios en Colombia, son los informes del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad) entidad creada en 1995 y reestructurada en 2009 por corrupción. Entre otras cosas, fue acusada de “maquillar” los datos sobre secuestros en 2007, a un año del segundo período de gobierno de Uribe Vélez. No fue posible encontrar los informes en los que se fundamenta la PDSD para afirmar el número de homicidios cometidos en la última década (1992 a 2002), concluimos que la razón de la ausencia de dichos informes se debe a que por la reestructuración de Fondelibertad por corrupción, aquellos informes fueron eliminados.

Por su parte, “El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular” (CINEP) hace una clara diferenciación entre violación a los derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario (DIH) también categoriza las diferentes formas de violar el DIH, entre dichas categorizaciones, en lo que se refiera a homicidios retoma los convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, en este sentido cuando el Banco de Datos del CINEP se refiere a homicidios solo menciona el homicidio intencional en persona protegida, es decir no menciona: a los milicianos muertos en combate, las ejecuciones extrajudiciales, a quienes pierden la vida en ataques bélicos, sino, sólo a aquellas personas que son asesinadas en la vida civil, hecho que ratifica la violación al DIH al no diferenciar a los civiles de los combatientes. A continuación presentamos el número de homicidios en persona protegida, entre 2002 y 2006, según el Banco de Derechos Humanos de CINEP, teniendo en cuenta que bien se podría multiplicar este número por tres, debido a que como lo asegura el CNMH, las estadísticas han dejado por fuera tres de cada cuatro homicidios.

Violación al DIH: homicidios en persona protegida y homicidio intencional

Presuntos responsables	2002	2003	2004	2005	2006	Total Víctimas por grupos
Armada	0	6	2	10	0	18
AUC	394	3	618	0	0	1015
Paramilitares	428	1074	0	377	124	2003

ACCU	25	0	0	0	0	25
ACMM	4	0	0	0	0	4
CTI	9	0	0	0	0	9
DAS	9	0	1	8	2	20
Ejército Nacional	52	96	125	98	155	526
ELN	57	37	11	15	6	126
EPL	5	1	11	1	0	18
ERG	3	0	0	0	0	3
ERP	8	4	0	0	0	12
Estado Colombiano	9	0	0	0	2	11
FARC – EP	330	219	212	102	42	905
Fuerza Aérea	0	0	2	0	0	2
Fuerza Pública	25	11	3	5	3	47
Fuerzas Militares	1	96	0	0	0	97
Guerrillas	16	15	10	5	21	67
INPC	1	1	0		0	2
Combatientes	0	0	0	0	0	0
Mov. Bateman Cayón	0	0	0	0	0	0
Gaula	0	0	1	3	0	4
Fiscalía	0	0	0	0	3	3
Policía	22	16	31	40	12	121
Total, víctimas entre 2002 y 2006	5038					

Datos tomados del Banco de Derechos Humanos _CINEP

Continúa el documento de la PDSD: “El desbordamiento de los homicidios en Colombia no se debe a una inclinación particular de los colombianos por la violencia: es el resultado del debilitamiento institucional y del clima de impunidad que han ocasionado las organizaciones armadas ilegales y el narcotráfico. El impacto indirecto de los grupos alzados en armas es lo que crea las condiciones que favorecen el homicidio. En la medida en que amenazan, atrofian el sistema de justicia y abren campo a la impunidad” (Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003, pág. 31).

Tal como he puesto en evidencia anteriormente, más que a una debilidad estatal se debe al terrorismo de Estado, quien actúa directamente a través de sus fuerzas de seguridad y a través de los paramilitares.

3. ¿Seguridad para Quiénes?: una Mirada desde Thomas Hobbes

“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia”

Papa Francisco

Entre las definiciones de seguridad más básicas, encontramos la del Diccionario de la Real Academia Española; donde se define la seguridad como cualidad de seguro. Seguro a su vez, significa estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse y no sospechoso.

Thomas Hobbes, quien creó la primera teoría de filosofía política basada en la seguridad del hombre, argumentó que la constitución del Estado se debió a que el hombre le tenía miedo a la muerte; dado que en el estado de naturaleza, los hombres vivían en una constante guerra de todos contra todos. La urgencia de seguridad para garantizar el derecho natural; el cual define el autor “como la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin” (Hobbes, 1588 – 1679, pág. 139). Claro está, comprometiendo la libertad, principio básico de la democracia moderna desarrollado por Rousseau. Según Hobbes, el miedo a la muerte llevó a los hombres a crear el gran Leviatán o Dios mortal, para que éste, les brindara la seguridad de no tener que defender sus vidas por sus propios medios. “Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero” (Hobbes, 1588 – 1679, pág. 71).

La firma de un contrato entre los hombres y el Estado (previamente constituido) consiste en que el hombre cede la libertad con la que contaba en el estado de naturaleza de defender su derecho natural a la vida por sus propios medios al Estado, quien debe garantizar la seguridad necesaria para no vivir con miedo a la muerte. No obstante, para Hobbes el concepto de seguridad no se restringe únicamente a la garantía de la existencia física, sino que va más allá y se extiende también a la estabilidad social que permite disfrutar de una vida libre de amenazas (Orozco, 2005-2006).

Cuando finalizó la segunda guerra mundial e inició la guerra fría, la lucha por el dominio ideológico del mundo por parte de los Estados Unidos de América (EEUU) y la Unión Soviética (URSS) le permitió al primero, con base en una supuesta amenaza comunista, crear la Doctrina de Seguridad Nacional, para propiciar golpes militares a gobiernos elegidos democráticamente, imponiendo en países tanto de Centro América como del Cono Sur, dictaduras militares, es decir, Estados Unidos puso en práctica el terrorismo internacional para consolidar aquellas dictaduras y dichas dictaduras a su vez, impusieron el terrorismo de Estado en sus propios territorios. Noam Chomsky, explica en su libro “El miedo a la democracia” que el terrorismo internacional por parte de EEUU, se debe, precisamente a que éste le tiene miedo a la democracia.

El giro que tomó el rol de la seguridad en la conformación del Estado moderno planteada por Hobbes, cuando finalizó la segunda guerra mundial e inició la guerra fría, ha estado en el centro de análisis de diversos autores. Si bien, entre los Estados Unidos de América (EEUU) y la extinta Unión Soviética (URSS), no hubo un enfrentamiento directo, las consecuencias del “miedo a la democracia” por parte de EEUU, lo llevó a usar el poder que le atribuye Hobbes al Estado, no para hacer la paz como afirma el autor, sino, para materializar guerras.

Francisco Leal Buitrago, define la Doctrina de Seguridad Nacional, así: “Es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares” (Buitrago, La Doctrina de Seguridad Nacional, 2003, pág. 75).

En el contexto de la Doctrina de seguridad nacional, la seguridad no era para los pueblos, sino para consolidar la hegemonía de los Estados Unidos, cuyo precio fue en aquel momento la vida de miles de personas a quienes se les debía garantizar el derecho natural a la vida pero que debido a que a EEUU necesitaba mantener el Statu Quo y aumentar su dominio mundial, la seguridad consistió en que los Estados, usaron todo su poder para reprimir y asesinar a todo aquel que pensara diferente a la ideología anticomunista impuesta por el País del Norte.

La constitución, por parte de los Estados Unidos de las organizaciones que sentarían las bases para crear la doctrina de seguridad nacional, aún durante la segunda guerra mundial, inició en 1942 con la creación de la Junta Interamericana de Defensa, (JID) cuyas funciones originalmente consistían en prestar servicios de asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa a la Unión panamericana⁴⁰, la JID iría poco a poco tomando un sentido más activo en materia de defensa, prueba de ello es que tres años después de su creación se celebró en México la conferencia de guerra y paz, allí se recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América. En 1947 se firmó en Rio de Janeiro el “Tratado de asistencia Recíproca” (TIAR).

“La creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 proporcionó el piso jurídico-político para que otros organismos, como la Junta Interamericana de Defensa –creada en 1942– y el Colegio Interamericano de Defensa (órganos de apoyo del TIAR), pudieran articularse en forma plena a la orientación estadounidense” (Buitrago, La Doctrina de Seguridad Nacional, 2003, pág. 78). También, fue indispensable para el adoctrinamiento de los militares crear la Escuela de las Américas, donde se instruían los militares latinoamericanos sobre dicha doctrina y la forma de implementarla. La Escuela de las Américas enseñaba diferentes técnicas de torturas tanto físicas como psicológicas a los soldados, aprendizajes que han dejado como consecuencia en Centro y sur América, millones de personas desaparecidas, torturadas, violadas, masacradas y otros exiliados.

En sur América, la Doctrina de Seguridad Nacional fue implementada luego de golpes de Estado, por parte de los militares, es decir en dictaduras militares. La historia de Colombia es diferente, porque dicha doctrina se ha implementado en Democracia.

---

⁴⁰ La Unión Panamericana, fue reemplazada en 1948 por la Organización de Estados Americanos (OEA)

3.1 Doctrina de Seguridad Nacional y Política de Defensa y Seguridad Democrática: dos caras de la misma moneda en Colombia

Aristóteles, se caracteriza por no ser partidario de la democracia, pues la veía bastante defectuosa, dado que no creía en el saber del pueblo para gobernar. Al analizar la democracia, identifica cinco tipos diferentes de democracia.

La primera forma de democracia es donde prima la igualdad entre ricos y pobres en cuanto a derechos. La segunda consiste en que las funciones públicas se obtienen con arreglo a una renta. En la tercera especie de democracia todos los ciudadanos cuyo derecho no se pone en duda obtienen las magistraturas, pero la ley reina soberanamente. En la cuarta, basta para ser magistrado ser ciudadano con cualquier título, dejándose aún la soberanía a la ley, y, finalmente, la quinta forma de democracia, pese a que tiene las mismas condiciones que la cuarta, dice el autor que “traspasa la soberanía a la multitud que reemplaza a la ley, porque entonces la decisión popular, no la ley, lo resuelve todo. Esto debido a la influencia de los demagogos” (Aristóteles, La Política , 2005, págs. Lib VI, Cap IV).

Para Aristóteles, la demagogia es la corrupción de la democracia, la cual, se debe a la existencia de los demagogos, quienes se caracterizan por adular al pueblo, apelando a sentimientos, a través de sus discursos para dejar de lado el respeto por las leyes existentes y suprimir la libertad y la igualdad, propias de la primera especie de democracia que menciona el filósofo, en la cual, si se cumple principalmente la igualdad en derechos, sería la más pura de las formas de democracia, pero que los demagogos corrompen a través de sus discursos.

“Los demagogos sólo aparecen allí donde la ley ha perdido la soberanía. El pueblo entonces es un verdadero monarca, único, aunque compuesto por la mayoría, que reina, no individualmente, sino en cuerpo” (Aristóteles, La Política , 2005, págs. Lib VI, Cap IV). Es decir, que los demagogos, a través de las adulaciones al pueblo, son capaces, de quitarles la individualidad a las personas, consolidando a todos los individuos en un único cuerpo a quienes les hace creer, por ejemplo, que la persecución y ejecución de las personas que piensan diferente al gobierno de turno hace parte de la democracia, estando

por el contrario este tipo de prácticas, relacionadas con el autoritarismo y con el terrorismo de Estado.

La forma en que se relaciona la Doctrina de seguridad Nacional, implementada en los países del Cono Sur y la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) implementada en Colombia, si bien la primera bajo una dictadura militar y la segunda bajo democracia; consiste precisamente en la supresión de la igualdad en derechos, por tanto, de las libertades que en el contexto de la PSDS se dio bajo la demagogia protagonizada por Uribe Vélez, quien cobijado bajo la democracia, sometió al pueblo a la violación sistemática de sus derechos más fundamentales, de la misma manera como lo hicieron las juntas militares en las dictaduras del Cono Sur.

Colombia, llevaba 56 años en lo que se conoce como el conflicto armado, cuando llegó Uribe Vélez al poder. El conflicto armado, según varios autores de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” (CHCV), inició en 1946 con antecedentes en 1930, cuando luego de 44 años, cayó la hegemonía conservadora (1886-1930) y llegó al poder el partido liberal representado por Enrique Olaya Herrera en 1930. En 1946 subió al poder Mariano Ospina Pérez del partido conservador y con él, la creación de los primeros grupos paramilitares: los Chulavitas y los Pájaros, quienes se encargaban de perseguir y asesinar a los liberales.

En 2002, los recientes fracasos de los diálogos de paz que Andrés Pastrana Arango (presidente de Colombia 1998-2002) había adelantado con las FARC-EP, le permitió a Uribe Vélez, canalizar aquel descontento a través de sus discursos referentes a una amenaza terrorista existente y a su capacidad para brindar seguridad al pueblo con la puesta en práctica de la política pública, la PSDS. Al parecer, un gran número de colombianos estuvo de acuerdo con esta política guerrillera, aunque existe amplia información referente al rol del paramilitarismo en la política nacional desde 1997, quienes, a través de la intimidación, subían a sus candidatos al poder y obligaban a las personas a votar por ellos, así mismo llegó al poder Uribe Vélez. “El senador Cepeda, cuyo padre fue asesinado por militares y paramilitares cuando era congresista por la Unión Patriótica, presentó testimonios y documentos sobre supuestas reuniones de jefes paramilitares para apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, presuntos aportes económicos, movilizaciones proselitistas, coerción a otros candidatos y distribución de publicidad

política y movilización de votantes” (Abierta, 2014). Una de las características más notable de Uribe Vélez, fue su insistente apelación al gran amor que sentía por el pueblo colombiano, práctica propia de los demagogos, mientras violaba la Constitución Política de Colombia.

Sin la garantía de la igualdad en derechos y la libertad, el concepto de democracia pierde su esencia, Juan Jacobo Rousseau, considerado el padre de la democracia moderna, reitera lo ya dicho por Aristóteles, en cuanto a que la libertad y la igualdad unidas se constituyen como la esencia de la democracia, reclamada posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tras la revolución francesa en 1789 como pilar fundamental del Estado moderno. Seguidamente en 1948 se reafirmó universalmente la libertad como derecho y como la base principal de la dignidad humana en la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁴¹ (DUDH) al igual que la igualdad en derechos, consignado tanto en el Preámbulo como en el artículo 10⁴² de la DUDH.

En los regímenes de gobiernos puestos en práctica en el marco de las dictaduras del Cono Sur, se suprimió la independencia y distribución de funciones del poder público, si bien, comparados con la PDS implementada en Colombia vemos que la Corte Constitucional de Colombia mantuvo su autonomía para proteger la Constitución Política de 1991, imposibilitando la formalización de ciertas medidas represivas a través de las leyes, como, por ejemplo, “el Estatuto Antiterrorista” de Uribe Vélez. En este estatuto uno de sus artículos decía: “El que mediante prensa escrita, radio, televisión, o sistemas de información virtual, divulgue informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones militares o de policía, coloque en peligro la vida del personal de la fuerza pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el orden público, la salud moral pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto de sus acciones, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio” Estatuto Antiterrorista (Plataforma Colombiana de Derechos

---

⁴¹ El preámbulo inicia de la siguiente manera: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; posteriormente en los artículos 2, 3, 18, 19, 20, 28, 29 y 30, entre otros artículos, se hace alusión a ciertas libertades particulares.

⁴² Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Humanos, 2003, pág. 158). El autoritarismo propio de las dictaduras se impuso en contraposición a las leyes.

Pese a que Uribe Vélez, no logró formalizar a través de las leyes varias medidas represivas, su gobierno las llevó a cabo de manera clandestina, a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde donde se hicieron interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales, amenazas, hostigamientos, homicidios y ejecuciones extrajudiciales (homicidios en persona protegida), violando así la Constitución Política, en la cual está formalizada la democracia participativa y el Estado Social de derechos. Mediante ese recurso, el de la clandestinidad se puso en práctica el terrorismo de Estado, propio de las dictaduras militares.

El entonces, Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (2002-2006), Jorge Noguera, fue condenado a veinte cinco años de prisión por los siguientes delitos: concierto para delinquir agravado, el homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis, la destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos y la revelación de asunto sometido a secreto (Semana, Jorge Noguera, condenado a 25 años de cárcel, 2011). Respecto a este último delito (revelación de asuntos sometidos a secreto) se demostró que Noguera, filtró a los paramilitares en el DAS y trabajaba de la mano con ellos a quienes, además les entregaba información privilegiada, con la cual el “Bloque Norte” de los paramilitares cometieron innumerables crímenes⁴³ en la región del Caribe Colombiano, principalmente.

Por las interceptaciones ilegales, a las cuales, los medios de comunicación llamaron “Chuza-DAS”, Noguera, no recibió condena. Dentro del DAS se creó, el Grupo Especial de Inteligencia (G-3) quienes se encargaban de espiar, hostigar, amenazar, torturar, entre otros delitos, a personas sobre las cuales recaían sospechas de ser cercanas a las guerrillas. “La condena contra Noguera ratifica la existencia de un plan sistemático y generalizado que se fraguó, no sólo desde el llamado G3, grupo que coordinaba la persecución contra

---

⁴³ Verdad Abierta “Pero los casos no se limitaban a la persecución sistemática contra líderes sociales que se caracterizaban por su defensa de los derechos de los desplazados y las víctimas de la violencia, también fueron acibillados el presidente del Consejo de Administración de Coolechera Gustavo de Silvestri y varios miembros del sindicato de esa cooperativa fueron perseguidos en un intento del Bloque Norte por apoderarse de la principal empresa de lácteos en la región Caribe, en línea (<https://verdadabierta.com/los-paras-y-el-das/>)

opositores del gobierno Uribe, sino que involucró a toda la institución” (Prensa-Colectivo, 2017).

La Corte suprema de Justicia, por su parte, ordenó compulsar copia a la cámara de representantes para investigar al ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, quien al ser el encargado de “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República” y “dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”, tal como se encuentra especificado en el artículo 189, numerales tres y cinco de la Constitución Política de Colombia, debe responder por los crímenes cometidos por la fuerza pública durante su gobierno.

En el informe, “el Embrujo Autoritario, primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, ochenta organizaciones defensoras de los derechos humanos, muestran detalladamente cómo se violaron los diferentes derechos, específicamente los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y los derechos civiles y políticos, en ese primer año de gobierno de Uribe Vélez. Entre los delitos cometidos contra tales derechos se encuentran: las detenciones arbitrarias, el secuestro, los homicidios, la vinculación de la sociedad civil a la guerra, (violando el DIH, al no diferenciar a los combatientes de los civiles) las amenazas, la vulneración a la libertad de expresión, la censura, entre otras violaciones a los derechos humanos. Debido a los innumerables crímenes cometidos en Colombia en el primer gobierno de Uribe Vélez, la justicia aún no ha llegado a todos los responsables. Trece años después de finalizado el primer período de gobierno de Uribe Vélez, continúa en el poder y manejando las riendas del país.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al DIH que hicieron de la PDSD una réplica de la Doctrina de Seguridad Nacional en democracia, al lograr imponer el terrorismo de Estado; continúan hoy (2019) en la impunidad.

3.2. Políticas de Seguridad en Latinoamérica: Tolerancia Cero en la Hegemonía de los Estados Unidos de Norte América

La tolerancia cero como programa de seguridad impulsada por los Estados Unidos e implementada en varios países latinoamericanos; ha dejado como consecuencia negativa, la represión y violación de los DDHH y del DIH por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados.

Si bien, el origen de la frase “tolerancia cero”, es desconocido, encontramos su impulso en 1982, cuando James Q Wilson y George L. Kelling, dos criminólogos de los Estados Unidos, publicaron en la revista cultural y literaria “The Atlantic Monthly” un artículo intitulado “ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios”. La tesis de base de los autores es que, si una ventana de un edificio está rota y se deja sin reparar, pronto romperán el resto de las ventanas, con base en esta teoría se empiezan a impulsar una serie de medidas represivas opuestas a la seguridad de las personas.

Los autores empiezan analizando una modalidad de patrullaje de a pie de la policía, implementada por el Estado de Nueva Jersey en la ciudad de Newark, argumentan que pese a que parecía no ser efectiva esta modalidad y pese a que los índices de criminalidad no disminuyeron, la comunidad se sentía segura, la razón, según los autores, era que al analizar los temores de la gente en la calle, además de temerle al delito, a ser atacados de manera violenta, también le temían a ser molestados por personas indisciplinadas, no violentas ni delincuentes, sino personas desaliñadas, revoltosas o impredecibles: mendigos, borrachos, adictos, adolescentes ruidosos, prostitutas, vagabundos y por personas mentalmente perturbadas. Los policías de a pie lo que hicieron fue mantener el orden en este sentido, aseguran los criminólogos.

Los autores continúan mostrando, a través de una investigación presentada por la fundación de la policía, cómo en el mantenimiento del orden la policía de a pie conocía a los locales, es decir a las personas del barrio e identificaba a los extraños como sospechosos y los miraban con recelo, podían incluso pedirles que se fueran del barrio. Conociendo entonces a la gente del barrio, todo tenía un orden: los borrachos podían estar en ciertos lugares y sólo sentados, no acostados. Quienes molestaban a la gente en las paradas de los ómnibus podían ser arrestados por vagancia, los adolescentes debían estar

en silencio, etc. Existía una complicidad entre los vecinos del barrio y la policía, según los autores. Cada barrio podía tener normas diferentes, el fin, mantener el orden, aunque esto requiriera tomar medidas informales o extralegales que evidentemente no soportarían un reto legal. Los criminólogos enfatizan en un trabajo entre la comunidad y la policía.

Los autores también mencionan las encuestas realizadas por, Susan Estrich, de la Escuela de Leyes de Harvard, a través de dichas encuestas dan cuenta de que la mayoría de personas le temen a los adolescentes, pese a que no hubiesen índices de violencia producida por ellos. El desorden, entonces, según los autores, es lo que genera la sensación de inseguridad. “Conocer esto ayuda a comprender la importancia de las de otro modo inofensivas manifestaciones conocidas como grafitis en los trenes subterráneos. Como señala Nathan Glazer, la proliferación del grafiti, aun cuando no sea obsceno, confronta al pasajero con el ineludible conocimiento de que el ambiente que soporta diariamente por una hora o más está fuera de control, y que alguien puede invadirlo y producir cualquier daño que la mente pueda imaginar” (Kelling, Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios , 1982, pág. 5). Según los criminólogos, a muchas comunidades les produce más temor el desorden en las calles, que la idea de un delito violento, pese a que el desorden no está asociado con los delitos violentos.

Bajo los anteriores argumentos desarrollan su tesis diciendo que si una ventana de un edificio está rota y se deja sin reparar, el resto de las ventanas serán rotas pronto. Argumentan que este hecho no tiene que ver con que los habitantes de un barrio en particular sean delincuentes o desordenados, sino, que “una ventana sin reparar es señal de que a nadie le preocupa, por tanto, romper más ventanas no tiene costo alguno” (Kelling, Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios , 1982, pág. 3). Finalmente, sugieren que no controlar ciertas conductas conduce además al colapso de los controles comunitarios. Enfatizan en la necesidad de controlar desde los extraños hasta lo adolescentes. El desorden da la sensación a los residentes de un barrio de que los delitos violentos van en aumento, este hecho los hará privar de vivir el barrio como propio, según los criminólogos.

La ciudad de los Estados Unidos donde se puso en práctica por primera vez el programa de seguridad de la tolerancia cero, fue New York en 1994, cuando fue elegido como

alcalde Rudolph Giuliani, quien nombra como jefe del departamento de policía de New York a William Bratton; por su trabajo realizado entre 1990 y 1993. En ese entonces, Bratton había sido jefe del departamento de policía de tránsito (*Transite Police Department*) y se había distinguido por haber conducido una sensacional operación de tolerancia cero en el metro de Nueva York, área de altas tasas de micro-delincuencia. En aquellas circunstancias, los objetivos principales de la campaña de Bratton habían sido: “la eliminación total de los *grafiti* del metro; el alejamiento de los sin techo que se servían del metro como cobijo nocturno; la prohibición de la limosna «agresiva» (*aggressive panhandling*) en el metro; una drástica reducción de los delitos contra la propiedad; el reconocimiento de poderes discrecionales a la policía para proceder a arrestos y registros personales” (Giorgi, 2005, pág. 160). En declaraciones públicas como la realizada al periódico “La Nación” de la Argentina, el 9 de enero de 2009, Bratton afirma que “la policía debe sancionar todas las infracciones, por más insignificantes que parezcan, porque la sumatoria de esas pequeñas faltas crea un clima de desorden e inseguridad que favorece la irrupción del delito”; claramente Bratton está inspirado en la teoría de las ventanas rotas, pues nombró a James Q Wilson como su mentor intelectual (Woo, 2012).

Los resultados obtenidos por las medidas de Bratton en el metro de New York, fueron evidentes, según explica De Giorgi, el número de detenciones por delitos menores pasó de mil trescientos (1300) en 1990 a cinco mil (5000) en 1994, es así como esta misma medida se implementa en toda la ciudad de New York, bajo el mando de Bratton. Para lograr su objetivo en la ciudad: incrementó los órganos del departamento de policía, otorgó máxima discrecionalidad al departamento en el cumplimiento de las funciones de control, realizó trabajo conjunto entre los diferentes departamentos, puso en práctica el patrullaje agresivo en las zonas calificadas como de mayor riesgo de la ciudad y estableció un banco de datos de las personas de la calle.

Más allá de si la disminución de la violencia y de la delincuencia callejera se debió a la aplicación de la política de seguridad de Bratton o que dicha disminución había iniciado a nivel nacional desde 1990, es decir, cuatro años antes de la implementación de lo que se conoce como política de tolerancia cero o la teoría de las ventanas rotas; tema que analiza De Giorgi, para poner en duda la efectividad de esta política de seguridad en materia de disminución del crimen; lo cierto es que la estrategia puesta en práctica por el jefe del departamento de policía de New York, Willian Bratton, durante la alcaldía de

Rudolph Giuliani, puso de manifiesto la represión y violaciónn sistemática a los derechos humanos.

En 1996 Amnistía Internacional, publicó un informe intitulado “*Police Brutality and Excessive Force in the New York Police Departament*” (brutalidad y exceso de fuerza de la policía en el departamento de policía de New York), en el cual denuncia la sospecha de prácticas abiertamente racistas, debido a que los afroamericanos presentaron el 75% de las denuncias y los latinoamericanos presentaron el 21%. Sólo el 4% de denuncias fue presentado por el resto de ciudadanos, también denuncian la existencia de un código de silencio de una cultura de la omertá (ley del silencio) en el interior del NYPD, alimentada por el propio Bratton (Giorgi, 2005, pág. 170). Según menciona el autor, el consenso de las masas respecto a la aplicación de esta política de seguridad se debió al enorme apoyo político que el alcalde a través de los medios de comunicación y de la clase media ofrecía al departamento de policía de New York.

El programa de Tolerancia Cero, luego de su implementaciónn en New York, pasó a implementarse en Latinoamérica, en países como Brasil, Argentina, Chile, México, el Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, entre otros.

La experiencia en Brasil se materializó cuando en 1997 “la policía militar brasileña adoptó el modelo de policía comunitaria como una filosofía y estrategia de organización y anunció un plan para su implementación en el Estado de Sao Paulo” (Neto, 2008, pág. 109). Dicho modelo consistió en vincular a la ciudadanía en la lucha contra el crimen; explica el autor que entre sus objetivos principales se planteó: 1. Reformar a la policía militar mediante su transformación de una organización cerrada en una organización abierta a la consulta y a la colaboración con la comunidad; 2. Mejorar la calidad del servicio de policía buscando una mayor efectividad y eficiencia, así como respeto por el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos y 3. Mejorar la seguridad pública mediante la reducción de la delincuencia, el desorden y la inseguridad en la sociedad.

La implementación del modelo de policía comunitaria, conocida como política de “Tolerancia Cero” y también conocida como política de “Mano Dura” propia de la teoría, antes mencionada, “ventanas rotas” se ha caracterizado a nivel regional no sólo por el control de la delincuencia, el crimen, a través de la represiónn de la policía a los jóvenes

y a los diferentes, sino que también, ha impulsado el terrorismo de Estado, en la medida en que la clase política ha usado el tema de la seguridad como herramienta estratégica para sus campañas electorales, atribuyendo a la policía la potestad de asesinar a los delincuentes, dejando de lado el derecho inalienable a la vida, desconociendo además las leyes y el rol de la justicia para adelantar los procesos judiciales correspondientes para cada caso. En apoyo al anterior programa, al igual que en New York, el alcalde usó los medios de comunicación para impulsar el programa, en Brasil, el diputado estatal en la asamblea legislativa de Rio, José Guilherme Godinho Sivuca, conocido como “Sivuca”, ex policía, quien enarbola como lema de su campaña electoral que “el buen bandido es el bandido muerto” (Petroni). Logrando ser electo en 1998. Igualmente, en la Argentina, Carlos Ruckauf, en 1999 cuando era candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, usó para su campaña la frase “Hay que meter bala a los delincuentes”, según diversas fuentes, la afirmación de la anterior frase lo hizo subir en las encuestas y ganar la gobernación ese año.

En el caso particular de la Argentina, el amplio trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, específicamente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) quien documentó desde 1993 los abusos policiales, ejerciendo presión a tal punto que “el 19 de diciembre 1996, el entonces gobernador de la provincia Eduardo Duhalde, declaró a la policía en “estado de emergencia” por la corroboración de abusos cometidos ese año” (Fuentes, 2004). Posteriormente, en 1997, Duhalde designó como ministro de justicia y de seguridad de la provincia de Buenos Aires a León Arslanián, quien, tal como argumenta Claudio Fuentes, “tomó serias medidas contra la policía, que incluyeron el retiro de mil doscientos uniformados, descentralización de la línea de mando, creación de defensores del ciudadano, y creación de instancias de monitoreo de las prácticas policiales” (Fuentes, 2004). Por su parte, el Congreso Nacional, sancionó una ley que restringía la facultad de verificar identidad a diez horas, anterior a esta ley, la policía federal tenía veinticuatro (24) horas para la verificación de las identidades.

Con la llegada a la gobernación de Ruckauf en 1999 y su programa de seguridad basado en “mano dura” contra los infractores, según el autor antes citado, las cifras muestran que pese al trabajo sistemático de los organismos de la sociedad civil pro derechos humanos durante la década de los 90, hacia fines de dicho periodo los niveles de violencia policial se incrementaron y las facultades de la policía también se ampliaron.

Las consecuencias más negativas en materia de violación a los derechos humanos, relacionadas con la implantación del programa de tolerancia cero y/o de mano dura en Latinoamérica lo sufrieron los países del triángulo de Centro América: el Salvador, Honduras y Guatemala, y, en el norte de Sur América, Colombia.

En el Salvador en 2003, el decreto 158 o ley Antimaras⁴⁴ también conocido como “Plan Mano Dura”, le otorgó a la policía la potestad para arrestar a todos los jóvenes sospechosos de pertenecer a las pandillas de los Maras, incluso a menores de edad⁴⁵. La seguridad, entonces, giraba en torno a combatir a los Maras; desde la implementación de la ley antes mencionada, el índice de homicidios aumentó gradualmente año tras año; en 2003 hubo cuarenta (40) homicidios por cada cien mil (100.000) habitantes, en 2004, serían cuarenta y nueve (49), en 2005, sesenta y dos (62) y en 2006, sesenta y cinco (65) (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central , 2009-2010). Los llamados “Escuadrones de limpieza social” conformados por civiles y policías intensificaron su criminalidad, a partir de la implementación del “Plan Mano Dura” (Cruz, 2010, pág. 6).

En el caso de Guatemala, el programa de seguridad basado en la tolerancia cero, recibió el nombre de “Plan Escoba” y en Honduras el de “Libertad Azul”, las características de base de los tres Países del triángulo de Centro América, en cuanto a los programas de seguridad, es que veían a las pandillas de los Maras como la principal amenaza que había que combatir y contra ellas enfocaron dichos programas de seguridad.

Otra característica de estos programas de seguridad es que la violencia criminal, recae en mayor medida sobre los órganos de seguridad del Estado: policía y ejército, como también sobre funcionarios públicos. Según José Miguel Cruz, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de grupos armados clandestinos enquistados

---

⁴⁴ Los maras es una organización internacional de pandillas criminales asociadas, que se originaron en los Ángeles y se han expandido por Latinoamérica sobre todo en los países del triángulo de Centro América

⁴⁵ Art. 2.- La presente ley se aplicará a todas las personas mayores de doce años de edad, que cometan los delitos o faltas contempladas en esta ley o en Código Penal, que en lo sucesivo podrán denominarse como conductas, dentro del territorio nacional.

en las estructuras del poder en Guatemala, los cuales van desde el ya desmantelado Estado Mayor Presidencial hasta agentes de la policía y antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensas Civiles.

Precisamente la creación de Escuadrones de la muerte, de Escuadrones de “limpieza social” y de paramilitares, ha sido la estrategia de los gobiernos de turno para intentar invisibilizar la responsabilidad directa de los Estados en los homicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, entre otros crímenes.

En Colombia, el programa de seguridad de “Mano Dura” inició en 2002, cuando llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, cuyo slogan de la campaña presidencial fue precisamente “Mano Firme, Corazón Grande” dicha campaña que apuntaba a acabar con las guerrillas, a quienes catalogó de terroristas para mal justificar sus arremetidas contra ellas, lo llevó a ganar en la primera vuelta la presidencia de Colombia. Las consecuencias de esta decisión de la mayoría del pueblo, ya las he analizado anteriormente.

Al igual que en Colombia, en Guatemala, el salvador y en Honduras, los programas de seguridad basados en la “Tolerancia cero” o programas de “Mano Dura” solo han intensificado el crimen, la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos y al DIH. Los datos indican un aumento de 13 puntos en la tasa de homicidios en apenas ocho años” (PNUD, Informe de Desarrollo Humano para América Central , 2009-2010).

En el triángulo norte de centro América, donde fue aplicada esta estrategia aumentó la criminalidad y en Colombia las FARC-EP no fueron derrotadas, sino, por el contrario, esta guerrilla aumentó su capacidad de resistencia y organización, sobreviviendo de manera exitosa a la guerra, a tal punto de recuperar su Status político para sentarse a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos y firmar un acuerdo de paz, a través del cual, se les garantizan los derechos que tradicionalmente les fueron vulnerados: derecho a la participación política, derecho a trabajar las tierras, etc. La vulneración de dichos derechos desde la violencia partidista de mitad del siglo XX, obligó a los campesinos a tomar las armas y luego a consolidarse como grupos insurgentes; iniciando así el conflicto armado en Colombia. Igualmente en Honduras, Guatemala y el Salvador, “la pandilla Mara Salvatrucha y la pandilla de la calle Dieciocho, no han desaparecido; por el

contrario, se han convertido en poderosas mafias con capacidad de extorsionar a amplios sectores de la población” (Cruz, 2010).

Diversas encuestas, estudios e incluso los diferentes medios de comunicación, evidencian que la violencia y el crimen aumentó en los países en donde se ha implementado el programa de seguridad basado en la “Tolerancia Cero” (teoría de las ventanas rotas); así mismo, la violación a los derechos humanos se encuentra ampliamente documentada (ACNUR, OEA, entre otras). Los países en los que se ha implementado este tipo de políticas de seguridad-represivas; se caracterizan por la pobreza generalizada, una falta de infraestructura social, el analfabetismo, la desnutrición infantil, problemas de salud y enormes desigualdades en la distribución de la riqueza. La mayoría de las personas tiene pocas perspectivas de una vida mejor (Manz, 2008).

Lorena Frías, Argumenta que parte fundamental de una sociedad democrática es el establecimiento de políticas de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, según la autora, el rol de los derechos humanos es limitar el poder del Estado (Frías, 2012, pág. 9). Entre las críticas más recurrentes a los programas de seguridad basados en la “Tolerancia Cero” se destacan que dichos programas no tienen en cuenta el contexto social, económico, ni cultural de las personas a quienes consideran “infractores”, como tampoco se han implementado programas sociales con el fin de contrarrestar lo que las fuerzas de seguridad llaman “desorden” con la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto Ileana Arduino, en el mismo documento afirma que “si tengo una política de seguridad muy ambiciosa en términos de reconocer complejidad, de gestionar con distintos niveles de conflictividad, de darle centralidad a la prevención, pero el conjunto del resto de las políticas estatales no está en sintonía, caerá más temprano que tarde, nuevamente, en un reduccionismo penal o en las respuestas meramente represivas” (Frías, 2012, pág. 27). Esto es justamente lo que ha ocurrido en los países analizados: Guatemala, el Salvador, Honduras y Colombia, aunque el tipo de conflicto entre los tres primeros países y Colombia es diferente, las políticas de seguridad han sido las mismas. Las diferencias entre los conflictos consisten en que, en los países del triángulo de Centro América, el problema han sido las pandillas, las cuales carecen de ideales políticos, mientras que en Colombia los actores de conflicto armado tradicionalmente han sido las guerrillas, cuyo objetivo ha girado en torno a tomar el poder político para cambiar el Statu Quo. Su subversión se ha centrado en exigir la garantía del

derecho a la participación política, el derecho a la propiedad privada (a las tierras), reclamamos que les da la categoría de grupos subversivos, de combatientes, mientras que las pandillas de los Maras no tienen esta categoría, sino, la de bandas criminales.

4. El miedo como soporte de la Política de Defensa y Seguridad Democrática

“El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal”

Aristóteles

El miedo en el campo de la filosofía política⁴⁶ ha sido abordado por varios filósofos; antiguos, como Aristóteles, modernos como Hobbes y contemporáneos como Hannah Arendt, entre muchos otros. También por historiadores como Georges Lefevre en su obra “El gran pánico de 1789” donde el autor argumenta cómo el hecho de una falsa noticia (el complot) contribuyó a que creciera el gran pánico. Finalmente recurrimos someramente a la neurociencia para tratar de entender el origen neuronal del miedo y ubicamos algunos elementos del psicoanálisis, porque allí encontramos otra dimensión relacionada con el descentramiento de la razón, para priorizar el miedo como emoción primaria.

Dados los hechos históricos transcurridos desde el inicio de la modernidad relacionados con las guerras y las diferentes estrategias puestas en práctica por los diferentes actores es quizá, Corey Robin el teórico político quien nos ofrece una definición del miedo político adecuada para comprender la función del miedo en la PDSD; debido a que el autor, analiza la construcción del miedo, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (S11). Recordemos que, a raíz de dichos atentados, los Estados Unidos de América, lograron construir un nuevo enemigo global: el terrorismo, el cual fue el fundamento que permitió implementar la PDSD, cuya bandera de lucha fue precisamente acabar con el terrorismo en Colombia.

La guerra y la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia, tienen ciertas particularidades que han hecho difícil comprender y adoptar explicaciones para interrogantes como estos: ¿Cómo operó el miedo para la implementación de la PDSD? ¿A qué se le tuvo miedo y por qué? Corey Robin, quien publica su obra “El Miedo: historia de una idea política” en 2004, define el miedo político de dos formas, la primera consiste en el temor a que el bienestar colectivo resulte perjudicado por el terrorismo, por

---

⁴⁶ Chantal Mouffe. El Retorno de lo Político. Pág. 5. “«lo político», ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales, y «la política», que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por «lo» político”

el crimen o por la descomposición moral; la segunda forma consiste en la intimidación por parte del gobierno o algunos grupos. Esta segunda forma de miedo se encuentra relacionada con la desigualdad propia de los problemas internos en una nación, por ejemplo, miedo a perder el trabajo, el maltrato en las mujeres, entre otros, (Robin, 2004). Los miedos que emanan de los problemas sociales internos son consecuencia de las leyes que regulan las amenazas en cuanto a las políticas económicas, sociales y culturales de cada País. Más adelante Robin (2004), expresa que el miedo político es “una herramienta política, un instrumento de élite para gobernar o un avance insurgente creado y sostenido por los líderes o los activistas políticos para obtener algo de él, ya sea porque les ayuda en su búsqueda de un objetivo político específico, porque refleja o apoya sus creencias morales y políticas, o ambas (Robin, El miedo: historia de una idea política , 2004, pág. 40).

Para explicar un poco la primera forma de miedo político, Robin, se remonta a la historia bíblica que narra el mito del origen del sentimiento de culpa como una forma del miedo. Argumenta el autor que en la narrativa del episodio en que Eva y Adán comieron el fruto de aquel árbol, experimentaron la pérdida del estado de seguridad y conocieron el sentimiento de miedo, pues, perdieron la inocencia y tuvieron conciencia del mal. Entonces, propone una analogía con lo ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica con los S11: es como si se hubiese perdido el paraíso Norte-Americano. Nos sugiere Robin, con su analogía, que la manera en que transcurre la vida y las acciones de los hombres es fundamentalmente distinta cuando se crea la conciencia de los males que amenazan; éstos originan el sentimiento de miedo (Robin, 2004).

La anterior reflexión me parece pertinente para aproxime al fenómeno social y político vivido en Colombia desde la campaña electoral de Álvaro Uribe Vélez, y su primer período de gobierno, ya que el elemento fundamental de este fenómeno, fue construir unas amenazas, la cuales evocan el miedo para presentarse él, a través de la PDSO como quien garantizaría la seguridad, desplazando la importancia de la realidad de los motivos del miedo, los cuales debían ser los relacionados con la segunda forma de miedo que analiza el autor, es decir, aquella relacionada con la desigualdad propia de los problemas internos y no con la primera, relacionada con una amenaza terrorista, la cual dista de ser real, por lo menos por parte de las guerrillas, tal como lo argumentamos en el segundo capítulo de este documento.

Luego de analizar en el primer y segundo capítulo de éste documento, tanto las que he llamado amenazas instituidas correspondientes a la primera forma de miedo político según Robin, como las amenazas reales, correspondientes a la segunda forma de miedo enunciada por el autor; en el marco de la PDSD, vemos que Robin, sólo nos aporta las definiciones como tales del miedo político, pero no nos acerca a la posibilidad de comprender, en el contexto de la implementación de la PDSD, cómo se construyó el miedo; debido a que siendo las amenazas reales con las que convivía la mayoría de la gente (pobreza, desempleo y violación al derecho a la salud), el miedo a éstas amenazas fue desplazado por el miedo al terrorismo, cuando en la práctica y según todas las normas internacionales (ya referenciadas en el segundo capítulo), el terrorismo se refiere y se define como el atentado de un país contra otro, no a los conflictos internos, es decir, que el terrorismo fue el enemigo interno que se construyó en el marco de la PDSD y requirió para dicha construcción, una estrategia que quizás sólo el psicoanálisis nos permita acercarnos a la posibilidad de intentar comprender.

La estrategia para implementar la PDSD, consistió, entonces, en la creación de aquellas amenazas que he llamado instituidas, las cuales posibilitaron el ocultamiento de las amenazas reales. ¿Cómo fue posible éste hecho? Sigmund Freud, en “La psicología de las masas y análisis del yo”, explica que la psicología de las masas trata del individuo como miembro de un linaje, de un pueblo, de una casta, de un estamento, de una institución o como una multitud organizada en forma de masa, durante cierto lapso y para determinado fin (Freud, 1921). Si bien, existen varias clases de masas, Freud, analiza lo que él llama “Dos masas artificiales: el ejército y la iglesia”. “En la iglesia, lo mismo que en el ejército, y por diferente que ambas sean en lo demás, rige idéntico espejismo (ilusión), a saber, hay un jefe, Cristo en la iglesia católica y el General en el ejército, que aman por igual a todos los individuos de la masa” (Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, 1921, pág. 89).

Nuestra hipótesis, en cuanto a cómo se logró ocultar las amenazas reales e instituir otras a través de la política pública PDSD, es que Uribe Vélez, por un lado, recurrió a las religiones logrando a través de sus discursos, posicionarse como un líder moralmente correcto, lo cual lo llevó a tener muchos seguidores. Por el lado del ejército, también logró posicionarse como su máximo líder por medio de unos discursos agresivos, guerreristas y

su constante autodenominación como el primer soldado de la patria. Siendo estos liderazgos los que le posibilitaron por medio de la PDSD, construir el sentimiento de miedo para gobernar de manera autoritaria, dejando como consecuencias negativas innumerables víctimas a quienes se les violaron los derechos humanos y el DIH.

Dos masas artificiales, un líder: Álvaro Uribe Vélez. Freud, supone que las pulsiones en el ser humano son de dos clases: las eróticas (amor) y la pulsión de agresión (pulsión de muerte) (Freud, ¿Porqué la guerra?, 1932-36). En otro documento, “Psicología de las masas y análisis del yo”, explica que la libido, tomada de la doctrina de la afectividad, a su vez está tomada del Eros platónico que significa amor; es el que cohesiona a las masas y así las mantiene” (Freud, Psicología de la masas y análisis del yo, 1921, pág. 86). Sólo por amor es que se logra conformar y mantener cohesionadas a las masas, dicho amor lo sienten los individuos en dos direcciones que Freud llama “doble ligazón”: hacia el jefe y hacia los otros individuos que conforman la masa.

Freud, relaciona la condición anímica de los individuos que conforman una masa con la horda primordial. Retomando la argumentación de Darwin, quien muestra que “la forma primordial de la sociedad humana fue la de una horda gobernada despóticamente por un macho fuerte” (Freud, Psicología de la masas y análisis del yo, 1921, pág. 116). Intentará mostrar que quedaron huellas de aquella horda en sus herederos, pues, la característica principal de las masas artificiales (Iglesia y ejército) es la del individuo súper fuerte que él relaciona con el super hombre de Nietzsche, quien es autónomo, racional y no necesita querer a nadie, ubicado en medio de personas iguales entre sí, guiadas por el amor que sienten por el jefe y no por la razón, pues han perdido la individualidad al adoptar un alma colectiva, es decir, no piensan, y menos críticamente.

En la horda primordial, explica Freud, los hijos se sentían perseguidos por el padre, quien les reprimía la sexualidad y los maltrataba, allí no experimentaban los miembros de la masa el espejismo de que el jefe los amaba a todos por igual, sino por el contrario, estaban sometidos o, por decirlo de alguna manera, esclavizados por el jefe, con sus libertades “naturales” coartadas⁴⁷. El hecho de que en el ejército y en la Iglesia, se experimente

---

⁴⁷ Freud, argumenta que los hijos ya cansados de la represión y persecución por parte del jefe (padre) deciden asesinarlo, hecho que da nacimiento al sentimiento de culpa, el cual consiste en la tensión entre el

dicho espejismo, se debe a una adaptación idealista de lo que en realidad fue la horda primordial; a saber, que todos los hijos se sabían perseguidos por el padre (Freud, *Psicología de las masas y análisis del yo*, 1921, pág. 189). En cuanto a la esencia de la conformación de las masas artificiales y su relación con aquella herencia arcaica de la autoridad del padre, dirá Freud que aún hay algo no comprendido; esto es la hipnosis y la sugestión. Conceptos que retoma de otros autores, entre ellos, Le Bon.

Freud analiza al hipnotizador, el cual afirma tener un poder misterioso a través del cual le quita la voluntad a los sujetos. El hipnotizador, logra “la representación de una personalidad muy poderosa y peligrosa, ante la cual sólo puede adoptarse una actitud pasiva-masoquista y resignar la propia voluntad” (Freud, *Psicología de las masas y análisis del yo*, 1921, pág. 121). Dicha personalidad del hipnotizador lo que hace precisamente es remitir a los sujetos a la autoridad del padre primordial y por ello, la aceptan por la herencia arcaica inconsciente que poseen; ahora se trata de la autoridad del hipnotizador. Sugiere Freud; que el jefe de las masas actúa de una manera similar al hipnotizador, apelando a la autoridad del padre primordial.

En cuanto a la sugestión, Freud la define como “un convencimiento que no se basa en la percepción ni en el trabajo de pensamiento, sino en una ligazón erótica” es decir, que los individuos inmersos en las masas, al no pensar, porque han adoptado un alma colectiva, pueden expresar lo que tenían reprimido sin conciencia de culpa, esto es, toda la maldad del alma humana. La irracionalidad en los miembros de las masas evidencia la regresión a un estado anímico primordial, afirma Freud. “El conductor de la masa sigue siendo el temido padre primordial; la masa quiere siempre ser gobernada por un poder irrestricto, tiene un ansia extrema de autoridad: según la expresión de Le Bon, sed de sometimiento” (Freud, pág. 121). Antes de Uribe Vélez lanzarse a la presidencia de Colombia, ya era de conocimiento público su personalidad autoritaria, guerrerista y violenta; su pulsión de agresión ya era conocida, como también sus delitos.

El protagonismo de Uribe Vélez en la conformación y fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se conocían desde 1997, cuando ejercía el

---

superyó que se ha vuelto severo y el yo que le está sometido, es decir, que el superyó, reemplaza la autoridad del padre o líder y debido a que el yo no se puede ocultar del superyó, es ahí cuando surge la conciencia de culpa.

cargo de gobernador de Antioquia; Jaime Hernando Garzón Forero, el periodista, abogado, humorista y mediador de paz en Colombia, asesinado el 13 de agosto de 1999, a través de los diversos personajes que interpretaba, puso de manifiesto este hecho y anticipó que Uribe Vélez se convertiría en un dictador al servicio de los Estados Unidos de América para hacer la guerra⁴⁸.

Posteriormente, en el año 2000 se le abrió una investigación a Uribe Vélez, por dos masacres perpetradas por los paramilitares en el municipio de Ituango (Antioquia), precisamente cuando él ejercía como gobernador de este departamento; dichas masacres las ejecutaron los paramilitares en las siguientes aldeas o corregimientos: “La Granja”, el 11 de junio de 1996, donde asesinaron a cinco personas. Posteriormente el 22 de octubre de 1997, se tomaron el poblado de nombre “El Aro”, durante siete días, tiempo en el que torturaron y masacraron a diecisiete personas, sin que las fuerzas de seguridad del Estado se hicieran presente. En cuanto a la relación directa con el cartel de Medellín, su amistad con Pablo Escobar y el hecho de haber otorgado cientos de licencias de aeronavegación a los narcotraficantes entre 1980 y 1982, cuando fue director de la Aeronáutica Civil. Ya había suficiente información antes de las elecciones presidenciales del año 2002. Pese a la información existente que lo relacionaba tanto con crímenes de Lesa Humanidad como con el narcotráfico fue elegido presidente de Colombia. Recordemos que fue el primer presidente de la historia de Colombia, en ganar en la primera vuelta. En el año 2004, se desclasificó un documento que había sido elaborado en 1991 por la agencia de inteligencia de EEUU, en el cual se enumeran 104 asociados al narcotráfico, Uribe Vélez es el número 82⁴⁹ en ese documento. Pese a este hecho fue reelegido en 2006, también en primera vuelta.

“Mano firme”: pulsión de muerte en Uribe Vélez

Cuando Uribe Vélez, se lanzó a la presidencia, el slogan de su campaña fue “Mano firme, corazón grande”. Vemos que en este slogan se encuentran representadas las dos pulsiones que, según Freud, son innatas en los seres humanos, el Eros y la pulsión de muerte.

---

⁴⁸ Rufinorock. (Octubre 12 de 2008). Jaime Garzón, la sentencia de su muerte {Archivo de video}. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=OfdSk6MYE8c&t=6s>

⁴⁹ Ver documento: <https://drive.google.com/file/d/0B4lHh510lrExVmZxZ3QwRFk5MUE/view>

La mano firme va dirigida a hacerles la guerra a las ahora recién desarmadas guerrillas de las FARC-EP, quienes fueron el principal objetivo de su programa de Seguridad (pulsión de muerte). “Corazón grande” hace referencia a la democracia para el pueblo colombiano (Eros o amor): “Ustedes saben que vivo jugado contra el terrorismo y que ese es un compromiso que tengo hasta el último día de mi vida. Pero pueden tener la certeza que así como odio el terrorismo, quiero más a la democracia” (Presidencia, 2003).

Para canalizar aquella herencia de la horda primordial a que se refiere Freud, donde el padre era maltratador, violento y agresivo, Uribe Vélez puso en práctica la primera frase de su slogan: “Mano firme”, no sólo haciéndole la guerra a las FARC-EP, sino manifestando públicamente y con énfasis; su agresividad, violencia y espíritu paternal. Su programa de gobierno para las elecciones presidenciales del año 2002, es conocido como “Manifiesto Democrático – 100 puntos Álvaro Uribe Vélez”. En dicho programa de gobierno, Uribe Vélez, manifiesta: “en la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación” (Uribe A. , 2002, pág. 30). En ese mismo documento escribe: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político” (Uribe A. , 2002, pág. 100).

El posicionamiento de Uribe Vélez, como jefe de la masa del ejército no es evidente sólo porque él lo manifestaba, sino porque los hechos demostraron que era mucho más que un simple soldado raso de la nación. Era el general en jefe y a la vez el ministro de defensa;

veamos: en su primer año de gobierno, nombró como ministra de defensa a Marta Lucia Ramírez, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, porque desde 1953 hasta 1991 todos los ministros de defensa habían sido generales del ejército y hombres, sólo en 1991 un civil-hombre ocupó el cargo de ministro de defensa.⁵⁰ Marta Lucia Ramírez, ha sido la única mujer en ocupar el cargo de ministra de defensa en Colombia, pero no por mucho tiempo, un año después Uribe Vélez, le pidió la renuncia y nombró a Jorge Alberto Uribe Echavarría, quien estuvo hasta el año 2005, posteriormente, nombró a Camilo Ospina Bernal; tres ministros de defensa y entre ellos una mujer⁵¹ durante su primer período de gobierno (2002-2006). Frente a este hecho, el profesor, Francisco Leal Buitrago, asegura que los ministros de defensa de Uribe Vélez, en su primer período de gobierno, no tenían ningún conocimiento en el campo militar, además, el hecho de tantos cambios en este ministerio da cuenta de que el verdadero ministro de defensa era el presidente. Con base en la Revista semana, el periódico el Tiempo y la revista Cambio, argumenta (Leal Buitrago, 2006). También hay que tener en cuenta que, desde el inicio de su campaña, Uribe Vélez, manifestó que su objetivo era derrotar a la FARC-EP, para este propósito, entonces, lo ideal hubiese sido recuperar la tradición de nombrar a un militar en el cargo de ministro de defensa.

Otro hecho que da cuenta del liderazgo militar de Uribe Vélez es que presidió varios consejos de seguridad⁵² en los diferentes departamentos de Colombia, acompañado de los altos mandos del ejército, de la policía y de las fuerzas armadas, cuando, según la ley le corresponde presidir dichos consejos de seguridad a los gobernadores de los departamentos y no al presidente de la república⁵³. Las alusiones a su espíritu militar, a

---

⁵⁰ El político y economista, Rafael Pardo Rueda, fue el primer civil desde 1953 que ocupó el cargo de ministro de defensa en Colombia

⁵¹ Como ya mencionamos antes, éste hecho no tiene precedentes en la historia de Colombia y dada la actitud autoritaria del entonces presidente, éste hecho da cuenta de que el verdadero ministro era él.

⁵² El Tiempo, “Uribe en Consejo de Seguridad” Octubre 20 de 2003, consultado por última vez 22 de julio de 2018 {En Línea} <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-992359> , El Tiempo, Uribe Presidió Consejo, 20 de enero de 2004, consultado por última vez, 22 de Julio de 2018 {En Línea} <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1554577> ,

⁵³ Ley 2615, noviembre de 1991: Artículo 1º.- En cada uno de los Departamentos funcionará un Consejo Departamental de Seguridad, integrado por los siguientes miembros:

- a. El Gobernador del Departamento, quien lo presidirá;
- b. El comandante de la guarnición militar;
- c. El comandante del Departamento de Policía;
- d. El director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS;
- e. El Procurador Departamental o Provincial;
- f. El director Seccional de Orden Público o su delegado; El secretario de Gobierno Departamental, quién hará las veces de secretario del Consejo.

su agresividad y a su autoritarismo fueron firmes a lo largo de su primer período de gobierno: “Yo no me pongo el camuflado por respeto, pero como lo dije en la policía, debajo de este Everfit⁵⁴ hay una carnita y unos huesitos con alma de soldado, con alma de policía” (Uribe À. , 2003). Estas palabras las pronunció en el aniversario de las Fuerzas Aéreas Colombianas. “Hombre, yo me miro esta carnita y estos huesitos, yo soy combatiente, yo no soy una pera en dulce” (Discurso pronunciado para anunciar crédito de vivienda para los maestros en 2006) (Tabares, 2006, pág. 166). Vemos que aprovechaba cualquier oportunidad para manifestar su espíritu guerrerista y violento. “Yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la policía a enfrentar esos tipos”⁵⁵ (Tabares, 2006, pág. 64). “Hay que linchar a los corruptos, nada de pañitos tibios, compatriotas: linchemos a los corruptos” (Tabares, 2006, pág. 44). Discurso pronunciado en Santa Marta, ante microempresarios en 2006.

La pulsión de agresión o pulsión de muerte, manifestada desde el inicio de la campaña presidencial de Uribe Vélez, con la parte del slogan “Mano firme” se mantuvo a lo largo de su primer período de gobierno. Las manifestaciones de carácter agresivo y violento no le restaron puntos a su popularidad, sino, por el contrario, le sumaron votos⁵⁶; siendo reelegido presidente de Colombia en 2006; con el sesenta y dos por ciento (62%) del total de los votos, superando el triunfo obtenido también en primera vuelta en 2002, al sumarse aproximadamente, quince por ciento (15%) más del total de los votos obtenidos anteriormente, este hecho le otorgó mayor margen de gobernabilidad, según diversos medios de comunicación en entrevistas con especialistas.

La pulsión de agresión que manifestaba y dirigía Uribe Vélez para derrotar a las FARC-EP, quienes, según él, representaban el terrorismo en Colombia, le permitía justificar agresiones contra personas y organizaciones que criticaran su gobierno, acusándolas de estar al servicio del terrorismo; este fue el caso de las ochenta (80) organizaciones de derechos humanos que publicaron en 2003 el informe: “El embrujo autoritario: primer año del gobierno de Uribe Vélez”. Frente a este informe, Uribe Vélez, en tono acalorado dio un discurso el día 8 de septiembre de 2003, cuando se posesionaba el nuevo

---

⁵⁴ Es la marca de un tipo de vestido fabricado por una empresa de Medellín con ese mismo nombre.

⁵⁵ en una entrevista hecha por la emisora La W, Uribe Vélez, recordó las medidas que tomó luego de salir ileso de un intento de secuestro por parte del grupo guerrillero, Ejército Popular de liberación (EPL)

⁵⁶ El aumento del porcentaje de votación fue del veinte cinco por ciento (25%) en relación a las elecciones de 2002, cuando también ganó en primera vuelta.

comandante de las fuerzas aéreas colombianas (FAC). De dicho discurso extraje apartes que evidencian la forma de expresar la pulsión de agresión contra las organizaciones de derechos humanos que elaboraron el informe, sobre el primer año de su gobierno: “politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado... Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de Internet de las FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos”, “Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos... General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar al terrorismo, que los traficantes de derechos humanos, no lo detengan” (Uribe À. , 2003) (ver recopilación)⁵⁷.

En cuanto a la pulsión de agresión o pulsión de muerte, vemos que al parecer Uribe Vélez, logró remitir a más personas a aquella herencia primordial donde el padre era violento y agresivo con sus hijos, a quien ellos le temían y obedecían sin usar la razón. No encontramos otra explicación que justifique el hecho de tanta simpatía y seguidores por un líder político cuya arremetida contra defensores y defensoras de derechos humanos, lo distanció ampliamente de lo que se entiende por democracia. Hipnosis y sugestión, probablemente fueron los elementos que posibilitaron el predominio de su liderazgo por encima del uso de la razón. En lo relacionado con la pulsión de agresión.

No se puede negar que las FARC-EP cometieron crímenes, pero fueron mayores los crímenes cometidos por el paramilitarismo auspiciado por Uribe Vélez, tal como lo mostramos en el segundo capítulo del presente documento.

---

⁵⁷ Juan Diego Restrepo. (21 de diciembre de 2013). Alvaro Uribe Vélez y DDHH {Archivo de video}. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=bib7VTFRy3Q>

Los grupos y bandas armadas denominados paramilitares se acrecentaron gracias a la legitimación que dio Álvaro Uribe, cuando era Gobernador del departamento de Antioquia, a las llamadas cooperativas de seguridad como cuerpos armados de vigilancia y que en muchos procesos judiciales se comprobó que los miembros de estas cooperativas de vigilancia hicieron parte de las fuerzas paramilitares y participaron en acciones conjuntas con las fuerzas armadas, pues así se comprobó para el caso del general Rito Alejo Del Rio, condenado en el año 2001 por haber perpetrado centenares de asesinatos, masacres y desapariciones forzadas de la mano de los paramilitares en el departamento de Antioquia mientras Uribe Vélez, gobernaba, así se confirmó que las acciones de los paramilitares eran parte de la represión estatal.

La segunda parte del slogan de la campaña presidencial de Uribe Vélez “Corazón grande” hace referencia al amor por la seguridad, la democracia, por dios y por el pueblo. Dicho amor fue manifestado por medio del ejército y de las religiones emanadas del cristianismo. Según sus discursos vemos que este amor lo procuraba, en esta doble dirección.

En cuanto al ejército; Uribe Vélez se presentaba como héroe de la patria con la agresión que lo caracterizaba en aquel entonces, propia de los militares, pero además usó las propagandas para que el pueblo amara a la fuerza pública, principalmente al ejército.

La campaña propagandística de las fuerzas militares, cuyo slogan fue “Los héroes en Colombia sí existen”, argumentan sus creadores que tenía como objetivo llegarle al corazón a los colombianos para que estos amaran al ejército, dejando de lado los innumerables crímenes perpetrados por dicho ejército de la mano de los paramilitares, como por ejemplo, los cometidos durante la “Operación Orión” en la comuna 13 de Medellín en Octubre de 2002, en donde se calculan más de 300 homicidios, por lo menos 95 desaparecidos, cientos de torturas, detenciones arbitrarias (370) y “falsos positivos”. El general Mario Montoya, quien estuvo a cargo de la “Operación Orión” actualmente es judicializado por la justicia colombiana, acusado de ejecuciones extrajudiciales durante dicha operación y por otras ejecuciones extrajudiciales cometidas hasta 2008, cuando se retiró del ejército por las investigaciones en su contra. Las ejecuciones extrajudiciales, posteriores a la Operación Orión de las que se acusan a Montoya, fueron perpetradas por el ejército nacional y consistían en asesinar a jóvenes inocentes y en algunos casos

discapacitados para presentarlos como guerrilleros asesinados en combate y recibir así las prebendas que Uribe Vélez, ofrecía a los militares (ascensos, dinero, viajes, etc.) a cambio de resultados que le permitieran presentar ante la opinión pública, cifras que dieran cuenta de las supuestas bajas que les estaban dando a las FARC-EP, cuando en realidad se estaban cometiendo crímenes de Estado, dados a conocer posteriormente por los medios de comunicación como “falsos positivos”.

Para lograr ser amado, a través, del ejército y del cristianismo, Uribe Vélez apeló a los sentimientos, apuntó directo al corazón de los colombianos como lo manifiestan tanto los creadores de la campaña publicitaria como académicos especialistas en comunicaciones, entrevistados en el documental antes referenciado: “Apuntando al Corazón”⁵⁸ imposibilitando el uso de la razón de un gran número de colombianos.

Ya dijimos que la religión profesada por Cristo encuentra su fundamento en el amor, pero al amor siempre se le va a oponer el odio (pulsión de agresión) argumenta Freud. Los individuos que pertenecen a esta masa, manifiestan crueldad y violencia contra quienes no pertenecen a ella⁵⁹, es decir, que la combinación de ambas pulsiones (amor y odio) siempre están presente en las diferentes masas artificiales. Entonces, al parecer es la posibilidad de manifestar ambas pulsiones lo que mantiene cohesionadas a las masas ya que no hay conciencia de culpa porque la responsabilidad recae sobre el padre, representado por el líder de la masa.

Precisamente al padre atribuye Freud, tanto el inicio de la cultura como la fuente genuina de la religiosidad. En lo que se refiere al inicio de la cultura, los hijos, cansados de la represión y violencia del padre, deciden asesinarlo, hecho que generó la conciencia de culpa, la cual permitió que aquella horda primordial se transformara en una comunidad de hermanos; posteriormente empezó a surgir la añoranza del padre, la cual es la fuente genuina de la religiosidad; un sentimiento oceánico, sin límites ni barreras que deriva del desvanecimiento infantil. “La angustia frente al híper poder del destino, hace que el

---

⁵⁸ La Danza Inmóvil. (4 de abril de 2014). Apuntando al Corazón. {Archivo de video}. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=LbuXjhEDUYY>

⁵⁹ No es posible renunciar a Eros ni a Tánatos, si, como lo explica Freud, son pulsiones instintivas. Respecto de la segunda o pulsión de muerte, al pertenecer a un círculo cultural más pequeño se ofrece un escape a la hostilización a los extraños, Freud, muestra cómo a lo largo de la historia siempre ha habido enfrentamientos entre pueblos, sectas, etc., a lo cual llama narcisismo de las pequeñas diferencias.

infante conserve la necesidad de la protección del padre”(Freud, El malestar en la cultura , 1929). En *Psicología de las masas y análisis del yo*, Freud dirá que es precisamente durante la infancia cuando surge el primer tipo de ligazón afectiva, y este es por identificación con uno de los padres.

“Corazón grande”: Amor en Uribe Vélez a través de las religiones

Al parecer Cristo, ya sabía que en el ser humano son innatos los sentimientos de amor y odio, quizá por esto, formula de manera expresa el amor como eje de su liderazgo, situándose, él como el hermano mayor que reemplaza al padre (Freud, *Psicología de la masas y análisis del yo*, 1921, pág. 90). El amor precisamente, tendría como fin contener el odio. El líder de la masa como sustituto del padre continúa siendo el centro de esta indagación.

Si bien, existen varios tipos de identificaciones,⁶⁰ el tipo de identificación que se encuentra directamente relacionada con la conformación de las masas “puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la identificación parcial y así, corresponder al comienzo de una nueva ligazón” (Freud, *Psicología de la masas y análisis del yo*, 1921). Más adelante Freud, dirá que siendo una gran comunidad afectiva, en base a la cual gira este tipo de identificación, el origen de dicha comunidad reside en la ligazón con el conductor (Freud, *Psicología de la masas y análisis del yo*, 1921, pág. 101).

Queriendo ofrecer una explicación de la seducción de que fue objeto buena parte del pueblo colombiano por el discurso de Uribe Vélez, Jesús María Molina, escribió la tesis de maestría intitulada “La Identificación de los Colombianos con Álvaro Uribe Vélez: Del Cálculo de los Discursos al Goce del Fuego Cruzado”. En esta investigación muestra, cómo Uribe Vélez, interpeló a los colombianos para lograr que se identificaran con él, entre las estrategias puestas en práctica argumenta el tesista que supo explotar la religiosidad del pueblo colombiano para despertar en la gente sencilla el interés ya perdido por la participación política y vincularlos a su orientación ultraderechista y guerrillista. Molina, llama la atención acerca de que Uribe Vélez, firmó la formalización de la segunda candidatura un miércoles de ceniza y se presentó en la Registraduría Nacional, con la cruz de ceniza marcada en la frente.

---

⁶⁰ Sigmund Freud. “En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto; en segundo lugar, pasa a sustituir a una ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto en el yo, por así decir; y, en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales”.

El tesista en mención muestra, también que, entre las estrategias de Uribe Vélez, se encontraba la asistencia a los principales eventos y sitios de devoción religiosa del país, tales como los del Divino Niño del barrio 20 de Julio en Bogotá, la Virgen de Chiquinquirá y la Semana Santa en Popayán. En este último; dice Molina que se le pudo ver como a un fiel más, el cual ayudaba a cargar sobre sus hombros con fatiga una pesada carroza religiosa donde se transportaba al *Señor caído* (Molina, 2011, pág. 25). Entre las diferentes formas de demostrar su fe y devoción por Dios, por la virgen y por los santos se debe mencionar, además que visitó al Papa en Roma, que hacía oraciones en público, etc. Todos estos actos públicos tenían como objetivo lograr que el pueblo colombiano se identificara con él. Entendemos que el objetivo que lo motivaba a procurar dichas identificaciones era posicionarse como el líder, también de las religiones, aprovechando que Colombia es el sexto país más religioso del mundo, con un total de treinta y ocho millones, cien mil feligreses (38.100.000).

Dar a conocer su supuesta vocación religiosa a la opinión pública fue muy fácil por ser el presidente en ese momento, pues los medios de comunicaciónn le seguían los pasos como si fuese el protagonista de un *Reality Show*, también hay que tener en cuenta que por la violencia permanente sufrida en Colombia, muchas personas han perdido a sus padres en medio del conflicto armado y más aún del terrorismo de Estado, por tanto es una figura necesaria que al parecer Uribe Vélez, interpretó de manera acertada para lograr sus objetivos.

La religiosidad del pueblo colombiano ha sido ampliamente estudiada; el filósofo colombiano, Rubén Jaramillo Vélez, ha escrito varios documentos en los cuales argumenta que en Colombia se postergó el inicio de la modernidad. En la conferencia intitulada “Modernidad y Moralidad en Colombia” Jaramillo Vélez, hace un análisis acerca de cómo el hecho de que España, al cerrarle las puertas a la reforma y a las ideas de la modernidad, trajo a nuestros países americanos un ethos (costumbre) medieval que se ha prolongado hasta convertirse en un ethos secular (No religioso). Es decir, no se desarrolló en Colombia una ética laica, secular que le otorgara primacía al uso de la razón por encima de la fe en la autoridad divina; representada esta autoridad en la iglesia católica mayoritariamente.

En la Constitución Política de Colombia de 1886 se le otorgó la responsabilidad de la educación pública a la iglesia católica y se puso, además, las instituciones del Estado a su servicio⁶¹. La subordinación del Estado a la iglesia católica prevaleció hasta que se elaboró la nueva Constitución Política en 1991. En esta nueva constitución, la responsabilidad de la educación pasó a manos del Estado⁶². Argumenta el filósofo colombiano, Jaramillo Vélez, que durante todo el tiempo en que la iglesia católica estuvo a cargo de la educación se preocupó por formar buenos católicos y no buenos ciudadanos.

El hecho del uso por parte de Uribe Vélez, de las religiones para fines políticos no pasó desapercibido en Colombia, por el contrario, recibió diversas críticas periodísticas⁶³ en las que incluso se afirma que la intención del entonces presidente era borrar la frontera entre el Estado y la iglesia, es decir, retroceder en los avances que se lograron con la Constitución Política de 1991 y retornar al Estado confesional de la Constitución Política

---

⁶¹ Constitución política de Colombia, 1886. Art. 41: La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica Artículo 38: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social.

⁶² Constitución política de Colombia, 1991. Art. 67: Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

⁶³ Revista semana, Daniel Coronel, “La procesión va por dentro”, 2005, consultado Junio 20 de 2018 {En Línea} <https://www.semana.com/opinion/articulo/la-procesion-va-dentro/71498-3> El Espectador, Ana Cristina Restrepo Jiménez, “La parábola de Álvaro Uribe Vélez”, 2012. Consultado en 20 de Julio de 2018. {En línea} <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/parabola-de-alvaro-uribe-velez-articulo-385231>

de 1886⁶⁴ otras personalidades, incluso religiosos, criticaron las constantes apelaciones del mandatario a dios y a la virgen, argumentando que buscaba legitimar así sus propuestas, pues dichas manifestaciones no eran apropiadas en el presidente de un país (Espectador, 2010). También le criticaron el hecho de que no tuviera problemas en consagrarse a otras religiones, varias de las cuales le aportaron un jugoso caudal de votos durante su campaña electoral (Roa, 2007). En síntesis, cambió apoyo social con las iglesias por los votos de los feligreses al lograr que estos se identificaran con él.

Son muchos los documentos existentes que dan cuenta de la religiosidad de Uribe Vélez y de cómo esta manera de actuar la llevaba a cabo con fines políticos, pues su objetivo era posicionarse como líder espiritual para obtener la adhesión del pueblo irreflexivamente como se le otorga a un sacerdote o pastor, con la ventaja adicional de ser el presidente del país que de paso desconocía el precepto constitucional de respetar la libertad de cultos en materia religiosa. Su actitud estaba, transgrediendo la Constitución Política de 1991, que estableció que Colombia es un Estado laico, con libertad religiosa e igualdad de las Iglesias frente al Estado (Semana, Fe en el Poder, 2008).

Algunas otras manifestaciones hechas por Uribe Vélez, con el propósito de situarse como líder de las religiones son las siguientes: se refirió a la vida sexual de los jóvenes diciendo: “muchachos cuidado, piensen en que el arquitecto perfectamente organizado es el creador y por algo él definió las cosas, aplacen la sexualidad que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia” “A mí me conmueve mucho lo que el pastor cuenta de Sor Teresa de Calcuta. Es que es tan preciosa la vida de alguien que está en el vientre de la mamá, como la vida de un adulto. Entonces, en eso tenemos que poner mucho cuidado. El gobierno está comprometido a hablar con los congresistas para que la normatividad que se apruebe no afecte a la familia”, “Decían los mayores: Familia que reza unida permanece unida”. Esto va a ayudar a que los colombianos avancemos en la unidad”⁶⁵. Evidentemente, en un País en extremo religioso como lo es Colombia, esas manifestaciones otorgaban al presidente la condición de máximo líder religioso y un gran guía de la moral, además, investido del poder para regular las normas a favor de las

---

⁶⁴ Hay que tener en cuenta, también que a partir de 1886 se inició la hegemonía conservadora en Colombia que prevaleció hasta 1930, cuarenta y cuatro años (44) bajo gobiernos conservadores.

⁶⁵ Frases tomadas del libro: “Estoy Cargado de Tigre” de Juan Fernando Tabares, editorial, Intermedio. El autor hace una recopilación de las frases más celebres usadas por Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos períodos de gobierno.

doctrinas religiosas. En la tercera frase se pone de manifiesto de manera precisa, que él intentaba lograr la unidad nacional a través de las religiones.

La masa de la iglesia o las masas religiosas son más sólidas y duraderas que las de los ejércitos, habría dicho Freud, principalmente porque existe una diferencia estructural entre una y otra. En la masa del ejército existen jerarquías, en la cual hay varios padres; los capitanes son los padres de las compañías y los suboficiales de las secciones, pese a que en la iglesia, también existen ciertas jerarquías, Cristo tiene mayor saber sobre los individuos y mejores cuidados que el general en jefe, lo que significa que es menos probable que se disuelva la masa conformada por la religión a diferencia de la masa conformada por el ejército (Freud, *Psicología de la masas y análisis del yo*, 1921, pág. 90).

Si bien, según los argumentos de Freud, se conjetura la existencia de la doble ligazón libidinosa en ambas masas, también especifica que el amor que sienten por el jefe las personas que conforman las diferentes masas es mayor al que sienten entre ellos y se crea la ilusión de que el jefe ama a todos los miembros de la masa posibilitando su conformación. Uribe Vélez, apelaba permanentemente al amor, a continuación, mostraremos algunos apartes de sus discursos entre 2002-2006: “Que el amor por esta Patria sea la llama a través de la cual Nuestro Señor y la santísima Virgen María me iluminen para acertar; también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. ... Aspiro, dentro de cuatro años, poder mirar a los ojos a ustedes mis compatriotas... imploremos la ayuda de quienes nos guían desde la eternidad. Y a Dios nuestro señor, una luz inspiradora de tenacidad en el buen obrar... Mi espíritu antioqueño y mi vocación campesina me han alimentado un infinito amor por todas las regiones de Colombia... El gobierno tiene que proceder dando ejemplo en materia de respeto a las instituciones con toda prudencia y seguir trabajando con infinito amor por Colombia” (Tabares, 2006, págs. 35,51,29,38).

La explicación que nos ofrece Freud, frente al amor que sienten los miembros de la masa (de las dos masas artificiales, en este caso) por el conductor, está relacionada con el narcisismo secundario, el cual surge del narcisismo primario en el que el infante se contenta consigo mismo en su propio yo; luego de recibir las influencias del medio no le basta su propio yo para contentarse, entonces, puede hallar la satisfacción en el ideal del

yo diferenciado a partir de aquel (Freud, Psicología de la masas y análisis del yo, 1921, pág. 103). “El término narcisismo se emplea en psicoanálisis para designar un comportamiento por el cual un individuo "se ama a sí mismo" o, en otras palabras, un comportamiento por el cual trata a su propio cuerpo como se trata habitualmente al cuerpo de una persona amada” (Psicoanálisis, 1885-1956). Esto es precisamente lo que le otorga ese espíritu de “súper hombre” al líder de las masas.

En cuanto a los miembros de las masas, la identificación que surge posteriormente con el líder, ya sea religioso o militar, reposa en la identificación que tuvo el infante con el padre⁶⁶ para explicar el proceso en el que resurgen las identificaciones, Freud dirá que “el objeto se ha perdido o ha sido resignado; después se lo vuelve a erigir en el interior del yo” dicho objeto perdido y quien ocupa el ideal del yo, es el hipnotizador, es decir el líder de la masa.

La combinación de amor y odio, a través de las religiones y del ejército, posicionaron a Uribe Vélez, como líder de cada una de estas masas y le garantizaron su popularidad.

Se ha analizado que Uribe Vélez, instituyó unas amenazas ubicándolas como el mayor problema del pueblo colombiano, frente a las cuales todos se debían unir para combatirlas, y en cambio ocultó otras con las que convivía la mayoría y que los afectaba directamente porque ponían en riesgo su seguridad y hasta su supervivencia. Consiguió esta transmutación porque logró construir un sentimiento de miedo lindante con el pavor en la mayoría del pueblo colombiano, el cual -según la propaganda oficial- provenía de la guerrilla como causante de atrocidades y amenazas y se exorcizaba únicamente con un líder aguerrido y competente como él. Así se configuró como líder de las dos masas artificiales a las que se refiere Freud y alcanzó a ser percibido como salvador y, consecuentemente, amado por la esperanza de superar las amenazas que mantenían amedrentado al pueblo. Por su parte, Uribe ejercía su papel de padre protector y recibía

---

⁶⁶ Lamentablemente, nos van a quedar varios temas sin profundizar en esta investigación, respecto al Narcisismo secundario estamos tratando de comprender cómo a través de él, un gran número del pueblo colombiano se identificó con Uribe Vélez, pero queda por analizar la forma en que Uribe posiblemente adoptó “el ideal del yo” respecto de su padre, quien tuvo vínculos comprobados de amistad con miembros del Cartel de Medellín y fue asesinado el 14 de Junio de 1983 en su hacienda Guacharacas. Aunque las FARC-EP han negado este homicidio, Uribe Vélez desde esa fecha ha estado persuadido de que sí fueron las FARC-EP, por ello, desde entonces se ha dedicado a combatirlas por todos los medios posibles. ¿Hasta qué punto Uribe Vélez adoptó la personalidad de su padre (ideal del yo) luego de su asesinato?

la condescendencia de la población ante las medidas contra el crimen y la injusticia, por considerarlas la cuota de sacrificio en esa batalla contra el mal.

Cuando ya era demasiado evidente que los muchos cadáveres que aparecían en los caminos y veredas de las aldeas eran crímenes que contaban con el beneplácito de las fuerzas gubernamentales, se reprodujo entre la gente la versión justificativa de dichos crímenes diciendo que seguramente esos muertos estaban involucrados en asuntos criminales y se decía “algo malo tuvo que haber hecho para que fuera víctima de asesinato”. También se justificaba como cuota de sacrificio las severas restricciones de los derechos de libre movilización y la eliminación de las pocas ventajas que habían adquirido los trabajadores por sus luchas sindicales y en virtud de políticas liberales del Estado benefactor en décadas pasadas; en materia laboral y social se caracterizaron los gobiernos de Álvaro Uribe, por quitar al trabajo y dar al capital con el irónico y curioso razonamiento de que los pobres empresarios estaban abatidos por las muchas cargas laborales y se les tenía que colaborar desde un pequeño sacrificio de los trabajadores para que no fueran a sucumbir las empresas y entonces se agravaría la situación porque sobrevendría el desempleo, la conclusión era que correspondía apoyar a los empresarios y ser más austeros los trabajadores para mejorar la economía y alcanzar la paz y la armonía social.

¿Qué es el miedo?

Antonio Damasio, sitúa el miedo entre las emociones primarias, las cuales hacen parte de los mecanismos básicos para la regulación de la vida y lo sienten tanto los animales irracionales como los seres humanos, el autor hace una diferenciación entre emociones y sentimientos para explicar que las primeras son innatas (o en palabras de Descartes, son pasiones del alma). Las emociones anteceden a los sentimientos y se activan al nacer, respondiendo de manera automática frente a ciertos estímulos idóneos para ese propósito. (Damasio, 2003, pág. 38). La diferencia entre emociones y sentimientos consiste en que las primeras, si bien son dispositivos innatos, se manifiestan en el cuerpo a través de palpitaciones, sudoración y otras señales, pero no son razonadas. Luego, cuando se razona respecto a qué causó tal emoción, se puede identificar el sentimiento, es decir, que el miedo como sentimiento depende del uso de la razón, es por ello que este varía a lo largo de la vida, por ejemplo, el estímulo que le activa la emoción de miedo a un bebé de 7

meses, probablemente no cumpla la misma función cuando el mismo bebé ya sea un niño o niña de 7 años, porque a esta edad ya puede razonar lógicamente.

Por su parte Aristóteles, también ubica el sentimiento de miedo como dependiente de la razón. En la *Ética a Nicómaco*; explica lo que él ha denominado virtudes éticas que se adquieren con la costumbre y por el ejercicio, es decir, las virtudes son hábitos que se adquieren en la práctica. El autor referencia los siguientes ejemplos: nos hacemos justos practicando la justicia; templados practicando la templanza y valientes ejerciendo actos de valor. “La prueba de esto está en lo que ocurre en las ciudades: los legisladores hacen buenos a los ciudadanos, haciéndoles adquirir buenas costumbres, y ésta es la intención de todo legislador y se equivocan todos aquellos legisladores que no actúan así, y justamente por esto se distingue el gobierno de una ciudad de otro y el gobierno bueno del malo” (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, 2003, pág. 49 1103b). Ahora bien, adquirir las virtudes, en cuanto son hábitos o disposiciones respecto de aquello de lo cual son virtudes, depende de la recta razón, a través de la cual se delibera para encontrar el justo medio en cada caso, porque la virtud consiste en el *término medio* y éste se debe saber elegir gracias a cierta idoneidad electiva que se va adquiriendo en la práctica de la elección. En efecto, según lo ejemplifica Aristóteles, la virtud de ser valiente consiste en saber elegir la cuota de valor apropiada en cada ocasión particular donde se precisa del valor para que no sea menos del requerido y se incurra en cobardía o mucho más y se pase al extremo excesivo de la temeridad. Cobardía y temeridad son los dos vicios opuestos en este caso a la virtud llamada valentía, el primero por defecto y el segundo por exceso.

De conformidad con esa manera aristotélica de entender la acción humana en su corrección, entonces cabe decir que toda empresa política o gubernamental que se empeña en suscitar emociones en los ciudadanos y no razones, actúa deliberadamente con mala intención y procurando así apartar al pueblo del discernimiento de lo que se debe acometer en la sociedad para su bienestar. Esta práctica sistemática de incitar al pueblo a obrar movido por la emoción y sin hacer intervenir su razón; de forma parecida a como se actúa en las congregaciones religiosas en donde los fieles a un credo se determinan a actuar por fe y no por argumentos racionales, fue lo característico de este movimiento o partido político generado en torno de la figura de Álvaro Uribe Vélez, quien sin menor escrúpulo adoptó el eslogan: “Mano firme, corazón grande”; es decir: con abundante fuerza y emoción, pero sin razonar.

Uribe Vélez, consiguió presentar como gran peligro para el pueblo lo que mayoritariamente era un gran peligro para los ricos, a saber: las acciones de las guerrillas en cuanto a secuestros, ya que el Estado se veía incapaz de ofrecer la seguridad requerida para industriales y demás agentes importantes de la economía, razón por la cual, persuadió al pueblo de que la inseguridad era mayor para los pobres y débiles y los convocó, atemorizándolos con el discurso de la amenaza terrorista, a apoyar un programa político que daba prioridad a la seguridad de los grandes empresarios y terratenientes, sacrificando las libertades y la seguridad humana amenazada por la extrema pobreza, las cuales, sí eran un verdadero peligro para el pueblo que se veía expuesto a perder sin remedio el derecho a la salud, al trabajo y a continuar viviendo en la indigencia sin dignidad.

Thomas Hobbes, explica el origen del Estado como consecuencia del miedo a la muerte que se generaliza en las condiciones de vida de naturaleza, caracterizadas por la absoluta inseguridad de los hombres respecto de llevar a término sus proyectos y en general la propia vida. Ha dicho Hobbes, que en ausencia del Estado la vida de los hombres es breve, brutal y triste. El miedo a la muerte y la sensación de inseguridad se superan con un Estado suficientemente fuerte para someter a todo agresor posible. Entonces se canalizó la conciencia de estar a la intemperie ante las amenazas de las guerrillas por carencia de mano dura del Estado y se propuso a Álvaro Uribe, para efectuar lo que se requería en esta materia y superar la inseguridad, pues ya en su ejercicio como gobernador del Departamento de Antioquia, había mostrado su disposición para derrotar a los enemigos del Estado.

En Colombia, el miedo a la muerte (2002-2006) no fue lo que le permitió a Uribe Vélez, legitimar y justificar la política pública⁶⁷, PDSD, pero la sensación de inseguridad que promocionó por medio de las amenazas instituidas, le posibilitó usar como bandera de su campaña la seguridad (PDSD); para justificar ante sus seguidores: la represión, el asesinato de sus opositores, crímenes contra la humanidad, violaciones a las libertades

---

⁶⁷ Pese a que Uribe Vélez, construyó o instituyó unas amenazas, no encontramos justificación para temerles a aquellas amenazas porque tal como he analizado a lo largo de esta investigación, la guerra en Colombia ha sido permanente y las FARC –EP, existieron desde 1949

fundamentales, entre otras violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Dirá Hannah Arendt, a propósito de “Los orígenes del Totalitarismo” que el miedo político se encontraba estructurado alrededor del hombre masa, cuyos intereses eran sacrificados a favor de un líder, la anomia y el desarraigo serían los elementos que posibilitaban el éxito del líder (Robin, El miedo: historia de una idea política , 2004, pág. 196) . Ya mencionamos que, en el contexto de nuestra investigación, el miedo político por parte de los miembros de las masas al parecer giraba directamente en torno a perder al líder de las masas.

Más allá de la anomia y del desarraigo que plantea Arendt, los cuales han sido constantes en Colombia. Se cuenta como factor determinante de la situación política la estigmatización, represión y asesinato de los líderes populares surgidos al margen de los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores), haciendo difícil o quizá imposible la organización política y social de algunos otros grupos. Por otro lado, en cuanto al desarraigo, en Colombia existen más de nueve (9) millones de personas que han sobrevivido al desplazamiento interno, contado dicho desplazamiento sólo desde 1991, no obstante, los desplazamientos internos en Colombia datan, incluso, desde antes de 1948, cuando se incrementó la guerra bipartidista.

Como ya mencionamos anteriormente, citando al filósofo colombiano Rubén Jaramillo Vélez, la llegada de la modernidad a Colombia se postergó debido a que la educación estuvo a cargo de la iglesia católica, representada por el conservadurismo. La alianza entre el partido conservador y la iglesia católica ha marcado de manera negativa la historia de Colombia, porque procuraron formar buenos católicos con base en la fe y no buenos ciudadanos que actuaran regidos por el uso de la razón; en palabras de Kant, el pueblo colombiano se mantuvo en una “minoría de edad intelectual” incapaz de servirse de su propio entendimiento y bajo la guía de sacerdotes o de líderes del confesionalismo, como en el contexto de esta investigación, lo fue Álvaro Uribe Vélez.

La característica de los españoles que invadieron los territorios colombianos fue su espíritu de nobles, cuya “ideología sustentada en la indiscutida legitimidad del privilegio,

del predominio de la nobleza de sangre, de la casta, de la aristocracia, que había triunfado sobre el tercer estado y sobre los plebeyos en la batalla de Villalar” (Jaramillo, 1997, pág. 30). Heredando los colombianos este mismo espíritu, en este contexto “prosperaron los valores honoríficos más que la orientación hacia las realizaciones prácticas” (Jaramillo, 1997, pág. 41). En una sociedad tradicional se favorecerá el reconocimiento social, mientras que en una sociedad moderna se otorga a todos un reconocimiento político y jurídico. Según Jaramillo, esa herencia medieval de Colombia se puso de manifiesto en los fundamentos del partido conservador colombiano, el cual ha mantenido o disputado el poder históricamente con el partido liberal y constituido un bloque hegemónico para gobernar desde el inicio de la República con criterio pre-moderno limitando el ejercicio de las libertades ciudadanas bajo el pretexto de garantizar el orden social. De esta manera se elevó a lema del escudo nacional la expresión “Libertad y orden”, frase que permite recordar épocas pasadas cuando se reprimían las libertades para mantener un orden, el cual sólo servía a los intereses de unas minorías y no a los intereses de un gobierno democrático.

El partido liberal, a su vez, se ha adaptado a los preceptos del conservatismo y moderado su radicalidad y compromiso con las ideas ilustradas, para poder acceder al gobierno sin suscitar la guerra con los conservadores que Jaramillo ve como herederos de la ideología medieval. En estas circunstancias, Colombia ha vivido una hegemonía bipartidista que llegó al extremo del Pacto del Frente Nacional, celebrado en 1956, por el cual se acordó que, para poner fin a la violencia entre las dos facciones partidistas, se alternarían el gobierno en períodos de cuatro años. Esto significó eliminar la posibilidad democrática de que otro partido o movimiento político llegara a ejercer el poder en Colombia, y pasado el tiempo pactado de esa repartición se hizo costumbre continuarla.

Institucionalizada la imposibilidad de alcanzar el poder político otra fuerza distinta de esos partidos tradicionales, como se les nombra habitualmente, se generó una grieta o ventana propicia para la insurrección de los movimientos sociales y políticos no coincidentes con las ideologías y prácticas de dichos partidos. Esta circunstancia de la reciente evolución política explica en parte el mayor auge y fortalecimiento alcanzado en Colombia por los ejércitos de combatientes en insurrección que dieron lugar a la larga guerra entre las fuerzas armadas gubernamentales y estos ejércitos de guerrilleros izquierdistas, de la cual no se acaba de salir.

La duda sobre si habrá un asiento de la paz se mantiene porque el actual gobierno, manifiestamente de derecha y conformado por los que votaron en contra del pacto de paz en el plebiscito para refrendar los acuerdos de la Habana, no ha tenido la capacidad o la voluntad de evitar que asesinen a los excombatientes que entregaron las armas y a los líderes de las comunidades que la derecha siempre ha situado como proclives a las ideologías izquierdistas.

En el ejercicio del poder político del bloque hegemónico bipartidista, según se ha descrito antes, todos los candidatos presidenciales de izquierda o simplemente progresistas desde mediados de los años 80s, con posibilidad de ganar las elecciones han sido asesinados⁶⁸ y esta usanza peculiar de la llamada democracia colombiana parece tener su continuidad en la hoy visible eliminación cotidiana de los líderes sociales y políticos de las localidades en la mayor parte del territorio nacional.

Se conjetura que Uribe Vélez ha explotado en su favor ese arribismo que aquella tradición española inculcó en la mayor parte de la población, consistente este arribismo en apreciar como valor esencial la pertenencia a familias o grupos provenientes, aunque de manera difusa e indeterminable, de la vieja nobleza. Ahora bien, lo característico de dicha nobleza es estar aferrada a las costumbres de la época colonial en la cual prevaleció la moral católica. Esta es justamente la emoción que Uribe Vélez, trata de hurgar y suscitar en la gente que no teniendo nada por lo cual sea reconocido le queda esa quimérica nostalgia de una pertenencia a estamentos menos miserables en el pasado.

---

⁶⁸ Jorge Eliécer Gaitán (1948), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) Carlos Pizarro Leongómez (1990), entre otros.

4.1. Propaganda en la PSD: “Colombia es pasión”

La capacidad manipulativa del gobierno de Uribe Vélez, quedó en evidencia cuando se apeló, a través de diferentes medios de comunicación al miedo infundado o miedo como emoción primaria y no al uso de la razón, hecho que le garantizó su rotundo éxito como presidente de Colombia. Como ya analizamos anteriormente, uno de los elementos principales de su gobierno fue apelar a las religiones, aprovechando el alto grado de religiosidad existente en Colombia. La campaña publicitaria “Colombia es pasión” a través de la cual se buscaba posicionar la “marca país”, si bien no consideramos que sea la campaña más importante de su primer período de gobierno debido a que inició en el año 2006; cuando estaba a punto de terminar dicho período, nos llama la atención porque pone en evidencia la estrategia precedente, la cual consistió precisamente en apelar al miedo como emoción o pasión primaria. La campaña “Colombia es pasión” fue una estrategia propagandística que buscaba posicionar a Colombia en el mercado internacional tanto para atraer inversionistas como para atraer el turismo, promocionando la moda, las artesanías e incluso a las mujeres por su belleza y coquetería⁶⁹.

Colombia, es conocida como “el país del sagrado corazón”, esto debido a que desde 1902, cuando la conocida guerra de los mil días no cesaba, a través del Decreto 820 de 1902 se reglamentó la consagración al sagrado corazón por medio del voto nacional, en este contexto se construyeron iglesias en todo el país para dicho voto nacional, que se debía hacer todos los años; el fin era lograr el milagro de la paz que se esperaba fuera concedido por el sagrado corazón de Jesús. Posteriormente se promulgó la ley 1ª de 1952, por la cual se ordenaba al presidente de la República renovar anualmente en la fiesta litúrgica la consagración del país al corazón de Jesús y se declara la fecha como “Fiesta Nacional de Acción de Gracias”. Lo anterior también en un contexto de extrema violencia como fue el período conocido como “La Violencia” entre 1948 y 1953.

El voto nacional para consagrarse al sagrado corazón se llevó a cabo hasta 1994, a partir de esta fecha la Corte Constitucional, prohibió que dicho acto lo presidiera el jefe del

---

⁶⁹ Jocawiinteractive, (Octubre 27 de 2009). Colombia el riesgo es que te quieras quedar {Archivo de video}. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=JKjfpRwBKU>

Estado, argumentando que se estaba violando la libertad de cultos y la neutralidad del presidente frente a las demás religiones. Evidentemente el milagro de la paz en Colombia no ha ocurrido.

El logo de la campaña propagandística para posicionar la marca país “Colombia es Pasión” tiene una amplia similitud con la imagen del sagrado corazón de Jesús. La coincidencia entre las imágenes es el corazón y el fuego que sale de ambas imágenes, adicional a ello, en la marca país “Colombia es pasión” se percibe una silueta femenina, esta marca fue elaborada por un equipo de especialistas en marketing y liderada por la primera dama, Lina Moreno de Uribe.

La pasión de Cristo, hace referencia a las penurias que pasó Jesús de Nazaret, desde la última cena, momento en el que supo que sería traicionado por sus apóstoles hasta su crucifixión y muerte, no obstante, la marca país “Colombia es Pasión”, según argumentan sus creadores, no hace referencia al sufrimiento padecido por los colombianos por el hecho de haber vivido permanentemente en guerra, sino, al empuje, “verraquera” (carácter valiente y luchador), entre otros valores del pueblo colombiano.

Para la elaboración de la marca país, se recurrió a David Lightle, un consultor internacional, quien se había dado a conocer por elaborar las marcas país en Taiwán, Nueva Zelanda y Australia. Según el argumento del consultor (quien no habla español), su proceso investigativo “le permitió identificar características culturales centradas en el vigor, entusiasmo, empuje y fuerza de los colombianos en todo proyecto que

emprendiesen, esa energía y fuerza interior se sintetizó en el término “pasión”. (Martha Lucía Restrepo, 2008, pág. 25).

Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, a quien se le atribuye poner en práctica, las teorías sobre el inconsciente de su tío para lograr manipular a las masas con fines como consumir un producto o aceptar a un líder político, inicia su libro intitulado “Propaganda” con la siguiente afirmación: “LA MANIPULACIÓN consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país” (Bernays, 2008). Si bien el propio Bernays, hace una diferenciación entre publicidad y propaganda, atribuyéndole a la primera intereses económicos, como, por ejemplo, posicionar un producto para el consumo y a la propaganda le atribuye un fin relacionado con la toma del poder, a través de la difusión de ideologías, etc. Autores más modernos como Adorno, Horkheimer, Chomsky, entre muchos otros, no hacen tal diferenciación y hablan tanto de propaganda como de publicidad de manera indiscriminada.

Un claro ejemplo de que la diferencia entre publicidad y propaganda se encuentra desdibujada, lo vemos cuando el gobierno de Uribe Vélez, contrató a la agencia de publicidad con trayectoria global “McCann Erickson” para elaborar la campaña publicitaria “los héroes en Colombia sí existen”, dicha campaña buscaba llegarle al corazón al pueblo colombiano, para que amara al ejército nacional, así lo manifiesta el director creativo de esta campaña publicitaria; German Zúñiga. McCann Erickson, cuenta entre sus clientes a: Coca cola, Master Card, American Airlines, General Motors, entre muchos otros. En estas estrategias publicitarias o propagandísticas se pone en práctica lo que llamaron varios autores de la escuela de Frankfurt “razón instrumental”, es decir, cómo el uso de la razón es puesto en práctica por grupos dominantes a favor del consumo, ya sea de bienes o de ideologías, en la cual no apelan al uso de la razón, sino, al deseo de los consumidores, entre dichos deseos no debe faltar la seguridad.

El miedo como instrumento de manipulación en contraposición a la seguridad, por ejemplo, ha sido empleado por el cristianismo para ganar fieles, como se evidencia en diversos versículos del Nuevo Testamento “el que creyere y fuere bautizado, será salvo;

más el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16). Otro pasaje bíblico que me llama la atención por su tono amenazante que procura persuadir a las personas para sumarse a las religiones propias del cristianismo, en las cuales encontrarían cierta seguridad es: “el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego, y arden” (Juan; 15:6).

Los reconocidos teóricos: Carl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, denominados por Paul Ricoeur, en su obra “Freud: una interpretación de la cultura” como los maestros de la sospecha, aunque tanto sus hipótesis como sus metodologías son diferentes se interesan, según argumenta Ricoeur, en descifrar la “falsa conciencia”. Freud desde el sueño y el síntoma neurótico, Marx desde la enajenación económica y Nietzsche desde la voluntad de poder; los tres convergen entonces en la desmitificación. Sospechan de la ilusión de la conciencia, y procuran a través de sus diferentes teorías, precisamente la extensión de la misma. Las religiones para cada uno de los maestros de la sospecha son negativas para los sujetos, debido a que les imposibilita usar la razón y los aleja de la realidad, transportándolos a un mundo ideal que no existe (Ricoeur, 2007, págs. 34 - 35). La consagración al sagrado corazón de Jesús, por parte de los colombianos durante más de un siglo para que hubiese paz, fue una estrategia manipulativa que imposibilitó a un gran número de colombianos usar la razón y exigir conscientemente al Estado el derecho universal a la paz de los pueblos.

La violación sistemática al DHI y a los DDHH por parte del Estado colombiano en el marco de la PDSD, pasó desapercibida frente a una gran mayoría de colombianos, recordemos que Uribe Vélez, apelaba constantemente a Dios a las vírgenes y a diversos santos, a través de los diferentes medios de comunicación para justificar diversas acciones por parte del Estado que atentaban contra el Estado social de derechos, consagrado en la Constitución Política de 1991.

En cuanto a los ampliamente conocidos “once principios propagandísticos de Goebbels”, al observarlos de manera superficial se evidencia claramente su aplicación en el contexto de la PDSD, veamos:

1. Principio de simplificación y del enemigo único: como ya analizamos en el primer capítulo, el enemigo único fue el terrorismo representado en las FARC-EP.

2. Principio del método de contagio; este consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría: los diversos adversarios en el contexto de la PDSD, fueron los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas que criticaban la forma de gobierno de Uribe Vélez y opositores en general, quienes fueron acusados públicamente por Uribe Vélez, de estar al servicio del terrorismo.

3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Uribe Vélez, enfatizaba en que las FARC-EP eran terroristas, cuando en la práctica quienes tienen mayor capacidad para ejercer el terrorismo son los Estados y como también he analizado en este documento, el terrorismo de Estado ha sido el máximo mal en Colombia. Recordemos las ejecuciones extrajudiciales denominadas “falsos positivos” conocidas públicamente en el año 2008. Según la CIA, esta práctica propia del terrorismo de Estado se venía llevando a cabo desde 1994.

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, acusados por el propio Uribe Vélez de terroristas, junto al riesgo de los grandes terratenientes, los cuales son aproximadamente el dos (2) por ciento del total de la población colombiano, le permitieron a Uribe Vélez, exagerar y desfigurar la realidad para mal justificar, por ejemplo, medidas como la militarización de las carreteras colombianas, hecho que posibilitó la exacerbación de aquel temor de las élites colombianas y grandes terratenientes de ser víctimas de un posible secuestro y a la población más vulnerable del país a creer que eran también víctimas de esos peligros, los que entendían conjurados por la presencia militar en las carreteras. Veían entonces como logros de la PDSD, aquellas medidas, desplazando la atención de los padecimientos ciertos como la inseguridad de la vida de cada uno ocasionada por la negación de los servicios de salud, la pérdida de la estabilidad laboral y de un trabajo digno, etc. En este

principio se instrumentaliza el miedo al secuestro para justificar una política creada para eliminar el terrorismo.

5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar” (Benitez, 2018). Para referirse a los tres ejes principales de su política pública Uribe Vélez, uso la expresión “los tres huevitos” que ponía a incubar: la seguridad desde la democracia, la confianza inversionista desde la responsabilidad y la cohesión social desde las libertades. Este hecho llamó ampliamente la atención tanto a nivel nacional como internacional, recibiendo múltiples críticas. Dicha analogía de sus tres ejes de gobierno con los tres huevitos es sólo una muestra entre múltiples frases usadas por Uribe Vélez, que ponen de manifiesto este quinto principio de Goebbels; el de la vulgarización.

6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas (Benitez, 2018). De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. Uribe Vélez, aplicó este principio inicialmente con una frase que se hizo sumamente famosa: “trabajar, trabajar y trabajar”, se refería a que los colombianos debían trabajar más y él se ponía como ejemplo. Entre las diversas medidas que tomó, las cuales afectaban a la clase trabajadora, se destaca la modificación del régimen salarial de los distintos horarios de la jornada laboral, tal como lo mostramos en el primer capítulo. La mayoría del pueblo colombiano dejó pasar estas medidas violadoras de los derechos laborales e hicieron uso jocoso de la citada frase que reitera el trabajar, repitiéndola constantemente, frente a preguntas propias del saludo coloquial como en la expresión “¿Qué has hecho?”, entonces la persona respondía: “trabajar, trabajar y trabajar”. Uribe Vélez, logró con dicha frase que mucha gente se identificara con él y le permitió ser percibido como un mandatario sumamente trabajador. Para poner en práctica su famosa frase, Uribe Vélez,

presidía los consejos comunales los fines de semana, allí hablaba directamente con la gente, escuchaba sus demandas e inmediatamente llamaba a quienes correspondiera para solicitar los requerimientos del público. Con el formato de un Show hacia reclamos y regañaba a los funcionarios públicamente, hecho que demostraba que era consecuente con su lema “trabaja, trabajar y trabajar”, además ponía en evidencia su carácter fuerte y su mano dura.

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Recordemos que Uribe Vélez, ya como presidente de Colombia, se encargaba, él personalmente de hacer las propagandas, ya mencionamos anteriormente que su diario vivir era seguido por los medios de comunicación como si fuera un *reality show*. Su capacidad para ser el centro de atención nacional, le facilitó el ejercicio propagandístico. En los consejos comunitarios, se le facilitaba crear múltiples noticias, luego eran difundidas por los medios de comunicación.

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Podemos retomar el ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales, cuyos homicidios presentados por la prensa como partes de guerra eran usadas por Uribe Vélez, para mostrar al país los logros obtenidos en su lucha contra el terrorismo. La persuasión se hacía en estricto sentido retórico mediante entimemas que partían de algún caso particular tomado como ejemplo y se generalizaba; lo que se afirmaba nunca se demostró mediante argumentos lógicos válidos.

9.- Principio de silenciar. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contra programando con la ayuda de medios de comunicación afines. Las diversas amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, contra periodistas, contra intelectuales, entre otros tenían como fin, precisamente

silenciar los argumentos contra el terrorismo de Estado llevado a cabo en el gobierno de Uribe Vélez.

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Una de las propagandas que posibilitó la necesidad de la implementación de la PDSD, fue la necesidad de recuperar los territorios entregados a las FARC-EP en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, conocidos dichos territorios como zonas de despeje; en el documento de la PDSD, tal como mencionamos en el segundo capítulo del presente documento, se enfatiza en la necesidad de consolidar el territorio.

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad. Apelar a las religiones le posibilitó a Uribe Vélez lograr o acercarse a este principio, el cual le garantizó su popularidad y éxito electoral, como también he analizado en secciones anteriores.

Uribe Vélez, nombró en el año 2003, como asesor presidencial a José Obdulio Gaviria Vélez, primo hermano del extinto narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria; quien se encargaba de difundir sus discursos e ideología escribiendo en diferentes medios de comunicación y hasta publicando libros con esos contenidos ideológicos.

José Obdulio Gaviria, durante el primer período de gobierno de Uribe Vélez, escribió tres libros: “Reelección: que el pueblo decida” (2004)⁷⁰ “Sofismas del terrorismo” (2005)⁷¹ y “A Uribe lo que es de Uribe” (2006)⁷², las críticas a su desmedido afán por difundir la ideología de su jefe no se hicieron esperar, “algunos vieron en José Obdulio Gaviria, quien se auto proclama como el propagandista de Uribe, a un Goebbels criollo, dispuesto

---

⁷⁰ En este libro, utiliza diferentes argumentos para justificar la reelección inmediata, dice entre otras cosas, que esta decisión no tiene como fin beneficiar al actual presidente, argumento que quedó desmentido cuando Uribe Vélez se volvió a lanzar a la presidencia quedando elegido nuevamente.

⁷¹ En “Sofismas del Terrorismo en Colombia” básicamente, Gaviria, utiliza diferentes argumentos para negar la existencia de un conflicto armado en Colombia y afirmar que existe una amenaza terrorista

⁷² Gaviria enfatiza que Uribe Vélez erradicó la pobreza, aumentó la seguridad, elevó el debate político y muchos otros logros positivos alcanzados durante su primer gobierno.

a repetir un argumento oficial cuanto sea necesario hasta convertirlo en verdad” (PEÑA, 2006).

Según Goebbels, la mejor forma de hacer propaganda en los periódicos no era hacer propagandas en sí, sino noticias matizadas que parecieran ser neutrales (Serge, 1979, 1982, pág. 490). Al parecer José Obdulio Gaviria, intentó aplicar esta idea del ministro de la propaganda Nazi, pero su pasión por defender la PDSD de Uribe Vélez, puso en evidencia que sus publicaciones eran netamente oficiales, es decir, buscaban difundir la doctrina de la seguridad democrática de su jefe.

Hasta el año 2005 no se había conocido una propaganda formal de Uribe Vélez, como ya hemos visto en el breve recorrido hecho hasta aquí, Uribe Vélez, para la propagación de su ideología, usó su propio discurso y las publicaciones de su asesor José Obdulio Gaviria. En cuanto a que la mejor forma de hacer propaganda es no hacer propaganda como tal, según, Goebbels, fue precisamente lo que hizo Uribe Vélez, al matizar las propagandas a través de sus discursos, los cuales eran ampliamente difundidos por los diferentes medios de comunicación.

4.2. Movimientos sociales conviviendo con el miedo: luchas sociales y Protestas

Movimientos sociales, entendidos como todas las acciones sociales colectivas con cierta permanencias orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones que no se limitan a expresar resistencia, sino que hacen propuestas en contextos espaciales y temporales determinados (Mauricio Archila M. G., 2019, pág. 41). En las investigaciones realizadas sobre la base de datos de las luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz (CINEP/PPP), se toma como criterio para realizar los estudios sobre las luchas sociales la visibilidad, la cual está enmarcada en el hecho de que las acciones colectivas deben contar con mínimo diez personas, cantidad de personas que posibilita dicha visibilidad.

En cuanto a las características de los defensores y defensoras de los derechos humanos que protestan y que dan luchas sociales, según argumenta Mauricio Archila Neira, en el libro “25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000” del CINEP/PPP, no es ni el hambre ni la pobreza “lo que produce indignación, es la percepción de una inequidad distributiva de bienes y servicios o de una autoridad injusta. Teóricamente ello significa que en general las luchas sociales son acciones racionales y no instintivas” (Neira. Pág. 248). Precisamente, porque un gran número de colombianos son conscientes de lo justo y de lo injusto, de las leyes, pactos y convenios que regulan tanto en el plano nacional como internacional los derechos humanos y el DIH, por ejemplo, entre los años 2002 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó 6 sentencias contra el Estado colombiano⁷³, esto demuestra que el uso de la razón por parte de los líderes y lideresas de los diferentes movimientos sociales, está al servicio de la justicia social, para lo cual, hacen uso de las diferentes instancias jurídicas en busca de verdad, de justicia y de la garantía de la libertades básicas, entre otros derechos.

---

⁷³ 1. Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 noviembre de 2002. Serie C No. 96. 2. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 1. 4.. 3. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. 6. 4. Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. 5. Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. 6. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 159

Frente al miedo se presentan tres opciones: enfrentarlo, huir o quedarse paralizado. Las organizaciones civiles en Colombia que ejercen estas luchas sociales han sufrido de manera sistemática el asesinato de sus integrantes (defensores de derechos humanos) persecuciones, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamientos. Entre tales organizaciones se agrupan todas aquellas no gubernamentales (ONG) sin ánimo de lucro como: fundaciones, asociaciones, corporaciones, organizaciones eclesiásticas, organizaciones de víctimas del conflicto armado y otras.

Al coartar las libertades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y los derechos de los pueblos, se obliga al pueblo a vivir con miedo, entonces se violan los derechos humanos, cuyo fundamento es la dignidad humana. Las amenazas que sufrieron las diferentes organizaciones civiles por reclamar sus derechos, representan el 69,07 por ciento (Juristas C. c., 2008, pág. 141). Del total de los delitos cometidos contra quienes exigían la garantía de sus derechos. Entre los años 2002 y 2006, dichas amenazas generaron entre otras vulneraciones a los DDHH y al DIH; desplazamientos forzados. El total de desplazados, entre 2002 y 2006 fue de 1.379.126 personas (Històrica-CNMH, 2014, pág. 10).

En el año 2006 CODHES y Acción Social dieron cuenta de algo más de doscientos mil (200.000) desplazados solo ese año (Tiempo R. e., 2007). Pese a este hecho, muchos líderes y defensores de DDHH asumieron el riesgo de morir asesinados, previa tortura en manos del paramilitarismo, del ejército o en operaciones conjuntas entre ambas fuerzas.

Alirio Uribe Muñoz, un reconocido defensor de los DDHH en Colombia, quien junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha presentado múltiples denuncias contra el Estado colombiano por violaciones a los DDHH, ante la Corte Interamericana de DDHH, circunstancia que lo ha hecho objeto de múltiples amenazas da respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué no te has ido al exilio?: “Asumí la idea de enfrentar un eventual desenlace trágico por mi trabajo aquí pero no afectar a mi núcleo familiar con un exilio no querido” (Arenas, 2018, pág. 337). Esto es precisamente enfrentar el miedo.

En cuanto a los tres principales actores civiles de las protestas o de las luchas sociales entre 2002 y 2006, estos fueron pobladores urbanos, víctimas de la violencia e instituciones educativas (Defender y Proteger la vida. Pág. 97).

El total de las acciones entre 2002 y 2006 en defensa de los DDHH y del DIH, fueron 621 (Mauricio Archila A. D., 2002, pág. 82). Esto significa según nuestra indagación que el miedo en los líderes sociales no operaba como una emoción primaria propiamente dicha, es decir irracional o que dichos miedos fueran difusos en palabras de Roxana Reguillo, ellos sabían que se enfrentaban al terrorismo de Estado a diferencia de quienes le tenían miedo a la supuesta amenaza terrorista que propagaba Uribe Vélez, cuando según los datos recopilados en esta investigación dichas amenazas venían directamente del Estado de la mano del paramilitarismo.

La persecución y el asesinato de los líderes sociales que defendían los derechos humanos, bajo el estigma de terroristas o de estar al servicio del terrorismo; estigma puesto por el propio Uribe Vélez durante su primer periodo de gobierno (2002-2006), no logró su objetivo, el cual era silenciar a los defensores y defensoras de los DDHH y del DIH, quienes hicieron uso de los derechos constitucionales a la protesta y a la participación política⁷⁴, llevando a cabo diversas manifestaciones como: paros, huelgas, marchas, concentraciones, tomas, bloqueos de vías, procesos de concentración ciudadana, foros y seminarios, entre otros eventos de este tipo.

Algunas de las manifestaciones que se llevaron a cabo en este período (2002-2006) fueron contra la PDSD; el 17 de septiembre de 2002 a solo 40 días de la posesión de Uribe Vélez, miles de campesinos a nivel nacional, llegaron a Bogotá a marchar recorrieron las calles de la ciudad pese a la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y llegaron

---

⁷⁴ Constitución Política de Colombia, 1991. **Artículo 37.** Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

a la plaza de Bolívar. De este episodio se destacan algunas denuncias que se dicen a continuación:

“Los Manifestantes. Denunciaron que una marcha de estudiantes y campesinos fue disuelta por el ejército y la policía con el argumento de que había sido prohibida por las autoridades civiles”.

“Los Huelguistas. Señalaron: “Estamos protestando contra el terrorismo de Estado en el campo, las fumigaciones con glifosato (de los narco cultivos), el uso de productos transgénicos, el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas)”.

Los Campesinos. Presentes en la protesta de ayer criticaron el anuncio de Uribe de reclutar a 15.000 soldados⁷⁵ campesinos y sostuvieron que el plan de seguridad del mandatario “desconoce la injusticia social como la verdadera causa del conflicto que vivimos” (REUTERS, 2002).

Las amenazas permanentes de perder la vida, de ser secuestrados, torturados y desaparecidos no ha hecho que las luchas sociales cesen en Colombia, por el contrario, día a día nacen nuevos movimientos sociales y organizaciones defensoras de los DDHH y del DIH para luchar por la justicia social, económica, cultural, civil y política, con miras a alcanzar la tan anhelada paz en nuestro país.

---

⁷⁵ Recordemos que en el contexto de la implementación de la PDSD como ya lo analizamos en el I capítulo de esta investigación se vinculó a la sociedad civil al conflicto armado, hecho que violó el DIH

Bibliografía

- Abierta, V. (2014). ¿Uribe llegó a la Presidencia con el apoyo de los ‘paras’? *Verdad Abierta*, 2.
- Amad, Y. (16 de Marzo de 2003). VENEZUELA NO ACEPTA DECLARAR TERRORISTAS A LAS FARC. *El Tiempo*, pág. 1.
- Amnistía, I. (s.f.). *amnesty.org*. Recuperado el 11 de Noviembre de 2017, de *amnesty.org*: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/armas/>
- Andrea Podestá, M. H. (2017). *Flujos Financiero Ilícitos en América Latina y el Caribe*. Santiago : Naciones Unidas .
- Arenas, H. (2018). *Contra el miedo: conversaciones con Alirio Uribe Muñoz*. Bogotá D.C: Icono.
- Aristòteles. (2003). *Ètica a Nicòmaco*. Madrid : Mestas .
- Aristòteles. (2005). *La Política* . Madrid: Patricio Azcàrate .
- Atehortúa Cruz, A. L. (2012). EL BANCO MUNDIAL Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN COLOMBIA. *Red Iberoamericana de Pedagogía* (pág. 5). Cali: Universidad Autonoma de Occidente.
- Benitez, J. (03 de Mayo de 2018). *Sputnik Mundo* . Recuperado el 15 de Octubre de 2018, de Sputnik Mundo : <https://culturizando.com/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi/>
- Bernays, E. (2008). *Propaganda* . España : Melusina .
- Buitrago, F. L. (2003). La Doctrina de Seguridad Nacional. *Revista de Estudios Sociales*, no. 15, 14.
- Buitrago, F. L. (2006). La politica de seguridad democratica 2002-2005. *Anàlisis político* N° 57, 4.

- CCJ, C. C. (2007). *Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derechos Internacional humanitario* . Bogotá : Comisión Colombiana de Juristas .
- CEPAL . (Mayo de 2014). Equidad y protección judicial del derecho a la salud en Colombia. Santiago de Chile.
- CEPAL. (1995). *Seis Reformas de Política Pública* . Recuperado el 21 de Septiembre de 2015, de Seis Reformas de Política Pública :
<http://archivo.cepal.org/pdfs/1995/S9500013.pdf>
- CEPAL. (2002). *Determinantes de la pobreza en Colombia. Años recientes* . Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL. (2007). *Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL. (2009). *Panorama Social de América Latina* . Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL. (s.f.). *Colombia* . Recuperado el 17 de 9 de 2015, de ColombiaL:
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/4524/colombia.htm>
- Chomsky, N. (2003). *Piratas y Emperadores: Terrorismo internacional en el mundo hoy* . Barcelona : Ediciones B, S.A.
- CNMH, C. N. (2012). *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá D.C: Ana Cecilia Calle, Ana María Carvajal, Francisco Thaine, Tania Intriago y Patricia Nieto.
- Colmenares, J. S. (2003). *Economía y Desarrollo Volumen 2 Número 2*. Recuperado el 21 de Septiembre de 2015, de Economía y Desarrollo Volumen 2 Número 2 :
<http://www.fuac.edu.co/revista/I/I/dos.pdf>
- Colombia, R. d. (1886. Artículo 41). Constitución de la República de Colombia. Bogotá.

- Colombia, R. d. (16 de Junio de 2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática.
- Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia: Presidencia de la República.
- Coronel, D. (2013). Una verdad secuestrada . *Semana*, 1.
- Cruz, J. M. (2010). Estado y Violencia Criminal en América Latina . *Nueva Sociedad* , 12.
- Damasio, A. (2003). *En busca de Espinosa* . Barcelona : ed-critica.es.
- Doob, L. W. (1979-1982). Goebbels y sus principios propagandísticos . En M. d. Moragas, *Sociología de la Comunicación de Masas 2a Edición* (págs. 472-495). Barcelona: Gustavo Gili.
- Durkheim, E. (2001). *Las reglas del método sociológico* . México: Fondo de cultura económico .
- Echavarría, J. L. (2013). Los Muertos de la Ley 100 "Prevalencia de la Libertad Económica sobre el Derechos Fundamental a la Salud: una razón de su enificación . Medellín .
- Enciclopedia Jurídica* . (s.f.).
- Española, R. A. (2018). Diccionario de la Lengua Española . *Terrorismo* . Real Academia Española.
- (Enero de 2017). Recuperado el 11 de Octubre de 2017, de Repositorio CEPAL:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40921/1/S1601230_es.pdf
- Espectador, E. (9 de Enero de 2010). El Poder Político de Dios. *El Espectador* , pág. 1.
- Fierro, M. (2014). Álvaro uribe vélez populismo y neopopulismo. *Análisis Político* , 4.
- Freud, S. (1921). *Psicología de la masas y análisis del yo*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1929). *El malestar en la cultura* . Buenos Aires : Amorrortu.
- Freud, S. (1932-36). *¿Porqué la guerra?* Buenos Aires: Amorrortu.

- Frias, L. (2012). Seguridad Democrática y Derechos Humanos. *Seminario Internacional* (pág. 147). Santiago de Chile: Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
- Fuentes, C. (2004). La inevitable "mano dura": sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile. *SCIELO*, 2.
- Giorgi, A. d. (2005). *Tolerancia Cero: estrategias y prácticas de la sociedad de control*. Barcelona: Virus.
- Giraldo, J. (2015). *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: CHCV.
- Gramsci, A. (1981). *Cuadernos de la Carcel*. Mexico : Ediciones Era, S.A.
- Gramsci, A. (2000). *Antonio Gramsci* . Recuperado el 7 de Septiembre de 2015, de Antonio Gramsci : <http://www.portalalba.org/biblioteca/GRAMSCI%20ANTONIO.%20Cuadernos%20de%20la%20Carcel%206.pdf>
- Històrica-CNMH, C. N. (2014). *Desplazamiento forzado*. Bogotá: CNMH.
- Hobbes, T. (1588 – 1679). *Leviatàn*. <http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000555.PD>.
- Jaramillo, R. (1997). Modernidad y Moralidad en Colombia. *Cuestiones de Filosofía*, 20.
- Jean-Philippe, L. (1998). Principios Rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 6.
- Jerez, A. C. (31 de 08 de 2003). LOS NIÑOS NECESITAN ALGO MÁS QUE UN CUPO. *El Tiempo*.
- Juristas, C. C. (2007). *Colombia 2002-2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario* . Bogotá D.C: Comisión Colombiana de Juristas.

- Juristas, C. c. (2008). *Defender y proteger la vida*. Bogotá: CLACSO.
- Kant, I. (1921). *Fundamentación de la Metefísica de las Costumbres* . Madrid : Pedro M Rosario Barbosa .
- Kelling, J. Q. (Marzo de 1982). Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios . *The Atlantic Monthly*, pág. 13.
- Kelling, J. Q. (s.f.). *Ucipfg*. Recuperado el 10 de Julio de 2017, de Ucipfg:
<http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-09/Unidad-04/lecturas/2.pdf>
- Leongómez, E. P. (1991). *Las FARC (1949-1966) De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha* . Bogotá : tecer mundo editores .
- Litterio, A. R.-L. (Agosto de 2019). *Corte Interamericana de Derechos Humanos* .
 Recuperado el 18 de Marzo de 2017, de Corte Interamericana de Derechos Humanos : <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r39081.pdf>
- López, J. (1996). LA PRESENCIA DE CARL SCHMITT. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 139-168.
- Luis Quintero, J. V. (Julio de 1998). *Biblioteca Luis Angel Arango*. Recuperado el 21 de Septiembre de 2015, de Biblioteca Luis Angel Arango:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrialatina/014.htm>
- Manz, B. (2008). *Centro América (El Salvador, Honduras y Nicaragua) Patrones de Violación a los Derechos Humanos*. Berkeley : ACNUR.
- Martha Lucía Restrepo, E. R. (2008). El país como una marca. *CESA*, 41.
- Mauricio Archila, A. D. (2002). *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*. Bogotá: CINEP.
- Mauricio Archila, M. G. (2019). *Cuando la copa de rebosa* . Bogotá : CINEP/PPP.
- MEN), M. d. (2009). *Deserción Estudiantil*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

- Molina, J. (2011). *Del Cálculo de los Discursos al Goce del Fuego Cruzado*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Montilla, O. (5 de 8 de 2010). *Biblioteca Pleyades* . Recuperado el 4 de 8 de 2019, de Biblioteca Pleyades:
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol76.htm
- Neto, P. d. (2008). La policía comunitaria en Sao Paulo: problemas de implementación y consolidación . En P. d. Neto, *Ensayos sobre seguridad ciudadana* (págs. 243-274). Quito, Ecuador: Fernando Carrion .
- Noumen (Dirección). (2013). *LA VENTA DE ARMAS EN " ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA "* [Película].
- (PNUD), P. d. (1994). *Informe sobre Desarrollo Humano* . México D. F: Fondo de Cultura Económica .
- ONU, A. G. (18 de 12 de 1972). Medidas para prevenir el terrorismo internacional. *Resolución 30/34*. Sesión Plenaria: ONU.
- Orozco, G. (2005-2006). El concepto de la seguridad en la teoría de las relaciones internacionales. *CIDOB*, 164.
- Pastor, J. (s.f.). *Javi Pastor*. Recuperado el 4 de Septiembre de 2019, de Javi Pastor:
<https://www.javipastor.com/los-11-principios-de-goebbels-aplicados-al-copywriting/>
- PEÑA, E. (12 de 2 de 2006). 'A Uribe lo que es de Uribe', por José Obdulio. *El Tiempo*, págs. 1-10.
- Petroni, C. (s.f.). Brasil: Vuelven las milicias paramilitares; ocupan ya casi cien favelas. *Izquierdapuntoinfo*, pág. 1.

Planeación, D. N. (2003). *Departamento Nacional de Planeación*. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de Departamento Nacional de Planeación:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd.pdf>

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, D. y. (2003). *El Embrujo Autoritario: Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá D.C: Natalia Paredes Hernández.

PNUD. (2009-2010). *Informe de Desarrollo Humano para América Central* . Colombia: PNUD.

PNUD. (2009-2010). *Informe sobre Desarrollo Humano para América Central* . impreso en Colombia: Marcela Giraldo.

PNUD. (s.f.). *Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre*. Recuperado el 16 de Septiembre de 2015, de http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Erradicar_la_pobreza_extrema_y_el_hambre.pdf

Prensa-Colectivo. (2017). *Condenan a Jorge Noguera por concierto para delinquir al interior del DAS*. Bogotá : Colectivo de abogados.

Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional . (16 de Junio de 2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática* . Recuperado el septiembre de 2015, de Política de Defensa y Seguridad Democrática : <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

Presidencia, P. (30 de 11 de 2003). *Álvaro Uribe Vélez*. Recuperado el 24 de Marzo de 2019, de Álvaro Uribe Vélez: <http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/discurso-del-presidente-uribe-en-48-consejo-comunal-de-cali>

- Psicoanálisis, D. d. (1885-1956). *El Ortiba* . Recuperado el 15 de 04 de 2019, de El Ortiba : <http://www.elortiba.org/old/dicpsi/no.html>
- Pueblo, D. d. (s.f.). *Sistema General de Pensiones, Regimen de Prima Media*. Bogotá D.C.: Defensoria del Pueblo.
- Ramirez, N. M. (2011). *Álvaro Uribe Vélez y el liderazgo racional-carismático*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- REUTERS, A. . (17 de septiembre de 2002). Campesinos de Colombia contra las fumigaciones. Bogotá , Bogotá , Colombia.
- REUTERS, A. . (17 de 9 de 2002). Campesinos de Colombia contra las fumigaciones. Bogotá , Colombia , Cundinamarca .
- Ricoeur, P. (2007). *Una interpretación de la cultura* . México D.F: Siglo XXI.
- Roa, É. G. (21 de febrero de 2007). ¿A quién le reza el presidente Álvaro Uribe? *Semana*, 1.
- Robin, C. (2004). *El miedo: historia de una idea política* . México: Fondo de cultura económica .
- Robin, C. (2009). *El Miedo: Historia de una idea política* . México : Fondo de cultura económico .
- Rousseau, J.-J. (1972). *El Origen de la Desigualdad entre los Hombres*. Mexico D.F: Grijalbo S.A.
- Salazar, A. (1998). La Cola del Lagarto. En A. S. Jaramillo, *La Cola del Lagarto* (pág. 78). Medellín: Corporación Región.
- Sarmiento Anzola, L. (s.f.). *Equipo Nizkor*. Recuperado el 22 de 9 de 2015, de Equipo Nizkor: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/sarmiento.html#cargos>

- Schmitt, C. (1963). *El Conceto de lo Político*. Recuperado el 15 de Noviembre de 2018, de Campusmoodle: [www.campusmoodle.proed.unc.edu.ar › pluginfile.php › mod_folder › content](http://www.campusmoodle.proed.unc.edu.ar/pluginfile.php/mod_folder/content)
- Schmitt, C. (2009). *El Conceto de lo Político*. Madrid : Alianza Editorial.
- Semana. (2008). Fe en el Poder. *Semana*, 1.
- Semana. (2008). Fe en el Poder. *Semana*, 1.
- Semana. (2011). Jorge Noguera, condenado a 25 años de cárcel. *Semana*, 1.
- Semana, R. (2013). Colombia, el sexto país con más católicos. *Semana*, 1.
- Serge. (1979, 1982). En M. Moragas, *Sociología de la Comunicación de Masas*. Barcelona : Gustavo Gili. 2ª edición.
- Tabares, J. F. (2006). *"estoy cargado de tigre"*. Bogotá: Intermedio.
- Thoumi, F. (2013). La Marihuana Recreativa en los de Colorado y Washington y la Incapacidad del Gobierno de Estados Unidos para hacer Cumplir las Leyes Federales y las Convenciones de Drogas dentro de su País. *Colombia Internacional* , 219-248.
- Tiempo, A. e. (24 de Marzo de 2003). COLOMBIA RECIBE PREMIO POR APOYO A GUERRA EN IRAK. *El Tiempo*, pág. 1.
- TIEMPO, R. E. (12 de Febrero de 2003). 7 PAÍSES DECLARAN TERRORISTAS A FARC. *El tiempo* , pág. 1.
- Tiempo, R. e. (8 de Abril de 2007). El año de los desplazados . *El Tiempo*, pág. 1.
- Tokatlian, J. (2001). Colombia, el Plan Colombia y la Región Andina ¿Imposición o Concreción? . *Nueva Sociedad*, 126-143.
- Toscano, Ò. M. (s.f). Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo: estado y reformas económicas y sociales en Colombia (1934-1938, 1942-1945). Colombia .

- Tzvetan, T. (s.f.). *Docslide*. Recuperado el 21 de 9 de 2015, de Docslide :
<http://myslide.es/documents/la-vida-en-comun-tzvetan-todorov-cap-2.html>
- Uribe, A. (2002). *Manifiesto Democrático - 100 puntos Álvaro Uribe Vélez*.
 Recuperado el 20 de Julio de 2018, de Ministerio de Educación:
https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf
- Uribe, À. (11 de Noviembre de 2003). *Presidencia de la república: Colombia*.
 Recuperado el 14 de Octubre de 2018, de Presidencia de la república: Colombia:
http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/noviembre/11/18102005.htm
- Verdadabierta. (23 de 9 de 2011). *verdadabierta.com*. Recuperado el 8 de 2 de 2019, de verdadabierta.com: <https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/>
- Woo, E. (03 de March de 2012). James Q. Wilson dies at 80; pioneer in 'broken windows' approach to improve policing. *Loa Angeles Times* , pág. 1.
- Zizek, S. (2003). *El Sublime Objeto de la Ideología* . Buenos Aires: Siglo XXI editores Argentina.
- Zizek, S. (2010). *Sobre la Violencia. Seis reflexiones marginales* . Buenos Aires: paidós .

Referencias bibliográficas no citadas

- Agamben, G. Badiou, A. Bensaid, D. Brown, W. Nancy, J-L. Rancière K. Ross, K. Zizek S, Democracia, ¿en qué estado? Prometeo, 2010, Buenos Aires.

Arendt Hannah, La condición humana, Paidós 2005. [En línea]
[http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_p
ara_imprimir/GMEP01nuevo2/TEMA_1_NO_DEJES_LEER_3.pdf](http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_p ara_imprimir/GMEP01nuevo2/TEMA_1_NO_DEJES_LEER_3.pdf)

Arendt Hannah, los orígenes del totalitarismo. Taurus, España, 1998.

¡BASTA YA! Colombia memorias de guerra y dignidad, Informe general grupo
de memoria histórica [En línea] [file:///C:/Users/Carmen/Downloads/basta-ya-
memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Carmen/Downloads/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto%20(1).pdf)

Barbero Jesús Martín, De la Roche López Fabio y Jaramillo, Jaime Eduardo,
Cultura y Globalización, Universidad Nacional de Colombia, 1999.

Barber R, Benjamin, El imperio del Miedo, Paidós, España, 2004.

Bauman, Zigmunt, La Globalización. Fondo de Cultura Económico, Argentina,
1999.

Bauman, Zigmunt, Miedo Liquido, la sociedad contemporánea y sus temores,
Paidós, España, 2007.

Beltrán Villegas, Miguel Ángel, Colombia: de la “Seguridad Democrática” a la
“Política Integral de la Seguridad y Defensa para la Prosperidad”. Revista
conflicto social N° 9. 2013

Beltrán Villegas, Miguel Ángel, Colombia y América Latina: historia de
disidencias y disidentes. Editorial el perro y la rana, caracas, 2009.

Beltrán Villegas, Miguel ángel, la sociología frente a los espejos del tiempo:
Modernidad, Postmodernidad y Globalización, Universidad EAFIT, Medellín,
2005.

Benjamin Walter, Para un crítica de la violencia, [En línea]
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/benjamin/benjamin_critica_violencia.pdf

Bericat Alastuey, Eduardo, La Sociología de la Emoción y la Emoción de la Sociología. Universidad de Málaga, departamento de sociología. [En línea]
<http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25603/25437>
Buenos Aires. 2010

Carlos Figari y Adrián Scribano, Cuerpo (s) subjetividad (es) y conflicto. Hacia una sociología de los cuerpos y la emociones desde Latinoamérica. Ciccus 2009.

Contreras Joseph, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las sombras) Editorial, Oveja negra. Bogotá Colombia, 2002.

Convención Interamericana contra el Terrorismo, 3 de Julio de 2002.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre 1969.

Corte constitucional de Colombia, comunicado 07 de abril de 2010, Klein Vs Rusia [En Línea]
<http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2007%20de%20abril%20de%202010%20-%20Klein%20Vs%20Rusia.php>

Foucault Michael, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Editores siglo XXI, Argentina 2002.

Foucault Michael, Vigilar y castigar, siglo XXI editores, Argentina 2002.

Gramsci Antonio, Cuadernos de la cárcel Tomo I. Ediciones Era, México, Colombia, 1975.

Gramsci, Antonio y la Realidad Colombiana, editor, Hernán Suarez, ediciones foro Nacional por Colombia, Bogotá 1991.

Hobbes, Thomas, del ciudadano, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1966.

Heidegger Martín, Ser y Tiempo [En Línea] <http://espanol.free-ebooks.net/ebook/Ser-y-el-Tiempo/pdf/view>

Habermas Jürgen, El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos [En línea] <http://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v55n64/v55n64a1.pdf>

Herrera Zgaib (compilador), Hegemonías y Contrahegemonías en la subregión Andino-amazónica, primer seminario internacional Antonio Gramsci, editorial Kimpres Ltda. Bogotá, 2009.

Jaramillo Uribe, Jaime, El pensamiento Colombiano en el siglo XIX

Kant Immanuelle, La Paz Perpetua [En línea] <http://www.biblioteca.org.ar/libros/89929.pdf>

Lafevre Georges, El gran pánico de 1789, La revolución francesa y los campesinos. Paidós, 1986.

Leal Buitrago, Francisco, La política de seguridad democrática 2002 – 2005.

Leal Buitrago, Francisco, Universidad de los Andes, revista de estudios sociales [En línea] <http://res.uniandes.edu.co/view.php/476/view.php>

Leal Buitrago, Francisco, La Seguridad Nacional a la deriva., del frente nacional a la posguerra fría. Alfa Omega, Colombia, 2002.

Lievano Aguirre, Indalecio, Los grande Conflictos Sociales y Económicos de nuestra Historia, ediciones, tercer mundo, Bogotá, 1974.

Molina, Gerardo, Las Ideas Liberales en Colombia 1849 -1914, ediciones tercer mundo, Bogotá, 1970.

Montaña Cuellar, Diego, Colombia País formal y País Real, editorial platina, Buenos Aires, Argentina, 1963.

Observatorio de derechos humanos y derecho humanitaria, Libertad: rehén de la seguridad democrática, editorial Códice Ltda. Bogotá. 2006.

Platón, La Leyes.

Plan Nacional de Desarrollo, hacia un Estado de desarrollo, departamento nacional de planeación [En línea]
<https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/PND.pdf>

Política de Defensa y Seguridad Democrática, Republica de Colombia [En línea]
<http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

Raffin, Marcelo, La experiencia del horror, subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y posdictaduras del cono sur. Colección tesis doctoral, Editores del puerto. Buenos Aires, 2006.

Reguillo Rossana, La construcción social del miedo en la ciudad. [En línea]
<http://es.scribd.com/doc/97232848/Rossana-Reguillo-La-Construccion-Social-Del-Miedo> <http://www.biblioteca.org.ar/libros/89929.pdf>

Scribano Adrian, Sociología de los cuerpos/emociones. Revista Latinoamericana sobre cuerpos, emociones y sociedad N° 10 año 4 2010.

Touraine Alain, ¿QUE ES LA DEMOCRACIA? Fondo de cultura económica México, 1994.